

REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA

Santiago de Cali, catorce (14) de septiembre de dos mil diez (2.010)

Radicación No. : 2004/5560-00
Acción : REPARACION DIRECTA
Demandante : MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO Y OTROS
Demandado : NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES "INCO" - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Magistrado Ponente : FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

ANTECEDENTES :

Por conducto de apoderado judicial, los señores MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO, JOSE LEONARDO CELIS SEGURA, y LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, quien obra en nombre propio y en el de sus hijos menores CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA y JUAN DAVID SALAZAR SEGURA; y HUMBERTO SALAZAR CABAL quien obra en su nombre y en el de su menor hijo JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, mayores de edad, vecinos de Cali, en ejercicio de la acción de REPARACIÓN DIRECTA, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, demandan a LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES "INCO" y el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en orden a obtener las siguientes

DECLARACIONES:

- Que se declare a LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES "INCO" y al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, administrativa y patrimonialmente responsables de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a



los demandantes con la muerte del señor CARLOS ANDRÉS SEGURA QUINTERO, en la vereda la Garza del Municipio de Dagua, en la vía que conduce a Buenaventura.

- Que en virtud de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas, en su condición de entes administrativa y patrimonialmente responsables, a pagar a favor de los actores, las siguientes indemnizaciones:

*Por concepto de Perjuicios Morales:

- MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO, en calidad de abuela, la suma de doscientos (200). s.m.l.m.v.
- LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, en calidad de madre, la suma de doscientos (200). s.m.l.m.v.
- HUMBERTO SALAZAR CABAL, en calidad de "padre de crianza", la suma de doscientos (200). s.m.l.m.v.
- JOSE LEONARDO CELIS SEGURA, en calidad de hermano, la suma de doscientos (200). s.m.l.m.v.
- CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA, en calidad de hermana, la suma de doscientos (200). s.m.l.m.v.
- JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, en calidad de hermano, la suma de doscientos (200). s.m.l.m.v.

*Por concepto de Perjuicios Materiales:

- En la modalidad de lucro cesante:

- Para la señora MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO, la indemnización debida o consolidada y la futura o anticipada, de lo que resulte de aplicar las correspondientes formulas matemáticas y financieras ordinariamente utilizadas en estos casos, en razón de los ingresos monetarios que le proporcionaba su nieto CARLOS ANDRÉS SEGURA QUINTERO, para la atención de sus gastos y necesidades personales y que ascendían para la época del deceso a \$200.000.00 mensuales.

- Para LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA, CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA, JUAN DAVID SALAZAR SEGURA y HUMBERTO SALAZAR CABAL, para cada uno de ellos, la indemnización debida o consolidada y la futura o anticipada, de lo que resulte de aplicar las correspondientes formulas matemáticas y financieras ordinariamente utilizadas en estos casos, en razón de los ingresos monetarios que les proporcionaba CARLOS ANDRÉS SEGURA QUINTERO, para la atención de sus gastos y necesidades personales y que ascendían para la época del deceso a \$1'300.000.00 mensuales.

- Que la estimación del lucro cesante para cada uno de los demandantes se haga con base en el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2003, fecha para la cual CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO falleció, caso en el cual también han de aplicarse las formulas matemáticas y financieras pertinentes para establecer el lucro cesante pasado y el futuro; el primero desde la fecha del deceso hasta la respectiva sentencia y el segundo desde la emisión de la misma hasta la fecha estimada probable de vida de cada uno de los reclamantes y a la fecha en que la menor alcance la mayoría de edad.

- Que se ordene a las entidades demandadas, dar cumplimiento a la sentencia bajo los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Los **HECHOS** expuestos por la apoderada judicial de la parte actora como fundamento de las pretensiones, se sintetizan de la siguiente forma:

PRIMERO: El día 16 de octubre de 2003, el señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, transitaba por la carretera que conduce de Cali a Buenaventura, en el vehículo distinguido con las placas WTB 151, cuando a la altura de la vereda La Garza del Municipio de Dagua, tras encontrar en la vía fragmentos de rocas desprendidos del talud y salirse del vehículo para removerlas y poder así proseguir la marcha, fue sorprendido por un alud de rocas que hicieron impacto en su cráneo, provocándole la muerte, horas después, en el Hospital José Rufino Vivas de Dagua, por un trauma craneoencefálico severo.

SEGUNDO: La muerte del joven CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, se produjo como consecuencia del descuido, negligencia e injustificada falla en el mantenimiento de las carreteras por parte de las entidades demandadas ante la evidente realidad de riesgo que representa, desde años atrás la vía que de Cali conduce a Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza del Municipio de Dagua, generándose con este hecho incuantificables perjuicios, tanto de orden material como morales a sus familiares que no sólo contaban con su apoyo económico para sobrevivir, sino que además fueron terriblemente afectados por la pérdida de su hijo, hermano y nieto.

TERCERO: La carretera Cabal-Pombo (Cali a Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza del municipio de Dagua), por el lugar donde sucedió el accidente, se encontraba sin señalización de derrumbes o restricción que advirtiera la existencia del peligro sobreviniente y/o el paso restringido de vehículos, actividades que corresponden a los entes demandados.

CUARTO: El occiso había nacido el 25 de octubre de 1983, era hijo de la señora LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, quien convive en unión marital de hecho desde hace más



de 11 años con el señor HUMBERTO SALAZAR CABAL; así mismo era hermano de JOSE LEONARDO CELIS SEGURA, CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA y JUAN DAVID SALAZAR SEGURA; y nieto de EDELMIRA QUINTERO QUINTERO.

QUINTO: El joven CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, convivió siempre bajo el mismo techo, con su señora madre LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, sus hermanos JOSE LEONARDO CELIS SEGURA, CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA y JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, y en los últimos 10 años de su vida con el compañero permanente de su madre, señor HUMBERTO SALAZAR CABAL, a quien consideró como un verdadero padre, conformando una familia donde el amor y la solidaridad eran el denominador común del diario vivir.

SEXTO: CARLOS ANDRES al momento de su deceso, laboraba como conductor de camión o tracto-mula teniendo unos ingresos mensuales de aproximadamente \$1'000.000.00, los cuales distribuía entre su abuela, su madre, hermanos y padre de crianza a quienes ayudaba económicamente.

TRAMITE

Por auto del 7 de marzo de 2005, se ordenó subsanar la demanda por adolecer de algunas falencias allí indicadas (fls. 50, c. ppal.). No fue corregido el libelo demandatorio, pero mediante auto del 13 de mayo de 2005, se decidió que no ameritaba rechazo de la demanda, por lo cual la misma fue admitida, providencia que fue debidamente notificada al señor Procurador Judicial No. 20 en representación del Ministerio Público y a las entidades demandadas.

Mediante apoderado judicial y dentro del término legal, el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (fls. 71-75, c. ppal.); el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO- (fls. 241-259, lb.); el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS- (fls. 298-307, lb.); el MINISTERIO DE TRANSPORTE (323- 326, lb.) y la compañía QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A. (fls. 370-375, lb.), contestaron el libelo demandatorio y formularon excepciones de fondo.

La apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-, en memorial separado (fls. 306-307, c. ppal.), llamó en garantía a la compañía QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A., con fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100000169, con vigencia del 1 de octubre de 2003 al 1 de enero de 2005. Llamamiento que fue aceptado mediante auto del 12 de septiembre de 2006.

Surtido el período probatorio, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, derecho del cual hicieron uso las partes en término legal. Los respectivos escritos obran



en el plenario a fls. 410-421, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 422-427, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-; 428-430, INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-; 431-434, p. demandante; 435-442, NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE; 443-447, QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.

El señor Agente del Ministerio Público Procurador Judicial No. 20 delegado ante la Corporación no emitió concepto. (Informe secretarial, fl. 448, ib.).

Como se ha cumplido el trámite correspondiente y no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, ni impedimento procesal, se procede a resolver previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Se ejercita en este proceso la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que es la que tiene toda persona interesada, para demandar la reparación del daño originado en los hechos, omisiones u operaciones de la Administración Pública, o en la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. También cuando el perjuicio se origine en actividades de la Administración ceñidas a la ley, pero, que causen perjuicio que el lesionado no hubiere estado obligado a soportar.

Esta acción halla hoy su fundamento constitucional en los artículos 2º (inciso segundo) y 90 de la Constitución Política. El primero de ellos dispone que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." El segundo impone al Estado la obligación de indemnizar todo daño originado en la actividad administrativa cuyos efectos los asociados no tengan el deber legal de soportar.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA:

La demandante invoca como violadas disposiciones de stirpe constitucional y legal contenidas en los siguientes artículos: 2, 6, 11, 13, 90 y 123 de la Constitución Política; 113 del Código Nacional de Tránsito Terrestre; invoca además jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

Sostiene el apoderado de la parte demandante, que se vulneró el artículo 113 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que dispone: "Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las



pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine.

Aduce, que en el sub-lite se dan todos los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, bajo el título de imputación de falla del servicio, toda vez que se presenta una falta de conservación de la vía que de Cali conduce a Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza del Municipio de Dagua; vía que dice, debió ser objeto de un rápido mantenimiento y reparación por el peligro permanente que ha presentado para los transeúntes, ante los constantes derrumbes que allí se presentan. Que el daño está representado en el fallecimiento del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, y en los perjuicios sufridos por quienes resultaron afectados por tal suceso.

RAZONES DE LA DEFENSA.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

El apoderado judicial del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, se opuso a la declaratoria de las pretensiones, manifestando, que se había presentado un caso de fuerza mayor o caso fortuito, imprevisto que no es posible resistir, es decir, un acontecimiento extraño, súbito e inesperado, de conformidad con el artículo 64 del Código Civil, por lo cual señaló, tal hecho natural no es imputable al ente departamental, pues no ocurrió con culpa del mismo y tampoco había podido impedir su acaecimiento.

Sustentó así las excepciones propuestas:

- INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN: Por no ser de aplicación para el caso el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo contra el Departamento del Valle del Cauca.

-FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA: Teniendo en cuenta que la carretera Cali – Buenaventura, es del orden nacional, y su mantenimiento, conservación, reparación y señalización corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS-.

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-

Aduce, que el INCO administra la concesión del proyecto de infraestructura vial Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, contrato No. 005 de 1999, que sus funciones según el art. 3 del Decreto 1800 de 2003, se circunscribe a obtener la participación del capital privado para la construcción, mantenimiento, operación de infraestructuras de transporte, pero no administra directamente ninguna infraestructura de transporte, de tal modo, que si la infraestructura no está concesionada no puede estar a cargo del INCO.



Que la infraestructura de transporte concesionada no ingresa al patrimonio del INCO, ni ello es lo pretendido, pues la titularidad de las mismas es del INVIAS, su transferencia al INCO tiene como única y exclusiva finalidad que éste pueda proceder a su entrega al concesionario; en síntesis, afirma, el INVIAS es el propietario de la totalidad de las infraestructuras viales nacionales, titularidad que no pierde al ser concesionada una vía, pues lo único que ocurre allí es la entrega de la tenencia y administración de la misma al INCO, a través del concesionario, de conformidad con los artículos 16, 17 y 18 del Decreto No. 1800 de 2003 y 26 del Decreto No. 2056 de 2003.

Explica, que en su calidad de tenedor de la vía, el concesionario debe ejercer las actuaciones correspondientes para mantenerla en buen estado, conforme a lo pactado en el contrato de concesión, la vigilancia del mismo se efectúa por intermedio de la interventoría; así mismo resalta que el INCO sólo asume la competencia para ejercer la vigilancia y supervisión de los contratos de concesión a partir de su fecha de creación.

Que la parte actora parece creer que existe una responsabilidad solidaria entre los entes y personas jurídicas demandados, sin tomarse la molestia de sustentar tal afirmación, por el contrario, como esa responsabilidad solidaria no existe respecto del INCO, en virtud del contrato de concesión, en la medida que tal como lo indica el Código Civil en sus artículos 1568 y 2344, tal solidaridad debe estar prevista en la ley y ello no se indica en parte alguna del Decreto No. 1800 de 2003, ni tampoco puede deducirse de la producción de un hecho dañoso, porque en ese evento todas las entidades que se dice responsables en forma solidaria debieron haber concurrido a su producción y, ello, en este evento, es un imposible material y jurídico.

Sustentó las excepciones formuladas en la siguiente forma: .

***INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVA:** En el presente caso se endilga una "omisión culposa" al INCO, derivada de su falta al deber de vigilancia en la ejecución del contrato de concesión No. 0005 de 1999, siendo esto un deber que la administración cumple a través de la interventoría; Que el tramo a que hace referencia la demanda (vía de Buenaventura a la altura de la Vereda la Garza del Municipio de Dagua); no hace parte del corredor vial concesionado, tal como lo describe el contrato aludido.

Que la imputación de responsabilidad que se efectúa se hace a título de falla en el servicio, siendo una carga de la parte actora probar la existencia de un daño antijurídico, y que este es imputable al INCO, lo que no se encuentra siquiera explicado en la demanda.

Añade, que los hechos que originan la demanda acaecieron el 16 de octubre de 2003, fecha para la cual el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-, apenas había



sido creado y sus derechos y obligaciones se circunscriben en la administración de un negocio jurídico que realiza un concesionario a cuenta y riesgo, así las cosas la entidad no puede omitir un deber funcional cuando a la fecha en que presuntamente lo omitió esa entidad no existía, es decir, no se puede no cumplir un deber y con ello causar un daño antijurídico, cuando ni siquiera ha nacido al mundo jurídico.

***FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA:** El INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-, se creó mediante Decreto No. 1800 del 26 de junio de 2003, esto es meses antes de la ocurrencia de los hechos que originan la demanda, consecuentemente, no es posible imputarle omisión alguna y menos puede ser considerado sujeto pasivo de esta acción judicial, ya que el Contrato de Concesión No.005 del 29 de enero de 1999, fija al concesionario la obligación de realizar por su cuenta y riesgo los estudios, diseños, construcciones, rehabilitaciones, mejoramiento, operación, el mantenimiento, la prestación del servicio y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS, dadas en concesión, para la cabal ejecución del proyecto denominado MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA (cláusula 2 del contrato No. 005 de 1999), y, por lo tanto, éste asume el riesgo y la responsabilidad directamente frente a dicha actividad tanto frente al Estado como a terceros, entenderlo de manera distinta dejaría sin efecto el concepto a su cuenta y riesgo que expresamente prescribe el numeral 4 del art. 32 de la Ley 80 de 1993.

***EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Para atribuir responsabilidad extracontractual al Estado, es necesario que exista relación de causalidad, bien por omisión o por acción del agente responsable de evitar; y en atención a que el sitio a que hace referencia la demanda no se encuentra dentro del proyecto vial concesionado, no era el INCO la entidad que tenía la capacidad de realizar una conducta omisiva y mucho menos activa, sino el INVIAS en quien se centraba el deber de vigilancia y control de la ejecución de la obra a cargo de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca.

***CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA:** La conducta irregular de la víctima es la causa eficiente del daño que sufrió CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, como ha quedado evidenciado y resulta un despropósito y un verdadero abuso del derecho propio querer obtener un provecho de su propio comportamiento irregular y negligente. Añade que la víctima frente al obstáculo que genera peligro no actuó conforme a los preceptos legales y constitucionales citados.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-

Arguye, que de conformidad con el hecho doce de la demanda, el occiso CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, de forma temeraria y si ningún asomo de preservación



de la vida, en una vía donde estaban cayendo rocas debido a la topografía montañosa de la zona, se bajó sin ninguna protección a moverlas, para poder movilizar el vehículo en el que se transportaba. Que tal como se prueba con los recortes de periódicos aportados por la demandante, la vía a Buenaventura, es de una topografía montañosa donde ocurren frecuentes derrumbes, hecho que es de conocimiento público, por lo tanto, la acción del occiso, fue temeraria e irresponsable, ya que observando que la vía estaba llena de rocas, no debió bajarse sin ninguna protección a moverlas, pues era factible que siguiera su caída.

Aduce de otro lado, que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-, ejecutaba para la fecha en que acaecieron los hechos, en el sector donde ocurrió el accidente, los siguientes contratos:

- RV-035-2003, con la "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI-LOBOGUERRERO LTDA.", cuyo objeto es el mantenimiento rutinario de la vía.
- RV-033-2003, con el Ingeniero "NAPOLEON CABRA AMADO", cuyo objeto es la administración del Mantenimiento Vial.
- RV-026-2003, con el Ingeniero "ALVARO GARCIA PARRA", cuyo objeto es la interventoría de la carretera Cali-Loboguerrero.
- RV-209-2003, suscrito con el Ingeniero "ALVARO HERNAN HORMAZA", cuyo objeto es el mantenimiento de la carretera Cali- Loboguerrero.

Afirma, que el INVIAS cumplía con sus funciones, que la causa del accidente obedeció a la culpa exclusiva de la víctima, sin que exista relación de causalidad entre el hecho y la falla del servicio respecto a dicha entidad.

Agrega, que hoy en día los elementos de la responsabilidad son cuatro (sic): Una actuación administrativa, un daño o perjuicio, un nexo causal y la imputabilidad del daño a la administración.

Sustentó las excepciones formuladas bajo los siguientes argumentos:

***INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD:** Teniendo en cuenta que la vía donde ocurrieron los hechos objeto de la demanda estaba siendo atendida en forma diligente por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-, a través de contratos y el hecho que originó el accidente, no ocurrió por acción u omisión de la entidad.

***CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA:** El hecho doce de la demanda demuestra que, el occiso CARLOS ANDRES, de forma temeraria y si ningún asomo de preservación de la vida, en una vía donde estaban cayendo rocas debido a la topografía montañosa de la zona, se bajó sin ninguna protección a moverlas, para poder movilizar el vehículo en el que se transportaba. Acción temeraria e irresponsable, toda vez que al observar que la



vía estaba llena de rocas, no debió moverlas, pues era factible que siguiera una nueva caída.

***COMPENSACIÓN:** Solicita que si a los demandantes se les hubiese cancelado sumas de dinero por el accidente, estas sean descontadas del valor de la sentencia.

***GENÉRICA:** La fundamenta en todos los hechos exceptivos que el fallador encuentre demostrados en el proceso.

NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE,

El apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, contestó extemporáneamente la demanda; por tal razón no pueden tenerse en cuenta los argumentos expuestos en su escrito. (Informe secretarial, fl. 327, c. ppal.).

DE LA LLAMADA EN GARANTIA

COMPAÑÍA QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.

Manifiesta el apoderado judicial de la llamada en garantía, que se opone a todas las pretensiones de la demanda, por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad.

Anota, que los actores reclaman elevadas indemnizaciones por inexistentes perjuicios materiales (lucro cesante), para la señora madre del fallecido por \$200.000.00 mensuales y para cada uno de los otros cinco demandantes por \$1.300.000.00 mensuales, suma exagerada y fuera de toda racionalidad pese a que, conforme al líbelo de la demanda el señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, contaba con unos ingresos mensuales de \$1.000.000.00.

Sustentó las excepciones propuestas en los siguientes términos:

***INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO:** En el curso de este proceso no se ha podido determinar, con las pruebas aportadas y solicitadas que los hechos reclamados por la actora sean consecuencia de actos imputables al INVIAS, entidad asegurada bajo la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.120100000351, que por el contrario, resulta claro que como consecuencia de la imprudencia del fallecido CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, se produjo el fatal accidente cuyas consecuencias son reclamadas en este litigio.



Que no existe ninguna relación de causalidad entre el daño causado y la acción del agente demandado. Y en ese sentido no puede imputársele responsabilidad extracontractual, ni mucho menos endilgarle la pretendida falla en el servicio que se alega en la demanda.

***CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA:** La conducta del ente demandado no incidió en ninguna medida para la producción del accidente, que tuvo lugar por el actuar culposo y negligente del señor SEGURA QUINTERO, quien obró, lamentablemente, de manera imprudente, siendo esa la única y efectiva causa del mismo y de su propia muerte. Él generó con su conducta las condiciones del riesgo y se expuso a él en forma voluntaria, de suerte que no puede atribuírsele al INVIAS ni a la compañía aseguradora la responsabilidad por un riesgo que el conductor fallecido afrontó voluntaria e imprudentemente.

***AUSENCIA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS:** Los actores solicitan sin ningún sustento probatorio unas exorbitantes indemnizaciones que deben ser denegadas. No se ha aportado ni solicitado prueba alguna de origen y cuantía que demuestre los ingresos que percibía el señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, al momento de su fallecimiento, con los cuales se afirma, sostenía a toda su numerosa familia.

En cuanto a los perjuicios morales en la demanda simplemente se pone una cifra de 200 s.m.l.m.v. para cada demandante, como lanzando los dados, pero sin ningún sustento probatorio que respalde estas alucinadas pretensiones.

Frente al llamamiento en garantía propuso las excepciones de:

***PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO:** En el evento en que se profiera condena en contra de los demandados, se declare probada esta excepción, de conformidad con lo establecido en el art. 1081 del Código de Comercio, que a su tenor reza: "la prescripción ordinaria será de dos (2) años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción".

Teniendo en cuenta que los hechos se produjeron en el año 2003, ya ha transcurrido el plazo legal establecido en la norma citada, y por ende, ha operado el fenómeno prescriptivo frente al contrato de seguro.

***GENÉRICA:** Conforme a lo previsto en el art. 306 del C.P.C., solicita que si se hallaren probados hechos que constituyan una excepción, esta sea declarada de oficio.

**ALEGATOS DE CONCLUSION:**

Surtido el período probatorio, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, derecho del cual hicieron uso la parte demandante, las entidades demandadas y la llamada en garantía. Los respectivos escritos obran en el cuaderno principal a folios 410-421, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA; 422-427, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-; 428-430; INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES-INCO-; 431-434, PARTE ACTORA; 435-442, LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE y 443-447, COMPAÑÍA QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A., quines básicamente se limitan a reiterar sus planteamientos iniciales.

El apoderado judicial del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, reiteró que la vía en la cual ocurrió el insuceso es del orden nacional, que en tal sentido el ente departamental no es el responsable de la conservación y mantenimiento de la misma. Que la entidad encargada de estas labores es el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-.

La apoderada del INVIAS, con apoyo en el material probatorio adosado al expediente (Certificación de la Fiscalía de Dagua fl.17 cdno. ppal., fotografías fl.20 ibídem. y algunos de los testimonios recepcionados en el curso de la instancia), concluye que la causa eficiente y determinante en la producción del daño cuyo resarcimiento reclaman los actores, fue el propio comportamiento de la víctima, esto es, la conducta del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, quien afirma, -según lo revela el acervo probatorio obrante en el dossier-, pese a que en la vía estaban cayendo rocas debido a la topografía montañosa de la zona, se bajó sin ninguna protección a moverlas, para poder movilizar el vehículo en que se transportaba, todo lo cual configura en su sentir, la eximente de responsabilidad denominada "culpa exclusiva de la víctima", figura que en este caso exonera por completo de responsabilidad al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

El apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-, reafirmó, que al momento de la ocurrencia de los hechos el INCO apenas iniciaba su existencia, por lo que no podía adquirir derechos ni obligaciones. Que el INCO fue creado por el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, por lo que al momento del accidente apenas contaba con cuatro (4) meses de existencia, y que además, si bien se había celebrado el contrato de concesión 005 de 1999, proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, dicho contrato no cubría la vía que conduce a Buenaventura, a la altura del corregimiento la Garza, por lo cual anota, no existe legitimación en la causa por pasiva para vincular al INCO. Añade, que en el sub-júdice se configura la excepción de "Culpa exclusiva de la víctima", dado el actuar negligente e imprudente del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, por cuanto a sabiendas de que había desprendimientos de rocas, que debían ser removidas por funcionarios dotados de implementos de seguridad y maquinaria, se expuso a retirar las rocas de la vía sin tomar ninguna medida de seguridad, es así como por su propio



actuar desencadenó los hechos del fatal accidente.

La apoderada judicial de la parte demandante, insiste en que el actuar negligente y la actitud pasmosa e inexcusable de los demandados ocasionaron la muerte del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, ya que años atrás, la vía en comento venía presentando deslizamientos de rocas que impedían el paso de vehículos, y los entes encargados del mantenimiento y conservación no hicieron las gestiones necesarias para evitar el peligro latente, ni siquiera existía señalización o restricción que advirtiera la existencia del peligro sobreviniente. Que en tal sentido se reúnen los presupuestos o elementos que dan lugar al nacimiento de una responsabilidad por parte de las entidades demandadas.

La apoderada de LA NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE, aduce, que no puede haber omisión por parte de ese Ministerio en la realización de obras que no tienen cabida en el ámbito de sus funciones, toda vez que es un ente meramente regulador, planificador y normativo del transporte, que no tiene atribuidas funciones de tipo operativo como las relativas a la instalación de señales de peligro en las vías públicas.

Con base en lo expuesto, estima, que no es al MINISTERIO DE TRANSPORTE a quien le compete el mantenimiento de vías y carreteras, ni de señalización en caso de peligro, toda vez que a través del Decreto 2171 de 1992, (Art. 52 y s.s.), mediante el cual se reestructuró el Ministerio de Obras Públicas como Ministerio de Transporte, sin que le fueran asignadas funciones de mantenimiento de vías y carreteras, (Art. 6º, Decreto 2171 de 1992). Que el aludido decreto en su artículo 53, define el objetivo del INVIAS, así: "Corresponde al Instituto Nacional de Vías, ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación, en lo que se refiere a las carreteras"; y que en el caso de que en el transcurso del proceso se demuestre que el presunto accidente se presentó en una vía nacional dentro del respectivo perímetro urbano, debe tenerse en cuenta el Decreto 80 de 1987, Art. 1º literal d), "corresponde a los municipios adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del respectivo perímetro urbano". Concluye diciendo, que no es cierto que LA NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE, sea responsable de los hechos que se le imputan en esta demanda, y, por ende, no le es deducible ningún tipo de responsabilidad.

El apoderado judicial de la COMPAÑÍA QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A., manifiesta que se ha probado dentro del proceso, que el accidente sufrido por CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, se produjo sin lugar a duda debido a la conducta imprudente y temeraria del mismo, lo cual se comprueba con diferentes declaraciones. Que además no se ha logrado demostrar que el señor SEGURA QUINTERO devengara un promedio de \$1.000.000.00 mensuales, así como tampoco se demostró la dependencia económica existente entre el señor SEGURA QUINTERO y sus causahabientes.



El señor Agente del Ministerio Público, Procurador Judicial, 20 delegado ante esta Corporación no requirió el expediente para emitir concepto. (Informe Secretaría, fl. 448, c. ppal.).

ANÁLISIS DE LA SALA:

En este caso el fundamento jurídico de la responsabilidad que se atribuye a las demandadas, radica, en concepto de la parte actora, en la llamada falta o falla del servicio, que según lo enseña la jurisprudencia puede originarse en la no prestación del servicio público o en su deficiente, tardía o desviada prestación, y puede localizarse en cualquier órgano de la Administración Pública.

Por regla general, quien la alegue tiene la carga de probarla. Pero en casos excepcionales, la jurisprudencia permite presumir la falla y en consecuencia, excusa al demandante de su prueba. De todas maneras, para que se configure la responsabilidad del ente oficial demandado por falla del servicio, se necesita la concurrencia de los siguientes requisitos:

- Una acción o una omisión de la Administración.
- La ocurrencia de un daño. Y,
- Que el daño sea consecuencia de dicha acción u omisión.

En tratándose de la falla del servicio vial, como lo sugiere el asunto aquí debatido, ésta se configuraría en la medida que la entidad demandada a quien competa legalmente el contenido obligacional de la conservación, el cuidado y mantenimiento de la carretera donde acontecieron los hechos, no hubiese adelantado eficazmente las gestiones tendentes al cumplimiento de las funciones y deberes que la ley le impone en esta materia, para garantizar a los usuarios la seguridad y el control sobre la vía. La administración tendrá que acreditar entonces que adoptó todas las medidas necesarias para evitar cualquier accidente y que por ello, la causa del insuceso no obedeció a las circunstancias descritas en la demanda.

Primeramente la Sala, dilucidará lo relativo a las excepciones propuestas por las entidades demandadas y las convocadas al proceso. De ellas, valga la pena indicar desde ahora, la única que amerita un pronunciamiento previo es la referida a la "falta de legitimación en la causa por pasiva", formulada tanto por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, como por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-,



misma que de oficio cobija también a la NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE¹, en tanto, -como fácilmente se advierte-, las restantes no constituyen verdaderos medios exceptivos sino argumentos de defensa que apuntan a desvirtuar de fondo las pretensiones de la demanda, y por ende, ningún comentario en torno de las mismas se justifica, pues todas las cuestiones allí planteadas quedarán implícitamente resueltas con la decisión que se adoptará. No obstante lo anterior, en este punto cabe aclarar que la falta de legitimación en la causa no es en si misma una excepción de fondo tendiente a enervar las pretensiones de la parte actora, sino que ella constituye una causal para denegar las pretensiones del libelo demandatorio, en tanto que su configuración da cuenta que la entidad demandada no estaba llamada a responder por los presuntos perjuicios que se le imputan.

Realizado lo anterior, se tiene que el apoderado judicial del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, afirma que la vía Cali – Buenaventura, (específicamente a la altura del kilómetro 53 vía al mar), lugar donde ocurrieron los hechos, corresponde su mantenimiento, conservación, reparación y señalización al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS-, aseveración que es acertada, toda vez que el apoderado del INVIAS, en la contestación de la demanda reconoce tal situación, en tanto respecto a esa vía sostiene que: “El Instituto Nacional de Vías cumplía en forma permanente con su función de mantenimiento vial y para la fecha de ocurrencia de los hechos, en la vía se estaban ejecutando los siguientes contratos ...”, circunstancia que da cuenta del carácter nacional de la aludida vía. Por lo anterior frente al ente departamental, las pretensiones no prosperan en modo alguno.

Respecto a la misma “excepción” formulada por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO-, con el argumento que para la fecha de la ocurrencia de los hechos apenas se había constituido este ente, y en atención a que si bien se había celebrado el contrato de concesión No.005 del 29 de enero de 1999, dentro del mismo se fijó para el concesionario la obligación de realizar por su cuenta y riesgo los estudios, diseños, construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento, la prestación de servicio y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS, dadas en concesión, para la cabal ejecución del proyecto denominado MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA (cláusula 2 del contrato No. 005 de 1999), y, por lo tanto, aquel asume el riesgo y la responsabilidad directamente frente a esta actividad, tanto frente al Estado como a terceros.

¹ “...ARTICULO 164 del C.C.A. EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “reformatio in pejus.”.



Del material probatorio obrante en el expediente, infiere la Sala, que efectivamente el INCO no está legitimado en la causa por pasiva, puesto que si bien el INVIAS cedió el manejo y administración de la vía en cuestión, de conformidad con las normas vigentes para la época, es del caso resaltar que el Contrato No. 005 de 1999, se cedió mediante Resolución No. 003791 el día **26 de septiembre de 2003**, es decir, antes que se produjera el fatal accidente de allí que, la entrega material del aludido contrato solo se llevó a cabo el **día 19 de diciembre de 2003**, mediante acta 006 de la misma fecha, por parte de la Directora General del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-. (fl. 193-198, c. ppal.), en tal sentido salta a la vista que para la época de la ocurrencia de los hechos la entidad encargada del mantenimiento, conservación, reparación y señalización era aún el INVIAS, lo cual genera que al INCO, no pueda atribuírsele responsabilidad alguna en el presente litigio.

Ahora, como quiera que la NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, también fue demandado, se declarará en forma oficiosa la falta de legitimación por pasiva del mismo, habida cuenta que el Ministerio tampoco tiene las funciones de mantenimiento y conservación de vías.

Ciertamente, el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte, establece en su artículo 2º que "El Ministerio de Transporte expedirá las normas de carácter general que regulen el transporte y el tránsito...", así mismo, el artículo 3º destaca los asuntos de su competencia, entre ellos "definir la política integral del transporte en Colombia y las políticas generales aplicables al interior de cada modo de transporte, las cuales deben tener como objetivo la prestación de un servicio eficaz, seguro, oportuno y económico en todo el territorio nacional..."; de la misma manera el artículo 5º estipula sus objetivos definiéndolo como "un organismo rector del sector transporte", e igualmente se determinan sus funciones dentro de las que encontramos las contenidas en los numerales 11 y 14 del artículo 6º, que al tenor literal consagran: "Preparar los planes y programas de construcción y conservación de la infraestructura de todos los modos de transporte, de conformidad con la ley" y "Ejercer control de tutela sobre los organismos adscritos o vinculados", respectivamente.

Sobre este último punto, es preciso anotar que uno de los organismos adscritos a este Ministerio, es el Instituto Nacional de Vías, -INVIAS-, establecimiento público del orden nacional, que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, el cual tiene como objetivo principal la ejecución de políticas y proyectos que guardan relación con la infraestructura vial de las carreteras que se encuentran a cargo de la Nación, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte, así como prestar apoyo de carácter técnico cuando sea necesario, a las entidades territoriales encargadas de la construcción y mantenimiento de sus infraestructuras viales, todo lo anterior, de acuerdo a los artículos 52 y 53 ibídem.



Lo anteriormente expuesto, permite concluir, que el Ministerio de Transporte es un organismo normativo y rector, encargado de establecer políticas, planes y proyectos en relación con el transporte de carácter nacional y por ello cuenta con otras entidades descentralizadas como es el caso de "INVIAS", quienes se encargan de ejecutar y desarrollar las políticas impartidas en materia de infraestructura vial, por lo tanto, no es función directa del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el mantenimiento de las vías del orden nacional, pues su función solo se limita a regular y reglamentar el sector transporte, más no a ejecutar obras públicas, ni realizar trabajos de mantenimiento, conservación y señalización de vías.

Sobre el particular, el Honorable Consejo de Estado, se ha pronunciado, en los siguientes términos:

"...Se recuerda que el hecho demandado ocurrió el día 14 de mayo de 1993, es decir con posterioridad a la expedición de la nueva Constitución Política del año de 1991. Este dato jurídico histórico es importante debido a que los demandados -Nación (Ministerio de Transporte) e INVIAS- sufrieron modificaciones legales.

La Carta Política autorizó, en el artículo 20 Transitorio, al Gobierno Nacional para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades de la Rama Ejecutiva, los Establecimientos Públicos etc., con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la esa reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece.

En virtud de esa autorización el Presidente de la República profirió el 30 de diciembre de 1992 el decreto ley 2.171, mediante el cual reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y el Fondo Vial Nacional como Instituto Nacional de Vías.

- A dicho Ministerio le precisó, entre otros que le corresponde *"preparar los planes y programas de construcción y conservación de la infraestructura de todos los modos de transporte, de conformidad con la ley"* (art. 6 numeral 11). Las funciones de este Ministerio están referidas al diseño y fijación de políticas nacionales en materia de tránsito y transporte y su infraestructura, así como de las demás políticas de planeación de las autoridades que integran el sector transporte, y la orientación y vigilancia de la ejecución de las mismas.
- A INVIAS (establecimiento público del orden nacional) el decreto mencionado le indicó entre otras competencias la de *"ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte"* (art. 54 numeral 2°).

Con esa precisión material de ley, de las funciones de uno y otro demandado, se deduce:

De una parte, que la Nación no está legitimada materialmente en la causa por pasiva, porque los hechos demandados no aluden, para nada, con acciones u omisiones administrativas en la preparación de planes y programas de construcción, función que por su naturaleza es política. Las funciones del Ministerio de Transporte no tienen que ver ahora, con la actual legislación, con la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial nacional.

De otra parte, que el INVIAS sí está legitimado en la causa material por pasiva, pues las imputaciones fácticas tienen que ver, precisamente, con la ejecución de las políticas del Gobierno en relación con la infraestructura vial de su competencia, la cual está contenida en la resolución 66 del 4 de mayo de 1994, expedida por el CONPES, en la cual se precisa que la red nacional de transporte está conformada por las carreteras que están a cargo de la Nación "a través del Instituto Nacional de Vías INVIAS".



La nueva situación legal -como lo ha sostenido la Sala recientemente- ~~coloca a los~~ demandados en situación jurídica distinta respecto de la legitimación material en la causa por pasiva, al régimen legal y comprensión jurisprudencial anterior a esa reforma. ...".²

Acorde con lo expuesto, no puede tenerse entonces a la NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE como legitimado en la causa por pasiva, habida cuenta que no es el encargado de la construcción, mantenimiento y conservación de la vía donde se presentó el accidente en referencia, debiéndose en consecuencia, declararse la respectiva excepción en forma oficiosa. (Art. 164 del C.C.A)

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se solicita en la demanda, declarar administrativa y extracontractualmente responsable al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS-, de los perjuicios materiales y morales irrogados a los demandantes, con ocasión de la muerte del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, como consecuencia de un alud de rocas que se deslizaron y que tapaban un carril de la vía, circunstancia que impedía el paso, en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza del Municipio de Dagua (Valle).

Por lo tanto, el **PROBLEMA JURÍDICO** que debe dilucidar la Sala, en la presente litis, se contrae a determinar si efectivamente a la entidad demandada le es atribuible el aludido daño antijurídico, bajo el título de imputación "falla en el servicio", por la falta de señalización y mantenimiento de la vía donde ocurrieron los hechos, o, si por el contrario, no se encuentran probados los elementos que configuren la responsabilidad de la administración en este asunto concreto.

Los siguientes son los elementos de acreditación que se han aportado al presente proceso, con el fin de que su valoración determine si procede, o no, declarar, con base en el título jurídico expuesto anteriormente, la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios padecidos por los demandantes, a raíz de la muerte del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, la cual a juicio de la parte actora, se ocasionó por una falla en el servicio vial, debido a la falta de señalización y mantenimiento de la vía Cali-Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza del Municipio de Dagua.

Reposan en el expediente:

a.- Copia del folio del Registro Civil de Defunción No. 04015361, expedido por el Registrador del Estado Civil de Dagua, Valle, en el cual consta que el señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, falleció el 16 de octubre de 2003 (fl. 4, c. ppal.).

b.- Copia simple de un documento intitulado "Atención de Urgencias" expedido por el HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. de DAGUA -VALLE, el cual da cuenta que se

² Consejo de Estado-Sección Tercera, Sent. del 1° de noviembre de 2001, C. P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, Actor: Nelcy del Socorro Negrete y otros, Demandado: Nación e Instituto Nacional de Vías.



recibió en dicha institución hospitalaria al señor CARLOS ANDRES SEGURA, a las 5:35 a.m. del 16 de octubre de 2003, con la siguiente anamnesis: "le cayó una piedra", enfermedad actual: "hoy 5.00 a.m., sufre accidente al caerle una gran piedra sobre la cabeza quedando inconsciente de inmediato". Con diagnóstico definitivo de "T. C. E. severo expansión encefalo, muerte cerebral. (fl. 18, c. ppal.).

c.- Copia auténtica del Protocolo de Necropsia No. 1421 practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional del Sur-Seccional Cali, al señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO (fl. 89-92, c. No. 3).

d.- Copia simple del Contrato de Concesión No. 005 del 29 de enero de 1999, de la Malla Vial del Valle del Cauca y del Cauca, celebrado entre el INVIAS y la Unión Temporal "DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y DEL CAUCA". (fls. 82-192, c. ppal.).

e.- Copia del Contrato RV-033-200399, suscrito entre el Director Regional Encargado del INVIAS -VALLE-, GUSTAVO ADOLFO GARCES VALENCIA y el señor NAPOLEÓN CABRA AMADO, cuyo objeto es: "La administración del mantenimiento vial grupo 1 de las carreteras: Cali-Vijes-Medicanoa; sector: Cali-Yumbo, Popayán-Cali; sector: Crucero Jamundí-Cali; Buenaventura-Cruce Ruta 25, Buga y Cali-Cruce Ruta 40 Loboguerrero en una longitud de 191, 38 kilómetros. (fls. 273-290, c. ppal.).

f.- Copia del Contrato RV-035-2003, suscrito entre el Director Regional Encargado del INVIAS, CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA y el ingeniero HITO HUGO HOYOS HOYOS, cuyo objeto es: "ejecutar para el INSTITUTO, las obras de mantenimiento y conservación rutinaria necesarias para obtener un nivel óptimo de servicio de la carretera Cali - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)". (fls. 291-297, c. ppal.).

g.- Copia auténtica del Contrato 209 de 2003, suscrito entre el Representante Legal del INVIAS, RAFAEL GUILLERMO GUTIERREZ SIERRA, y el señor ALVARO HERNAN HORMAZA SARRIA, cuyo objeto es: "el mantenimiento de la carretera Cali-Loboguerrero, Ruta, 1901". (fls. 30-35, c. No. 2).

h.- Copia auténtica del Contrato RV-026-2003, suscrito entre el Director Encargado de la Regional del Valle del INVIAS, GUSTAVO ADOLFO GARCES VALENCIA, y el ingeniero ALVARO GARCIA PARRA, cuyo objeto es: "verificar permanentemente el desarrollo del proyecto, a efecto de constatar el cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones establecidas para el control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. EL CONTRATISTA se obliga para con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALI-LOBOGUERRERO, RUTA 1901". (fls. 38-46. c. No. 2).



g.- Pruebas Testimoniales:

Dentro del despacho comisorio No. FGM-042, ordenado por esta Corporación y auxiliado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua-Valle, se recepcionaron varias declaraciones de testigos presenciales en el sitio del accidente, entre los cuales se destacan los siguientes:

i) Testimonio rendido por el señor NUMAR BEDOYA GALINDEZ, quien narró lo siguiente:

"...PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si conoció al señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, en caso positivo indicará como lo conoció.- CONTESTO: Si lo conocí, pues lo conocí por la cuestión de que tenía el mismo trabajo que tengo yo.- PREGUNTADO: Manifieste al despacho si conoció Usted las circunstancias en las que falleció el señor ANDRES SEGURA el 16 de Octubre-2003, en caso positivo indicará por que las conoció.- CONTESTO: diría yo que conocí el caso pues estuve en el lugar del accidente es decir la fecha no la recuerdo pero era más ó menos de 6- corrijo- 5: a 5:30 de la mañana me dirigía de Dagua a Buenaventura y en el sector del K- 52 y 53 más ó menos intermedio había mucha piedra en la carretera. por lo cual ya habían parado varios carros en la vía para quitar las piedras y poder pasar, estábamos quitando las piedras y cuando sentimos que caían más piedras que pegaban sobre los camiones todos quienes estábamos allí salimos a correr a protegernos atrás de los camiones pero estaba lloviendo y oscuro y no veíamos bien y las piedras que caían no las veíamos (sic) por lo oscuro las luces de los carros estaban prendidas pero las bajas cuando oímos que cayeron las piedras corrimos y escuché un golpe y miré atrás y vi a ANDRES QUE LE HABIA CAÍDO (sic) una piedra y estaba caído, comencé a gritar lo mató lo mató(sic) la piedra pero nos tocó luego esperar y siguió cayendo piedra para poder rescatarlo y de allí lo trajimos en un taxi hasta aquí (sic) a Dagua al hospital y lo dejamos aquí en EL HOSPITAL y me fui a continuar el viaje porque tenía el carro cargado iba para Buenaventura. ...". (fls. 54-56, c. No. 3).

ii) Testimonio rendido por el señor LUIS EFREN DIAZ LABRADA, quien al relatar sobre los hechos de la demanda contestó

"...PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si conoce Usted al señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, en caso positivo, de qué manera lo conoció. CONTESTO: Conocidos con CARLOS ANDRES unos 10 años donde se conoció al pelado y después fue compañero de transportes y la verdad lastimosamente conocemos lo que le paso a él y yo había pasado adelante de él porque también a mi me tocó limpiar la carretera para poder pasar. PREGUNTADO: Tiene conocimiento de los hechos ocurridos el 16 de Octubre del 2003 al señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, en caso positivo, narre tales hechos.- CONTESTO: Si lo tengo, los hechos sucedieron es decir el accidente donde él perdió la vida, fue en el K- 53 de la vía al mar nueva en sentido Cali-Buenaventura perdió la vida por limpiar la carretera para poder seguir el viaje hacia Buenaventura, a mi me tocó hacer igualmente lo mismo para poder pasar pues lo hice antes de él el mismo día a eso de las 5:30 a.m. fue lo del accidente de ANDRES yo paré al otro lado a unos 200 metros a mirar lo de las llantas de mi carro por si llevaba piedras y cuando ellos llegaron no les paré muchas bolas (sic),



estaba oscuro y seguí hacia Buenaventura y ellos es decir ANDRES y los otros compañeros se quedaron limpiando la vía y ya estaba en Buenaventura cuando recibí la noticia de la muerte de ANDRES ocurrida en el lugar del derrumbe es decir en el K-53. ...". (fls. 72-73, c. No. 3).

Igualmente en el curso del proceso administrativo esta Corporación recibió las declaraciones de la señora MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO, y del señor JOSE LEONARDO CELIS SEGURA. Del testimonio del primero de ellos se resalta lo siguiente:

"...CONTESTO: Carlos Andrés Segura viajaba para Buenaventura cargado de cemento, amaneció ese día en Dagua, salió aproximadamente a las 4:15, salió de Dagua, al kilómetro y medio al salir de Dagua vio los compañeros estacionados en carretera y él se bajó y los compañeros le dijeron que no había vía, que los ayudara porque había que destapar la vía, había mucha piedra, rocas grandes, no podían pasar, en ese momento ya estaban para terminar cuando faltaban dos piedras medianas, Carlos Andrés no alcanzó a salir corriendo y le cayó la roca en la cabeza, no murió en el momento, a las pocas horas murió en el hospital de Dagua. Esta vía entre Dagua y Buenaventura es una vía que por lo menos mantiene en muy mal estado, porque cae mucha piedra y mucha peña, pedazos y eso siempre o casi a diario mantiene la carretera tapada. Para la familia fue una pérdida muy grande que tuvimos, pues él como nieto, como hermano, como hijo era una gran persona, era muy responsable, muy buen hermano, muy cariñoso y aun hasta ese momento nos estaba afectando mucho y sobre todo a los hermanos más pequeños. ...". (fls. 4-7, c. No. 2).

Declaración rendida por el señor JOSE LEONARDO CELIS SEGURA, de la cual se extrae lo siguiente:

"...Ese día el 16 de octubre de 2003, recibimos la llamada, la gente de dagua, los compañeros de transporte de Carlos Andrés y ahí nos dijeron que Carlos Andrés había sufrido un accidente, y nos fuéramos para Dagua, no nos quisieron decir que había pasado, en ese momento estaba mi madre, mi padrastro, mi hermana y mi hermano y la señora mía. Entonces allí fuimos a Dagua, y nos dimos cuenta de la gravedad de lo que había pasado, entonces ya fue cuando lo vimos en el estado en que él estaba, en el Hospital de Dagua, ya mi mamá, Luz Nancy Segura, ya pudo ir a verlo, pues ella no quería ver en la situación que Carlos Andrés estaba; en ese momento, yo me quedé con él hasta el momento en que dejó de existir, si se puede decir. Carlos Andrés salía de Dagua, a las 4:30 de la mañana hacia Buenaventura, en esa parte de la carretera, hay mucho accidente ahí, entonces había un derrumbe de piedras, entonces pues. Carlos Andrés, aunque no tenía que bajarse, pero como tenía que llevar su carga, él se bajó a quitar las rocas del camino, con unos compañeros, ahí fue cuando, como estaba entre oscuro y claro, fue cuando le cayó la piedra en la cabeza, ahí fue cuando los compañeros se dieron cuenta que estaba tirado en el suelo, y pues de uno ellos lo montaron en un camión de ellos y lo llevaron al Hospital de Dagua. De ahí en adelante, después de lo que paso, vivimos día a día el recuerdo de ese accidente...". (fls. 19-21, c. No. 2).

La comunidad probatoria que reposa en el expediente, muestra sin hesitación alguna, que si bien se produjo la muerte del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, con



ocasión de un alud en el cual una roca impactó en su cabeza, tal acción en manera alguna es achacable a la entidad demandada, INVIAS, pues no se observa acción u omisión de la administración que haya causado el daño alegado por los demandantes. Lo anterior se puede inferir de la declaración del señor NUMAR BEDOYA GALINDEZ, testigo presencial de los hechos, quien manifestó: "...estabamos quitando las piedras y cuando sentimos que caían más piedras que pegaban sobre los camiones todos quienes estabamos allí salimos a correr a protegernos atrás de los camiones pero estaba lloviznando y oscuro y no veíamos bien y las piedras que caían no las veíamos (sic) por lo oscuro las luces de los carros estaban prendidas pero las bajas **cuando oímos que cayeron las piedras corrimos y escuché un golpe y miré atrás y vi a ANDRES QUE LE HABIA CAIDO (sic) una piedra y estaba caído, comencé a gritar lo mató lo mató (sic) la piedra pero nos tocó luego esperar y siguió cayendo piedra para poder rescatarlo...**". (fls. 54-56, c. No. 3). (Resaltado de la Sala).

El conjunto del material probatorio visible en el plenario, deja al descubierto que fue la conducta imprudente del señor SEGURA QUINTERO, la que ocasionó su propia muerte, pues éste, cuando se dirigía de Cali a Buenaventura, en su vehículo con el objeto de llevar una carga, al encontrar la vía obstaculizada a la altura del kilómetro 53 de la vía al mar, se bajó del automotor aproximadamente a las 5:30 a.m., en el sitio donde se había presentado un deslizamiento de rocas, y en compañía de otros conductores, procedieron a limpiar la vía, con tan mala suerte que al momento de estar en dichas labores, que dicho sea de paso, no les correspondía realizar, se produjo un nuevo deslizamiento de rocas, una de las cuales impactó en su cráneo dejándolo inconsciente y posteriormente segando su vida. Comportamiento a todas luces imprudente, que fue la única causa de su desceso, no observando esta Sala, participación alguna de la entidad demandada en esos hechos. De manera que, palpablemente se configura en este caso una causal eximente de la responsabilidad estatal denominada doctrinaria y jurisprudencialmente como "Culpa Exclusiva de la Víctima".

Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima ha sido concebida dentro del ámbito de la responsabilidad administrativa, como la violación de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, de tal forma que dicha violación por parte de la víctima, puede conducir hacia una exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, de acuerdo con la trascendencia y grado de participación del afectado o afectados en la producción del daño, aún cuando no toda conducta de la víctima se puede invocar como factor que destruya el vínculo de causalidad existente entre el hecho y el daño. En efecto, para que la culpa de la víctima exonere de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir estos requisitos:

1. Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si la culpa del afectado fue la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Si por el contrario, esa culpa no tuvo incidencia alguna en la producción del



evento perjudicial, se impondrá entonces la declaratoria de responsabilidad total de la administración, a condición de que se configuren los restantes elementos estructurales de esa responsabilidad, según el régimen aplicable a la actividad administrativa, dentro de cuya órbita se produjo el hecho dañoso. Ahora bien, si la actuación de la víctima fue una causa concurrente, se producirá una liberación parcial, por la aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, previsto por el artículo 2357 del Código Civil.

2. El hecho de la víctima debe ser extraño y no imputable al ofensor. Si el obrar de la víctima fue provocado, propiciado o impulsado por el ofensor de tal manera que no le sea ajeno, no podrá exonerarse de responsabilidad la administración.
3. Que el hecho de la víctima sea ilícito y culpable.

Analizando las anteriores premisas, para establecer si en el presente caso se cumplen o no los presupuestos constitutivos de la citada eximente de responsabilidad de la administración, la Sala observa, que la relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño se encuentra debidamente acreditada, en la medida en que la conducta del señor SEGURA QUINTERO, al bajarse del rodante a limpiar la vía en un sitio donde había ocurrido un reciente deslizamiento de rocas, donde se presentó un nuevo deslizamiento, siendo golpeado en su cráneo por una roca, constituye la causa única, eficiente y determinante de su muerte.

Respecto a que el hecho de la víctima debe ser extraño y no imputable al ofensor; se observa que el hecho es totalmente ajeno a la administración y en modo alguno imputable a la misma, ya que fue en forma voluntaria y libre que el señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, se sometió a semejante riesgo, pues él había podido esperar a que la administración o el contratista, es decir, personal competente e idóneo, con la maquinaria necesaria y adecuada y con los medios de seguridad del caso, realizarán la respectiva labor de remoción de escombros, pues con ese objeto el INVIAS y el INCO habían celebrado contratos de mantenimiento de la vía; labor que él occiso no debía haber acometido, tal como ocurrió en el caso de marras.

En relación al último punto, atinente a que el hecho de la víctima sea ilícito y culpable, se encuentra acreditado que el señor CARLOS ANDRES actuó de forma imprudente y negligente, pues su accionar fue contrario a las reglas de la previsión y cuidado, más aún si se tiene en cuenta que al momento del fatal suceso no había total visibilidad, toda vez que era de madrugada aún, lo cual ayudó a que no observara el nuevo deslizamiento de rocas, desencadenándose el fatal accidente. Por lo cual se concluye, que la conducta imprudente de la víctima fue la que ocasionó su propia muerte.



En suma, la muerte del señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, no fue producto de una falla del servicio de la entidad demandada, ni mucho menos por ello puede imputársele automáticamente su responsabilidad, pues la falla del servicio tiene como presupuesto el incumplimiento de una obligación, es decir, que en el presente caso, debía necesariamente demostrarse que el daño fue producto de la omisión de la demandada de cumplir con su deber, con su obligación, representado en el adecuado mantenimiento de la vía, la recolección de escombros, etc. Empero, resulta que los contratos de mantenimiento a que antes se aludió, celebrados por el INVIAS y el INCO, reflejan como dicha entidad cumplía satisfactoriamente y a cabalidad con sus obligaciones funcionales por la época en que sucedieron los hechos, huelga repetir, con la obligación de conservación y mantenimiento de la vía en comento, y, por ende, no puede endilgársele omisión alguna en este sentido.

Así las cosas, deduce la Sala, que el señor CARLOS ANDRES SEGURA QUINTERO, fue imprudente en su actuar, al bajarse de su automotor y proceder directamente a tratar de limpiar la vía en una zona donde se había presentado un reciente deslizamiento de rocas, con tan mala fortuna que al producirse un segundo deslizamiento una roca impactó su cráneo. En consecuencia, si la causa adecuada, eficiente y determinante del hecho fue la culpa exclusiva de la víctima, se destruye el nexo causal que vincula la supuesta falla del servicio con el daño y, en esas condiciones, no puede imputársele ni fáctica ni jurídicamente responsabilidad patrimonial alguna a la demandada.

Se denegarán por tanto las pretensiones de la demanda, todo ello con fundamento en una valoración en conjunto de la totalidad del recaudo probatorio allegado durante la actuación procesal y a la luz de los principios de la sana crítica.

En razón y mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca- Sala Jurisdiccional de Decisión-, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Providencia discutida y aprobada en sesión de hoy. Acta No. 057

Expediente No. 2004/5560-00

473



25

Los Magistrados,

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

AUSENTE CON PERMISO
ALVARO PIO GUERRERO VINUEZA

BERTHA LUCIA GONZALEZ ZÚNIGA

SEP 16 10 44 AM '10

RECIBIDO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA

NOTIFICACION

En la fecha notifico la providencia que
antecede al señor Procurador Judicial No. 20
Cali, Sept 20 10

EL NOTIFICADO [Signature]

EL SECRETARIO [Signature]

CERTIFICADO: Para notificar a las partes la anterior sentencia,
se fijó EDICTO en lugar público de la sede del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo por el día 07 de octubre de 2010
a las once de la mañana.

El Secretario, [Signature]



487

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA

EDICTO No. 1168

RADICACIÓN : 2004-5560

ACCIÓN : REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE : MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO Y OTROS

DEMANDADO : NACIÓN-MINTRASPORTE-INVIAS-INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES "INCO"-
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MAGISTRADO PONENTE : FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

FECHA PROVIDENCIA : SEPTIEMBRE 14 DE 2010

Para notificar a las partes, se fija el presente Edicto en lugar público de la Secretaría del Tribunal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, por el término de tres (3) días, siendo las 8:00 am de hoy **07 DE OCTUBRE DE 2010.**

LUZ DARY GONZALEZ
Secretaría
Vlm
(N.P.)

NR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
SECRETARÍA

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: El anterior EDICTO estuvo fijado en lugar público de la Secretaría del Tribunal por el término de tres (3) días, así: 7, 8 y 11 de octubre de 2010 hasta las cinco de la tarde. Se desfija y se agrega al expediente. (Los días 9 y 10 del mismo mes y año fueron no laborables).

Dentro de este término, la apoderada de la parte demandante, presentó recurso de apelación (476-485 del c. ppal.).

La llamada en garantía QBE Central de Seguros S.A., a su vez, presenta solicitud de adición de la sentencia (fls. 474-475 del c. ppal.).

Santiago de Cali, 12 de octubre de 2010.



LUZ DARY GONZALEZ
Secretaria

Proceso No. 2004 – 5560 - 00

Santiago de Cali, 9 de noviembre de 2010

SECRETARIA: El término de diez (10) días para interponer y sustentar recurso de apelación, establecido en el artículo 212 del C.C.A., modificado por la Ley 1395 de 2010 en su artículo 67, corrió los días 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 y 26 de octubre de 2010 (los días 16, 17, 18, 23 y 24 del mismo mes y año, fueron no laborables).

Dentro de este término, la apoderada de la parte demandada INVIAS presenta renuncia de poder (fl. 486 del c. ppal.).



LUZ DARY GONZALEZ
Secretaria



547

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D. C., 26 de septiembre de 2012

Expediente: 41173
Radicación: 760012331000200405560 01
Demandante: María Edelmira Quintero Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Naturaleza: Acción de reparación directa

1. De conformidad con lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 212 de Código Contencioso Administrativo, **ORDÉNASE** correr traslado a las partes por el término de diez (10) días para alegar de conclusión.
2. En caso de que el Ministerio Público lo solicite, **SÚRTASE** el trámite previsto en el inciso segundo del artículo 59 de la Ley 446 de 1998.
3. De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 y siguientes del C.P.C., **RECONÓCESE** personería adjetiva al abogado Gustavo Alberto Herrera Ávila identificado con cédula de ciudadanía n.º 19 395 114 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional n.º 39 116 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado principal, y a la doctora Claudia Lorena Rincón Taborda identificada con cédula de ciudadanía n.º 38 642 884 de Cali y portadora de la tarjeta profesional n.º 161 770 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada sustituta, en los términos y para los efectos del poder a ellos conferidos, obrantes a folios 495-499 y 526-531 del cuaderno principal del expediente.



4. De otro lado, mediante escrito radicado el 4 de julio de 2012, obrante a folio 535 del cuaderno principal, el Instituto Nacional de Concesiones –INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura otorgó poder a la abogada Gloria Estella Gutiérrez Ballesteros identificada con cédula de ciudadanía n.º 37 226 818 de Cúcuta y portadora de la tarjeta profesional n.º 22 119 del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia **RECONÓCESE** personería adjetiva en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante a folio 536 del cuaderno principal del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**DANILO ROJAS BETANCOURTH**

YCL/L

CONSEJO DE ESTADO
Por Anotación de ESTADO notifico a las partes la
providencia interior

17 OCT 2012 A las 8.00 a.m.**SECCIÓN TERCERA**
SUBSECCIÓN B

CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Hoy **18 OCT 2012****TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL**
VALLE DEL CAUCA

CONFRONTACION : La reproducción mecánica que antecede
constante, de **01 (1)** folios es fiel copia tomada del
original reposa en esta Oficina y que se tuvo a la vista.
Son de igual tenor.

Cali, **10 MAY 2019**

Luz





**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B**

Consejera Ponente (E): Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho

Radicación: 760012331000200405560 01 (41173)
Actor: María Edelmira Quintero y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Naturaleza: Acción de reparación directa

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de septiembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

SÍNTESIS DEL CASO

El 16 de octubre de 2003, aproximadamente a las 5: 30 a.m., a la altura de la vereda La Garza, municipio de Dagua, Valle, perdió la vida el señor Carlos Andrés Segura Quintero a consecuencia del impacto que sufrió en su cabeza por una roca que se desprendió de la montaña ubicada en un costado de la vía por donde transitaba, en el momento en que descendió de su vehículo para retirar las piedras que obstruían la carretera.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener en efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por el Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

Igualmente la indemnización en cuestión debe abarcar tanto el lucro cesante por el periodo vencido o consolidado, que comprende desde el luctuoso hecho el 16 de octubre de 2003 hasta el día de la sentencia en firme, y el periodo futuro, que parte de respectivo fallo ejecutoriado hasta la fecha probable de supervivencia de la demandante, según las aludidas tablas.

C. Para el señor José Leonardo Celis Segura, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de ingresos monetarios que ella (sic) y de los que seguirá privada (sic) hasta el final de sus días por la muerte de su hermano Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su progenitora, de su progenitora, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendían para la época de su deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

Igualmente la indemnización en cuestión debe abarcar tanto el lucro cesante por el periodo vencido o consolidado, que comprende desde el luctuoso hecho el 16 de octubre de 2003 hasta el día de la sentencia en firme, y el periodo futuro, que parte del respectivo fallo ejecutoriado hasta la fecha probable de supervivencia de la demandante, según las aludidas tablas.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



1. El 16 de diciembre de 2004¹, los señores María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis, Luz Nancy Segura en su propio nombre y en el de los menores Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura, Humberto Salazar Cabal, en nombre propio y de su hijo menor de edad Juan David Salazar Segura presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y el departamento del Valle del Cauca, procurando las siguientes declaraciones y condenas (f. 30-47, c.1.):

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca, de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los demandantes con la muerte de su hijo, hermano y nieto, CARLOS ANDRÉS SEGURA QUINTERO y por las secuelas de ese hecho trágico acaecido en la vereda La Garza del municipio de Dagua, en la vía que conduce a Buenaventura.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca en su condición de entes administrativa y patrimonialmente responsables, a indemnizar a los demandantes por todos los perjuicios sufridos.

3. Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales infligidos a cada uno de ellos, el equivalente en moneda legal a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, liquidando esta suma de acuerdo al monto del salario mínimo legal vigente en la fecha que se pague según la sentencia o en subsidio en la fecha de la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, conforme a la regulación legal que lo fije o en su defecto según la certificación que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la fecha en que se cancele según la sentencia, de acuerdo al siguiente detalle:

¹ La demanda fue corregida el 13 de mayo de 2005, a solicitud del tribunal, en el sentido de aportar la dirección de notificaciones del Instituto Nacional de Concesiones -Inco-, ente demandado en la presente acción.



Expediente 41173

Actos María Edelmira Quintero y otros

María Edelmira Quintero Quintero	abuela	200SMLMV
Luz Nancy Segura Quintero	madre	200 SMLMV
Humberto Salazar Cabal	padre crianza	200 SMLMV
José Leonardo Celis Segura	hermano	200 SMLMV
Claudia Alejandra Mosquera	hermano	200 SMLMV
Juan David Salazar Segura	hermano	200 SMLMV

4. De la misma manera condénese a los demandados a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca al pago de todos los perjuicios materiales ocasionados con motivo de ese hecho, de acuerdo a lo que se pruebe en el proceso, así:

A. Para la señora María Edelmira Quintero Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su nieto, Carlos Andrés Segura Quintero, quien en vida se los proporcionaba para la atención de sus gastos y necesidades personales y que ascendían a la para la época del deceso a \$200.000 mensuales

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del Índice de precios al consumidor (I.P.C.) certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2.003, hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

B. Para la señora Luz Nancy Segura Quintero la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas para estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hijo Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

D. Para la niña Claudia Alejandra Mosquera Segura, quien está representada por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, la de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

E. Para el niño Juan David Salazar Segura, quien está representado por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero y por su padre Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originada en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) y de lo que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba tomando en cuenta el valor del dinero líquido en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte



del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

F. Para el señor Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras ordinariamente utilizadas en estos casos, para el daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) experimenta y de los que se seguirá privada (sic) hasta el final de sus días por la muerte de su hijo de crianza Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendían para la época de su deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

4. De manera subsidiaria pido la estimación del lucro cesante tanto para la madre en su nombre propio y en el de sus menores hijos, como para la abuela, padre de crianza y hermanos, se haga con base en el salario mínimo legal vigente en el año 2003 cuando el joven Carlos Andrés Segura Quintero falleció, caso en el cual han de aplicarse las fórmulas matemáticas y financieras pertinentes para establecer el lucro cesante pasado y el futuro: el primero desde la fecha del deceso hasta la respectiva sentencia y el segundo desde la emisión de la misma hasta la fecha estimada probable de vida de cada uno de los reclamantes y la fecha en que la menor alcance la mayoría de edad.

5. Ordenar que el fallo se cumpla en los términos del Código Contencioso Administrativo arts. 176 y 177.

2. Como fundamento de las peticiones aludidas, la parte actora señaló que el 16 de octubre de 2003, en la vía que de Cali conduce a Buenaventura a la altura de la vereda la Garza, municipio de Dagua, el señor Carlos Andrés



Expediente 41173
Acor. María Edelmira Quintero y otros

Segura Quintero perdió la vida tras ser impactado por un gran número de rocas que se desprendieron de la montaña ubicada en uno de los costados de la carretera, impacto que horas después, luego de que el joven fue trasladado al hospital José Rufino Vivas del municipio de Dagua, le causó su muerte debido al trauma craneoencefálico severo que sufrió.

2.1. Destacaron que la injustificada falla en el mantenimiento de la vía por parte de los entes demandados provocó directamente el accidente en que perdió la vida su familiar, en razón de que desde hace más de 30 años, la inestabilidad del terreno originó un desequilibrio en la cordillera debido a la remoción inapropiada de rocas que no fue remediada por las demandadas.

2.2. Señalaron que el derrumbe que se presentó en la vía, por el que la víctima detuvo su marcha a fin de remover algunas de las rocas que obstaculizaban su paso, no fue debidamente señalizado o restringido a fin de prevenir el peligro existente, negligencia que contribuyó eficientemente en la causación del daño que intentan les sea reparado.

2.3. Refirieron que el joven Carlos Andrés Segura Quintero convivía al momento de su deceso con su señora madre, padre de crianza y sus hermanos, a quienes dedicaba una parte de sus ingresos mensuales que ascendían para esa fecha a la suma de \$1 000 000 de pesos aproximadamente, mientras que la otra fracción de su salario lo destinaba a la manutención de su abuela, familiares con quienes mantenía vínculos de fraternidad y apoyo.

2.4. Por último indicaron que *"Es indudable que la temprana muerte de Carlos Andrés Segura Quintero, ocasionó un enorme perjuicio a sus padres, hermanos y abuela, pues todos sufrieron un gran dolor moral generado por la desaparición del hijo, hermano y nieto, sumado al detrimento material que experimentaron, en la medida en que su deceso los privó de la ayuda económica que él les brindaba, comoquiera que invertía en ellos la totalidad de los ingresos que recibía como conductor de camión o tractomula"*

II. Trámite procesal



3. La Nación-Ministerio de Transporte **contestó** oportunamente la **demanda** y se opuso a la totalidad de las pretensiones elevadas por la actora. Al respecto, adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de responsabilidad suya, en consideración a que, de conformidad con la normativa vigente al momento de ocurrencia del siniestro e incluso, según las normas que rigieron las funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte antes de que se restructurara en Ministerio de Transporte, no le correspondía realizar el mantenimiento y la señalización de las carreteras en el territorio colombiano, labores que se encontraban repartidas entre el INVÍAS, los departamentos y los municipios.

3.1. De esta manera, adujo que sus competencias se restringían a regular y planificar el sector transporte, y para efectos de fundamentar lo expuesto, trajo a colación las disposiciones pertinentes y el contenido de una sentencia del Consejo de Estado en la que aseveró que se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva (f. 323-325, c.1.).

3.2. El Departamento del Valle del Cauca, en la misma oportunidad procesal, además de indicar que se atenía a lo que resulte probado y de oponerse a las pretensiones, refirió que en la causación del daño padecido por los demandantes medió la fuerza mayor, consistente en un evento de la naturaleza que por su condición de irresistibilidad e imprevisibilidad lo exime de responsabilidad, en consecuencia, solicitó negar las pretensiones formuladas (f. 71-75, c.1.).

3.3. El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- **contestó la demanda**, con escrito en el que propuso como medios exceptivos la inexistencia de responsabilidad y la culpa exclusiva de la víctima. Frente a la primera argumentó que la vía en donde tuvo ocurrencia el fatídico accidente se encontraba en mantenimiento por parte de la entidad a través de la contratación de personal capacitado para tal fin, por lo que no es posible aducir, como lo hace la parte actora, negligencia en el cumplimiento de las funciones a su cargo (f. 298-304, c. 1). En lo que tiene que ver con la



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

configuración del hecho de la víctima estimó que, de conformidad con el relato hecho por los propios demandantes, el señor Carlos Andrés Segura Quintero en una actuación imprudente, descendió de su vehículo y sin protección alguna, pese al peligro que representaba la topografía de la zona, empezó a remover las rocas que poco antes se habían desprendido de la montaña, momento en el que se produjo el derrumbe que acabó con la vida del joven.

3.4. Por otro lado, señaló que si bien se acreditó el primer elemento necesario para declarar la responsabilidad extracontractual, esto es, el daño consistente en la muerte del familiar de los demandantes, los dos elementos restantes brillan por su ausencia, pues el menoscabo patrimonial no le es imputable a las entidades públicas demandadas, en la medida que es su concreción concurrió la culpa exclusiva de la propia víctima, quien de forma negligente se expuso al riesgo a pesar de las condiciones topográficas por él conocidas, pues no puede desconocerse que se dedicaba profesionalmente al transporte terrestre y decidió libremente exponerse al mismo (f. 298-305, c.1.).

3.5. En escrito separado, la entidad pública llamó en garantía a la Compañía Central de Seguros S.A. en virtud del seguro de responsabilidad extracontractual con ella contratado, a fin de que en caso de una eventual condena en su contra la entidad aseguradora asumiera lo pagado. El tribunal, mediante auto del 12 de septiembre de 2006, admitió el llamamiento en garantía y, en consecuencia, ordenó notificar personalmente al representante legal de la entidad (f. 306-307; 328, c.1.).

3.6. El Instituto Nacional de Concesiones-Inco- excepcionó la inexistencia de responsabilidad, pues en el caso se le adjudica una omisión en el deber de vigilancia de la ejecución del contrato de concesión n.º 0005 de 1999 para el mantenimiento de la malla vial del departamento del Valle del Cauca, concesión a la que no pertenece el tramo en donde ocurrió el accidente en que perdió la vida el señor Segura Quintero, razón por la cual no se encontraba obligada a supervisar el estado de la carretera en



cuestión, pues al no ser una vía concesionada no tenía ningún tipo de injerencia sobre ella.

3.7. En igual sentido, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues en su entender no existe identidad de la persona jurídica que figura como extremo de la pretensión y quien presuntamente es responsable del daño causado, pues reiteró que su obligación legal se agotaba en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista.

3.8. Así mismo, refirió que en caso de existir responsabilidad en el deceso del señor Carlos Andrés Segura Quintero esta debía ser imputada al Instituto de Nacional de Vías -Invias-, pues corresponde a esta entidad el deber de vigilancia y control del estado de esa carretera, pues no pertenecía a las vías que fueron dadas en concesión y sobre las cuales ejercía una suerte de interventoría.

3.9. Para finalizar adujo que en la causación de daño alegado medió el hecho exclusivo de la víctima. Estimó que la causa eficiente del daño sufrido por los demandantes tuvo su origen en el abuso de derecho propio ejercido por el señor Segura Quintero, pues se expuso de una manera imprudente al riesgo que representaba aparcarse y descender de su vehículo en un tramo que, dado la inestabilidad del terreno, fácilmente podría derrumbarse (f. 241-259, c.1.).

3.10. La sociedad QBE Central de Seguros S.A. dio respuesta al llamamiento en garantía formulado por el Instituto Nacional de Vías -Invias-, para lo cual afirmó que se oponía a la totalidad de pretensiones elevadas y que se atenía a los hechos probados. Por otro lado, propuso como excepciones de mérito la inexistencia de la falla del servicio, en tanto no se demostró que el menoscabo patrimonial alegado por la parte actora fuera el resultado de incumplimiento en la funciones del ente público contratante del seguro de responsabilidad extracontractual. En el mismo sentido, consideró que la culpa exclusiva de la víctima surgió como la única fuente del accidente en donde perdió la vida el joven Carlos Andrés Segura



Expediente 41173
Agor: María Edelmira Quintero y otros

Quintero, pues la inobservancia de los mínimos para la preservación de su propia vida, condujo al desenlace fatídico hoy conocido.

3.11. Refirió que la suma solicitada por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante es extremadamente alta, si se tiene en cuenta que no se probó la cuantía del salario devengado por la víctima y, más aún, que ese mismo ingreso fuere multiplicado para calcular la indemnización para la abuela, madre, padre de crianza y hermanos del occiso como si se tratase de valores individuales. Indicó que la suma pretendida por perjuicio moral tampoco cuenta con un respaldo probatorio que permita establecer que la misma realmente corresponde a esa tipología de resarcimiento patrimonial.

3.12. Alegó que la acción ordinaria derivada de contrato de seguro se encontraba prescrita, conforme con lo establecido por el artículo 1081 del Código de Comercio, pues desde el momento de la ocurrencia del siniestro, 16 de octubre de 2003, habían transcurrido más de los 2 años para intentar la acción pertinente (f. 370-375, c.1.).

4 Mediante **sentencia** del 14 de septiembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones. Como fundamento de su decisión esgrimió (f. 449-473, c. ppl.):

4.1. En primer lugar, estimó que se encontraba configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca, Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, entidades públicas a las que le son ajenas las obligaciones atinentes al mantenimiento, conservación, reparación y señalización de la vía en donde tuvo ocurrencia el accidente, en tanto revisado el contenido obligatorio de orden legal y contractual, fue claro para el tribunal que esta competencia le fue asignada, de manera exclusiva, al Instituto Nacional de Vías –Invías.

4.2. Consideró que del material probatorio allegado al expediente, en especial de los testimonios recepcionados, se acreditó que el deceso del señor Carlos Andrés Segura Quintero fue el resultado de su actuar



negligente, en tanto sin protección alguna descendió de su vehículo y empezó a limpiar la vía de las rocas que en esos momentos se desprendían de la montaña ubicada en un costado en aras de abrirse paso, con tan mala suerte que en ejecución de esta descuidada labor uno de esos elementos contundentes impactó en su cabeza y horas más tarde murió en el hospital al que fue trasladado producto de un trauma craneoencefálico severo, actuación que evidentemente se acompasa con la descripción del eximente de responsabilidad denominado hecho exclusivo de la víctima.

4.3. En últimas, concluyó que *"la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero, no fue el producto de una falla del servicio de la entidad demandada, ni mucho menos por ello puede imputársele automáticamente su responsabilidad, pues la falla del servicio tiene como presupuesto el incumplimiento de una obligación, es decir, que en el presente caso, debía necesariamente demostrarse que el daño fue producto de la omisión de la demandada de cumplir con su deber, con su obligación representado en el adecuado mantenimiento de la vía, la recolección de escombros, etc. Empero resulta que los contratos de mantenimiento a que antes se aludió, celebrados por el Invias y el Inco, reflejan como dicha entidad cumplía satisfactoriamente y a cabalidad con sus obligaciones funcionales por la época en que sucedieron los hechos, huelga repetir, con la obligación de conservación y mantenimiento de la vía en comento, y, por ende, no puede endilgársele omisión alguna en esos sentidos"*.

5. El 25 de octubre de 2010, la accionante interpuso y sustentó oportunamente **recurso de apelación** contra la sentencia de primera instancia. En criterio de la parte apelante, la única causa de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero fue la injustificada falla en el mantenimiento de la vía por parte de los entes demandados, tal como quedó demostrado en el proceso, pues los derrumbes en la zona antecedían a la fecha de la ocurrencia de los hechos, deslizamientos que eran de conocimiento general y pese a ello la administración nunca desplegó acción tendiente a evitar accidentes como el que segó la vida del señor Segura Quintero (f. 476-485, c. ppl.).



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

5.1. Refirió que el *a quo* se equivocó al concluir que la muerte de su familiar se debió a un hecho imputable a él, en tanto se acreditó suficientemente que si descendió de su vehículo para retirar las rocas de su camino, como era la costumbre de las personas que transitaban por esa vía, no lo hizo cuando el material rocoso caía, pues las piedras que se encontraban en la carretera ya se estaban ahí antes de su arribo, pero lamentablemente en el instante en que el joven se acercó, ocurrió un nuevo desplome de rocas que al impactar en su humanidad acabaron con su vida.

5.2. Insistió en que no se puede desconocer la actitud negligente, pasmosa e inexcusable de los demandados al desatender el mantenimiento y conservación de la vía y de esa manera procurar evitar el peligro latente que esta representaba, omisión que además era de conocimiento popular, pues para esa fecha los accidentes reportados eran de recurrente ocurrencia, sin que ninguna autoridad pública ejerciera el más mínimo control de la situación.

5.3. Señaló que el tribunal obvió, circunstancia de especial relevancia, el hecho de que para la fecha de los hechos no existiera señalización o restricción que advirtiera el peligro representado por la inestabilidad del terreno que constantemente amenazaba a los usuarios y que era conocida ampliamente por las autoridades demandadas.

5.4. Adujo que se encuentra probado conforme lo exige la ley, el perjuicio extrapatrimonial sufrido con ocasión del deceso del joven Segura Quintero, por cuanto la pérdida de un ser querido, máxime a temprana edad, provoca dolor y aflicción moral de grandes proporciones que, si bien no es cuantificable en dinero, merece una compensación económica que resarza mínimamente la angustia vivida. En igual sentido, indicaron que la ayuda económica que la víctima les brindaba logró ser acreditada, pues gracias a la labor productiva que desempeñaba contribuía a que su familia tuviese una buena calidad de vida.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

5.5. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva declarada por el tribunal en favor del departamento del Valle del Cauca, Instituto Nacional de Concesiones –Inco- y el Ministerio de Transporte, solicitó que esta determinación fuese revocada, en tanto el marco obligacional de todas las entidades desvinculadas conciernen deberes de planeación, veeduría, control o ejecución en el mantenimiento, señalización y tránsito por el corredor vial en donde tuvo ocurrencia el trágico accidente.

6. En la etapa para presentar **alegatos de conclusión** en la presente instancia, el Instituto Nacional de Concesiones –Inco- reiteró el argumento conforme al cual la causa del accidente tuvo su origen en la actuación negligente de la propia víctima. Además sostuvo nuevamente que el tramo de la carretera en donde tuvo ocurrencia el accidente no hacía parte de la concesión por ella supervisada, por tanto no era del resorte de sus funciones ejercer vigilancia sobre aquella (f. 548-551, c.1.).

6.1. Por su parte, los demandantes insistieron en la responsabilidad solidaria que le asistía a las entidades públicas demandadas por la muerte de su familiar, en tanto resaltó que fue con ocasión de la prestación defectuosa del servicio de mantenimiento y señalización en la vía que se concretó el daño que intentan les sea reparado (f. 552-573, c.ppl.).

6.2. La Nación-Ministerio de Transporte reiteró los argumentos esgrimidos en su contestación de la demanda, en punto a solicitar se confirmara la falta de legitimación en la causa por pasiva decretada a su favor (f. 576-579, c.ppl.).

CONSIDERACIONES

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en un proceso que, por su



cuantía², tiene vocación de doble instancia.

II. Los hechos probados

8. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El 16 de octubre de 2003, aproximadamente a las 5: 30 a.m., en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza, perdió la vida el señor Carlos Andrés Segura Quintero a consecuencia del impacto de un elemento contundente que le ocasionó un trauma craneoencefálico con exposición de tejido óseo y masa encefálica que le comprometió las regiones frontal y occipital (acta de levantamiento del cadáver, f. 84-85, c. 2; acta de inspección de cadáver, f. 86, c. 2; protocolo de necropsia, 89-91, c.2; certificado civil de defunción, f. 96, c.3.).

8.2. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente se tiene que, entre los kilómetros 52 y 53 de la carretera que desde Cali conduce a Buenaventura, aproximadamente a las 5: 30 a.m. se encontraban detenidos en la vía varios vehículos, en su mayoría de servicio de carga, ante la imposibilidad de avanzar por la presencia de material rocoso que se desprendía de la montaña ubicada a un costado, situación que motivó a los conductores a descender de sus automotores y remover las piedras, momento en el que se presentó un nuevo desprendimiento que obligó a los presentes a emprender la huida con tan mala fortuna que el señor Carlos Andrés Segura Quintero fue impactado por uno de estos elementos contundentes con el desenlace ya conocido. Así lo narraron los testigos presenciales del hecho (testimonios rendidos al interior del proceso contencioso administrativo, f. 52-57; 72-78, c.3.):

² La Sala encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de \$550 000 000 (f.47, c.1.), la cual resulta superior a los 500 s.m.l.m.v, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2004 (\$179 000 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



8.2.1. El señor Numar Bedoya Galindo al momento de ser interrogado acerca de las circunstancias en las que falleció el señor Segura Quintero manifestó:

Diría yo que conocí el caso pues estuve en el lugar del accidente es decir la fecha no la recuerdo pero era más o menos 6, corrijo 5 a las 5:30 de la mañana me dirigía de Dagua a Buenaventura y en el sector del K 52 y 53 más o menos intermedio había mucha piedra en la carretera por lo cual ya habían parados varios carros en la vía para quitar las piedras y poder pasar, estábamos quitando las piedras y cuando sentíamos que caían más piedras que pegaban sobre los camiones todos quienes estábamos allí salimos a correr a protegernos atrás de los camiones pero estaba lloviznado y oscuro y no veíamos bien y las piedras que caían no las veíamos por lo oscuro, las luces de los carros estaban prendidas pero las baja cuando oí que cayeron las piedras corrimos y escuché un golpe y miré atrás y vi a Andrés que le había caído una piedra y estaba caído, comencé a gritar lo mató lo mató la piedra, pero nos tocó luego esperar y siguió cayendo piedra para poder rescatarlo y de allí o trajimos en un taxi hasta aquí a Dagua al hospital y lo dejamos aquí (...) (f. 54-55, c.2.)

8.2.2. Por su parte el señor Luis Efrén Díaz Labrada, respondió:

Si lo tengo [conocimiento] los hechos sucedieron es decir el accidente en donde él perdió la vida fue el kilómetro 53 de la vía al mar nueva en sentido Cali Buenaventura, perdió la vida por limpiar la carretera para poder seguir el viaje hacía Buenaventura a mí me tocó hacer igualmente lo mismo para poder pasar pues lo hice antes que él, el mismo día a eso de las 5:30 de la mañana fue lo del accidente de Andrés yo paré al otro lado a unos 200 metros a mirar lo de las llantas de mi carro por si llevaba piedras y cuando ellos llegaron no les paré muchas bolas (sic), estaba oscuro y seguí hacía Buenaventura y ellos, es decir Andrés y los otros compañeros se quedaron limpiando la vía y ya estaba en Buenaventura cuando recibí la noticia de la muerte de Andrés ocurrida en el lugar del derrumbe, es decir en el kilómetro 53 (f. 72-83, c.2.).

8.3. Entre los meses de agosto y septiembre de 2003, el Instituto Nacional de Vías –Invias- suscribió al menos tres contratos, n. 033, 035 y 209, cuyos objetos contractuales se circunscribieron a efectuar el mantenimiento de la carretera Cali-Lobogurrero por un valor total aproximado \$813 000 000 durante un término estimado 5.5 meses. (contratos n.º 033, 209 y 039 del 1, 8 de agosto y 9 de septiembre de 2003, respectivamente, f. 273-297, c 1; 30-35, c.2.).

8.4. De conformidad con lo informado por el diario El País en su emisión del 19 de enero de 2004, a la altura del kilómetro 55 de la vía que de Cali



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

conduce a Buenaventura se presentó un nuevo derrumbe de piedras que obstaculizó el paso de vehículos, el cual fue antecedido por al menos 25 eventos como ese, desde diciembre del año inmediatamente anterior, situación que llevó a que el gobernador del Valle del Cauca solicitara al gobierno nacional la entrega del manejo del peaje ubicado en el corregimiento de Loboguerrero, en el marco de una reunión que sostuvieron en el Puerto de Buenaventura (ejemplar del diario El País del 19 de enero de 2004, f. 21-29, c.1.).

8.5. El señor Carlos Andrés Segura Quintero era hijo de Luz Nancy Segura Quintero, su padre de crianza era Humberto Salazar³, nieto de Edelmira Quintero Quintero y hermano de José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura (copia de los registro civiles de nacimiento y testimonios, f. 3, 8, 12, 14, 16, c.1.)

III. Problema jurídico

9. La Sala debe decidir sobre la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas con ocasión de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida por el impacto de un elemento rocoso desprendido desde la montaña ubicada a un costado de la vía, como quiera que la parte actora atribuye ese accidente al mal estado de la vía y la falta de señalización y medidas para evitar el acceso al sitio, mientras que la Nación-Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y el departamento de Valle del Cauca aducen la falta

³ Acerca de la relación paternal que mantenía el señor Humberto Salazar con el joven Carlos Andrés Segura Quintero se rindieron las siguientes declaraciones: El señor Omar Alexander Portilla, quien aseguró conocer a la víctima desde hacía diez años contados desde el momento en que rindió su declaración, señaló: "Preguntado: Manifieste al despacho si tiene conocimiento usted si el señor Carlos Andrés Segura Quintero para los hechos acaecidos el 16 de octubre de 2003, convivía con su familia. En caso positivo, quienes componían su núcleo familiar. Contestó: Si él vivía con la abuela, a señora Edelmira, con sus padres Nancy y Humberto y sus hermanos Leonardo, Claudia y Andrés David" (f. 76, c.3.). Por su parte el señor Fernando Esguerra Torres, quien se presentó como amigo de la infancia del joven Segura Quintero, adujo: "Preguntado: Manifieste al despacho si conocía a señor Carlos Andrés Segura Quintero, bajo que circunstancias y de que tiempo. Contestó: Si lo conocí, él andaba desde pequeño con el papá don Humberto en el camión pues también es motorista, antes de su muerte unos 13 años más o menos" (f. 77, c.3.).



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



de legitimación en la causa por pasiva, y el INVÍAS niega haber incurrido en falla del servicio que contribuyera causalmente a la producción del deceso, por considerar que se originó exclusivamente por el hecho de la propia víctima.

9.1. Con ese fin, se analizará (i) la legitimación en la causa por pasiva de los entes demandados, examen que se efectuará dado que la parte demandante insistió en la responsabilidad patrimonial de los integrantes de la parte pasiva de la *litis*; (ii) las circunstancias particulares en las que acaeció el siniestro, con el fin de determinar si el daño demandado le puede ser imputado a las entidades demandadas, análisis en el que se abordarán los argumentos específicos de la apelante y cobrará especial importancia la conducta observada por la propia víctima.

IV. Análisis de la Sala

10. En cuanto a la **legitimación en la causa**, es preciso aclarar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda⁴. En este sentido, no siempre quien se

⁴ "(...) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda" (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la *litis*, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores^{5,6}

10.1. Igualmente, cabe destacar que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio⁷. De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y

junio de 2004, exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

⁵ [6] *A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que "... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.*

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

⁷ Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1 de marzo de 2006, exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764).



susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

10.2. Con observancia de lo señalado y partiendo de que los cuatro entes estatales se encuentran legitimados en la causa de hecho, en tanto que fueron vinculados debidamente a la *litis* en calidad de demandados, la Sala observa que mientras el INVÍAS ostenta un interés jurídico sustancial en las resultas del presente proceso, no se logra evidenciar ese mismo interés por parte de la Nación-Ministerio de Transporte, de tal forma que las pretensiones formuladas en su contra serán denegadas.

10.3. Al respecto, de conformidad con la normativa vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, el Ministerio de Transporte tenía a su cargo la formulación de políticas públicas para la dirección del sector y del sistema nacional de transporte, sin que tuviera a su cargo labores de mantenimiento y señalización de las vías que integran las diferentes redes viales y carreteras del país⁸, de tal forma que no se logra avizorar la conexión que tendría la Nación, a través de dicha dependencia ministerial, con el desenlace de los hechos invocados por los demandantes.

10.4. Ciertamente, a partir de las normas referenciadas, no es posible

⁸ Sobre la materia, consultar las ley 105 de 1993 y 769 de 2002, y el Decreto 2053 de 2003. Ver, entre otros: Artículo 1 de la Ley 105 de 1993: "Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte.//Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior (...)". Artículo 5 de la Ley 105 de 1993: "Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito". Artículo 20 de la Ley 105 de 1993: "Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción". Artículo 5 de la Ley 769 de 2002: "El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción". Artículo 1 del Decreto 2053 de 2003: "El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo".



Expediente 41173
Maria Edelmira Quintero y otros

dilucidar la conexión que tendría el Ministerio de Transporte con el accidente de tránsito que sucedió entre los kilómetros 52 y 53 de la carretera que de Cali conduce a Buenaventura, puesto que le competía la adopción de políticas y planes generales de cara al sistema y al sector de transporte aludidos, pero no la realización de medidas materiales para garantizar la seguridad de los transeúntes en las vías del país, nexo que tampoco se acreditó mediante los elementos de convicción aportados o practicados en el plenario.

10.5. Por lo tanto, es preciso reiterar la tesis de esta Corporación en el sentido que, en términos generales, la Nación-Ministerio de Transporte carece de la legitimación por pasiva en las causas de asuntos como el propuesto en el *sub judice* -a menos que de conformidad con el material probatorio que obre en cada caso concreto se logre determinar alguna situación especial que evidencie su nexo con los hechos de la demanda⁹ y, en consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada, en cuanto a la falta de legitimación de dicho demandado en el presente asunto.

10.6. Por su parte, en lo que tiene que ver con el departamento del Valle del Cauca la Sala advierte que esta entidad territorial tampoco está llamada a resarcir los eventuales perjuicios que se llegaren a determinar, en la medida en que la vía en que tuvo ocurrencia el accidente en que perdió la vida el señor Segura Quintero es del orden nacional, en tanto su origen y destino están localizados en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional¹⁰, por lo cual su mantenimiento y preservación se encuentra funcionalmente asignada al Instituto Nacional de Vías -Invias-, competencia legal que excluye la intervención de cualquier otra entidad pública. Adicionalmente, tampoco se encuentra prueba que permita

⁹ Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 9 de abril de 2014 y del 14 de julio de 2016, exp. 25000-23-26-000-2000-02191-01(28738) y 25000-23-26-000-2000-01902-01(36198), C.P. Hernán Andrade Rincón, y Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 19001-23-31-000-2000-03932-01(32490), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

¹⁰ Ley 105 de 1993 **Artículo 11. perímetros del transporte por carretera.** Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes:

a. El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

concluir que por convenio o negocio jurídico el departamento demandado hubiese asumido algún tipo de obligación frente a la conservación de la carretera, por el contrario, se acreditó que el mismo instituto contrató su reparación e intervención, tal como se lo imponía la propia ley.

10.7. Por las anteriores razones, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa del departamento del Valle del Cauca por la responsabilidad patrimonial deprecada por los demandantes, con ocasión de la muerte de su familiar.

10.8. Frente a la vinculación del Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, organismo que desde su creación adoptó la naturaleza jurídica¹¹ de un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, cuya función principal se circunscribe a la administración, planeación, estructuración, contratación y ejecución de los negocios de infraestructura del país que se adelanten con participación de capital privado, funciones que en principio no ligan su competencia con asuntos de mantenimiento y conservación de las vías y que por tanto lo mantendrían al margen de tal obligación.

10.9. Revisadas las pruebas aportadas al expediente se encuentra que mediante contrato suscrito el 29 de enero de 1999, el Instituto Nacional de Vías entregó en concesión parte de la malla vial del departamento del Valle del Cauca en aras de su diseño, recuperación y mantenimiento, tramo que no comprendió para ese contrato el sector en donde ocurrió el accidente referido en precedencia. Ahora bien, para la Sala es claro que una vez fue creado el Inco -26 de junio de 2003- el Instituto Nacional de Vías se encontraba obligado a subrogar o ceder, a título gratuito, los convenios relacionados con la infraestructura vial del país, de conformidad con lo consignado en el artículo 18 del Decreto Ley 1800 de 2003, por lo que a partir de ese momento era el establecimiento público –Inco- el llamado a

¹¹ Mediante el Decreto Ley 4165 de 2011, el Inco cambió de denominación para convertirse en la Agencia Nacional de Infraestructura y mutó de establecimiento público a agencia nacional de naturaleza especial.



640

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del concesionario, lo que en principio permitiría la atribución de responsabilidad dado el caso de acreditarse la inobservancia de esa labor y como consecuencia la concreción de algún riesgo para el administrado. Sin embargo, se insiste en que el tramo en que ocurrió el desafortunado accidente no hizo parte de esa concesión, circunstancia que excluye la responsabilidad del Inco frente a la muerte del familiar de los demandantes.

10.10. Adicionalmente, la Sala advierte que para la fecha en que perdió la vida el señor Segura Quintero, el Instituto Nacional de Vías suscribió al menos tres convenios de obra –ver párrafo 8.3-, cuyo objeto contractual correspondió al mantenimiento del sector Cali-Lobo guerrero, ruta 1901, en su condición de administrador de las vías del orden nacional no concesionadas, situación que permite colegir que el Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) no le asistía ningún tipo de competencia en lo que a vigilancia y supervisión de esos contratos se refiere. Ante esta situación fáctica para la Sala resulta ajustado declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de orden material del establecimiento público demandado –Inco-, tal como lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

10.11. Por el contrario, el INVÍAS se encuentra legitimado en la causa por pasiva, puesto, se puede establecer que la vía que de Cali conduce a Buenaventura integra la red vial nacional, por lo que según los artículos 12¹² y 19¹³ de la Ley 105, 6¹⁴ y 115¹⁵ de la Ley 769 de 2002, y 1¹⁶ del

¹² "Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por://1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios://a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.//b. Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.//c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.//d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los anteriores criterios,



Decreto 2056 de 2003, entre otros, el establecimiento público en comento era el responsable de su mantenimiento, señalización y adopción de medidas de seguridad, de modo que es evidente que la actividad a su cargo sí tiene una clara conexión material con los supuestos del libelo introductorio y, en ese orden de ideas, se viabiliza el análisis de su responsabilidad patrimonial.

10.12. Como corolario de lo anterior, se advierte que (i) tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Transporte, el departamento del Valle del Cauca y el Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, determinación que será confirmada en esta instancia y por ende, se denegarán las pretensiones elevadas en su contra y, por el contrario (ii) el Invias se encuentra debidamente legitimado como demandado en el proceso, de tal forma que el juicio de responsabilidad patrimonial se verificará únicamente respecto de dicho ente.

11. De manera previa a iniciar el estudio de la responsabilidad patrimonial del Invias, conviene recordar que en varios puntos del recurso de apelación, la actora aseveró que la sentencia de primera instancia debía ser revocada, en consideración a que en contravía del ordenamiento

de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal.//e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales".

¹³ "Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley".

¹⁴ "Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: (...) Parágrafo 1. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código".

¹⁵ "El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio nacional.//Parágrafo 1°. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción".

¹⁶ "El Instituto Nacional de Vías, Invias, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte".



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

jurídico, en especial de la Constitución Política, (i) se desatendió su clamor para obtener la indemnización por la muerte de un ser querido, a quien se le endilgó culpa exclusiva como causa de ese menoscabo, (ii) se desconoció la actitud negligente de las entidades en el cumplimiento de sus labores de mantenimiento y preservación de la vía y (iii) se pasó por alto la ausencia total de señalización, ora de la realización de obras ora del peligro presentado por la caída de las rocas debido a lo inestable del terreno, además de la falta de medidas de seguridad para impedir el acceso al sitio del accidente.

11.1. En relación con los anteriores argumentos, la Sala se permite poner de presente que de conformidad con el artículo 90¹⁷ de la Constitución Política, norma que radica en el fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad patrimonial contractual y extracontractual del Estado¹⁸, para que surja la responsabilidad del aparato estatal se requiere que confluyan sus dos elementos constitutivos a saber, (i) un daño antijurídico, el cual consiste en un menoscabo cuyo padecimiento no sea impuesto por

¹⁷ "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

¹⁸ "Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."//Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual". Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.



el ordenamiento jurídico¹⁹, y (ii) su imputabilidad a un ente estatal.

11.2. De esta manera, se advierte que se encuentra debidamente probado el **daño** objeto de la demanda, consistente en la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero el 16 de octubre de 2003, alrededor de las 5:30 a.m., a raíz del impacto que sufrió en su cabeza por la caída de una roca que se desprendió de la montaña ubicada en un costado de la vía por donde transitaba, en el momento en que la víctima, junto con otros conductores, retiraban las rocas que obstaculizaban el paso -ver párrafo 8.1. y 8.2-.

11.3. En cuanto a la **imputabilidad** se encuentra acreditado que el lugar en donde tuvo origen el accidente, esto es, entre los kilómetros 52 y 53 de la vía que desde Cali conduce a Buenaventura, correspondía a una vía del orden nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, establecimiento que, en virtud de las funciones de mantenimiento y preservación que le asistían, contrató por lo menos tres obras, convenios sobre los que si bien no se tiene certeza de su ejecución ante la carencia de material probatorio en

¹⁹ "El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que "[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico "el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo" (nota n.º 7 de la providencia en cita: "[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.)." (nota n.º 8 de la providencia en cita: "Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio."). Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que "no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella" (nota n.º 9 de la providencia en cita: "Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amortegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra."), en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, si éste tenía que ser soportado o no por quien lo sufre (nota n.º 10 de la providencia en cita: "Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto."). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2013, exp. 41001-23-31-000-1997-09301-01(27611), C.P. Danilo Rojas Betancourth.



042

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

ese sentido, dan cuenta que esa infraestructura vial estaba a su cargo y, por ende, la obligación en materia de vigilancia y control le asistía.

11.4. Adicionalmente, se encuentra probado que para el día de la ocurrencia del trágico accidente no se visualizaba ningún tipo de señal de advertencia o bien del peligro originado en la caída del material rocoso o por el desarrollo de algún tipo de intervención vial que obligase a los transeúntes a tomar las medidas de prevención necesarias. Tampoco se allegó prueba alguna que acredite que la entidad demandada hubiese tomado medidas para impedir el tránsito o acceso al sitio, en el que recurrentemente caían piedras, inobservadas por el señor Segura Quintero, esto es que el mismo hubiese accedido al sitio saltándose las medidas adoptadas para impedir el acceso.

11.5. En relación con los accidentes de tránsito causados por la omisión del deber legal de mantenimiento y señalización de la vía por la ocurrencia de siniestros que la obstaculicen, la Sala ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado²⁰, cuando se verifique que la entidad responsable conocía del siniestro y no obró de manera consecuente con su obligación, retirando el obstáculo respectivo, instalando la señalización adecuada para que las personas que transitan la vía conozcan

²⁰ "(...) el daño originado como consecuencia de un deslizamiento de tierra es imputable al Estado en los eventos en los cuales el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, o cuando se produce un deslizamiento intempestivo de tierra el cual exigía la instalación de señales preventivas, o cuando no se realiza la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o cuando existe omisión por parte de la administración en la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas. También ha determinado la Sala que para que se pueda establecer la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omisión por parte de la administración en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control respecto de la realización de obras públicas y del tránsito en las vías, con el fin de prevenir los riesgos que con ellos se generen. (...) Por lo tanto, es obligación del Estado cumplir con las disposiciones contenidas en las normas que regulan las condiciones y requisitos que deben reunir las señales preventivas en vías públicas con el fin de evitar daños a los transeúntes o conductores que transitan por las mismas". Sentencia del 20 de septiembre de 2007, exp. 73001-23-31-000-1997-05020-01(15740), actor: Yimed Ramírez Gallego y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver también sentencia de 13 de febrero de 2003, expediente 12.509; sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 11.615; sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente 14.536 sentencia de 8 de noviembre de 2001, expediente 12.820 del Consejo de Estado, Sección Tercera.



del peligro e imponiendo medidas para evitar el acceso al sitio que amenaza peligro. Al respecto, indicó:

*En casos similares como el que ocupa la atención de la Sala, se ha considerado que puede existir falla en la prestación del servicio, si se hubiera avisado sobre la caída del árbol o si la entidad responsable, enterada de la presencia del obstáculo, no hubiera tomado las medidas necesarias para removerlo o para prevenir el peligro que éste implicaba. Al respecto, la Sala ha determinado la responsabilidad en el deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas²¹ y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía²².*²³

11.6. Es así como en el presente caso, al analizar el material probatorio, se encuentra acreditada la existencia de la omisión por parte del Instituto Nacional de Vías –Invias-, en consideración a que incumplió el contenido obligatorio a su cargo contemplado en la ley.

11.7. Para la fecha del accidente de tránsito, esto es, el 16 de octubre de 2003, la señalización, conservación y mantenimiento de la vía se encontraba exclusivamente a cargo del Instituto Nacional de Vías –Invias- por tratarse de una vía del orden nacional, pues tanto su origen como destino se encontraban ubicadas en diferentes departamentos, tal como se expresó en párrafos anteriores. Las anteriores obligaciones se derivan de lo dispuesto por la Ley 105 de 1993²⁴ y el Decreto Ley 1344 de 1970²⁵, mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, normas que se encontraban vigentes para la época de los hechos y por consiguiente, plenamente aplicables al caso.

²¹[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de seis de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actores: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

²² [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de marzo de 2000, expediente 11877, actores: Socorro Parra de Martínez y otros.

²³ Sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 54001-23-31-000-1993-07769-01(18375), actor: María Melba Ortiz Hernández y otros, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

²⁴ Ley mediante la cual se establecieron disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamentó la planeación en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones. Fue publicada en el Diario Oficial 41.158 del 30 de diciembre de 1993.

²⁵ Fue publicado en el Diario Oficial No. 33.139 del 4 de agosto de 1970.



643

Expediente 41173

Acor. María Edelmira Quintero y otros

11.8. Respecto del deber de mantenimiento de las vías, de conformidad con lo señalado por los artículos 11²⁶, 12²⁷ y 19²⁸ de la Ley 105 de 1993, el transporte nacional comprende, entre otras, las vías que cumplen una integración básica de las zonas de producción del país como en el caso

²⁶ Artículo 11 de la Ley 105 de 1993: "Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (...)

El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes Departamentos dentro del perímetro Nacional"

²⁷ **Artículo 12°.-** Definición e integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por:

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.

b. Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.

c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.

d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal.

e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales.

Con el propósito de que se promueva la transferencia de las vías que están hoy a cargo de la Nación hacia los Departamentos, el Ministerio de Transporte adoptará los mecanismos necesarios para que la administración, conservación y rehabilitación de esas vías, se pueda adelantar por contrato.

Las carreteras nacionales podrán convertirse en departamentales a petición del Departamento respectivo, si este demuestra la capacidad para su rehabilitación y conservación.

2. Los ríos, canales de aguas navegables, su señalización y aquellos puertos públicos fluviales de interés Nacional.

3. Los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación, y sus canales de acceso.

4. Las líneas férreas de propiedad de la Nación que incluye su zona, señalización e infraestructura para el control del tránsito.

5. La red de ayudas, comunicaciones y meteorología del transporte aéreo, básicos para prestar los servicios de aeronavegación y la infraestructura aeroportuaria.

6. Los faros, boyas y otros elementos de señalización para el transporte marítimo.

7. Los puentes contruidos sobre los accesos viales en zonas de frontera.

8. Los viaductos, túneles, puentes y accesos en general a las capitales de departamentos, distritos y municipios

²⁸ Artículo 19 de la Ley 105 de 1993: "Constitución y Conservación. Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley."



que nos ocupa, cuya construcción y conservación le corresponde a la entidad del orden nacional creada para tal fin, en este caso el Instituto Nacional de Vías -Invias-.

11.9. Por otra parte, en relación con el deber de señalización de las vías, el artículo 112²⁹ del Decreto Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre la cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertar a los usuarios sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza. La referida señalización en vías nacionales es responsabilidad del Ministerio de obras o en su defecto quien tenga en administración la infraestructura vial.

11.10. En este orden de ideas, las funciones de mantenimiento y conservación le corresponden al Instituto Nacional de Vías cuando se trate de infraestructuras viales nacionales de su propiedad no concesionadas. De igual forma, su señalización le corresponde al mismo establecimiento público.

11.11. Por lo anterior, para la Sala resulta claro que la muerte del señor Segura Quintero como consecuencia del impacto de una roca desprendida le es imputable al Instituto Nacional de Vías, en el entendido que fue a causa de la ausencia de mantenimiento e intervención de la montaña ubicada a un costado de la carretera que este material rocoso se deslizaba ante la mirada impávida de todos los usuarios de la vía, sin que la entidad mediante obras propias, ni a través de sus contratistas, conjurara el riesgo

²⁹ Artículo 112 del Decreto Ley 1344 de 1970: "Las señales de tránsito se dividen en:

1. Señales de reglamentación o reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.

2. Señales de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

3. Señales de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar y se dividen en:

a) Señales para indicar dirección y para identificar carreteras;

b) Señales de localización;

c) Señales de información general."



644

Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

presentado o al menos advirtiera de tal situación.

11.12. Si bien se acreditó que el Instituto Nacional de Vías contrató al menos 3 obras de mantenimiento y conservación para ese tramo de la carretera, labor que le era exigible conforme a su marco obligacional, no se logró establecer que las mismas tuvieran incidencia en la corrección de los constantes desplomes de piedras ocurridos en aquel sector, los cuales eran ampliamente conocidos por las autoridades locales y nacionales.

11.13. Prueba de ese conocimiento lo constituye no solo las declaraciones de los testigos presenciales de los trágicos hechos —ver párrafo 8.2.— usuarios permanentes de la vía, dada su labor como conductores de vehículos de carga, quienes fueron contestes en afirmar que los deslizamientos de rocas era constantes en el sector, sino además la publicación en un diario de amplia circulación departamental que informó, pocos meses posteriores a los sucesos, que a la altura del kilómetro 55 de la carretera que de Cali conduce a Buenaventura se había presentado un nuevo deslizamiento de rocas, otro más que se sumaba a los 25 ocurridos en los meses anteriores, situación que motivó a que el gobernador solicitara al gobierno nacional la entrega de los recaudados por peajes a fin de realizar una intervención por parte suya.

11.14. Este material probatorio demuestra contundentemente que el riesgo presentado en esta zona debido al constante desprendimiento de rocas de la montaña situada en un costado, era ampliamente conocido por las entidades públicas sin que se efectuara una intervención oportuna y acorde con la necesidad presentada, pues si bien, el Invias contrató obras de mantenimiento estas no fueron las requeridas para este tipo de peligro o amenaza.

11.15. De igual forma, la Sala reprocha la ausencia total de señalización que advirtiera a los usuarios de la vía del peligro inminente al que estaban expuestos, o un aviso que restringiera el paso por ese sector.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

12. En lo que tiene que ver con la decisión adoptada por el tribunal de declarar el hecho de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad, la Sala considera que no se dan los supuestos para su configuración, por las razones que pasan a explicarse:

12.1. El juez de la responsabilidad del Estado debe analizar, de oficio o a petición de parte³⁰, la existencia de las causales de eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables en los regímenes subjetivos y objetivos de responsabilidad, entre ellas, el **hecho de la víctima, a partir de lo cual puede concluir, por ejemplo, que esta última se expuso a la causación de su propio daño. Ello en tanto que**³¹:

...mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada – además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la

³⁰ Se recuerda que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el juez de lo contencioso administrativo debe pronunciarse "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada".

³¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, exp: 23354, actor: Luis Carlos Orozco Osorio, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora.

12.2. Tradicionalmente se ha considerado que, para que se configure alguna de las causales de exoneración —fuerza mayor, hecho de la víctima y hecho exclusivo y determinante de un tercero—, se requiere la concurrencia de tres elementos: i) su irresistibilidad; ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto de la demandada³².

12.3. En este mismo sentido es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad. En efecto, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido. Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar que si el hecho de la persona afectada con el daño alegado, fue la causa de la concreción del mismo.

12.4. En el caso concreto la Sala considera que no es cierto que el actuar del señor Segura Quintero determinara la causación de su propio daño, pues si bien la roca que impactó sobre su cabeza lo hizo en el momento en que este se encontraba sobre la vía, una vez descendió de su vehículo sin ningún tipo de protección, lo cierto es que la inestabilidad del terreno era conocida por la entidad demandada que tenía a su cargo los deberes de mantenimiento y señalización de la vía, así como la adopción de medidas para impedir el acceso al sitio del derrumbe, cuyo cumplimiento no se acreditó en el proceso.

³² Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de Marzo de 2011, exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.



12.5. En ese orden, para la Sala la atribución del daño hecha a la propia víctima resulta desproporcionada, en el entendido que fue ella misma quien para cumplir una función que le era propia a la entidad demandada, intentó retirar los obstáculos, junto con otros usuarios, quienes debido a los constantes derrumbes y ante la ausencia total de las autoridades, debían abrirse paso y así poder culminar con su trayecto, aun esto les representara un riesgo que pusiera en peligro hasta su propia vida, que para el caso del señor Segura Quintero lamentablemente se concretó, mismo que la entidad demandada pasó por alto, sin adoptar medida alguna que impidiera su concreción.

13. En consecuencia, acreditado el daño antijurídico, la omisión y el nexo causal entre aquel y ésta, resulta evidente la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Instituto Nacional de Vías -Invias-, razón por la cual se revocará la sentencia apelada para declarar su responsabilidad por los perjuicios derivados de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero.

V. Liquidación de perjuicios

14. En relación con los perjuicios morales, en la demanda se solicitó el reconocimiento de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre, padre de crianza, abuela y hermanos de la víctima.

14.1. La indemnización del perjuicio moral no se trata de restitución ni de reparación, se hace a título de compensación en cuanto "... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia..."³³; (ii) la tasación del perjuicio, por razón de su naturaleza inmaterial, se establece con fundamento en el criterio de la equidad; (iii) la determinación del monto deberá sustentarse en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar

³³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación n.º 13232.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad³⁴.

14.2. En el expediente se encuentra probado que la señora Luz Nancy Segura Quintero era la madre del señor Carlos Andrés Segura Quintero, al paso que Humberto Salazar era su padre de crianza, a quienes se les reconocerá una indemnización de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con el lineamiento jurisprudencial fijado por esta Corporación³⁵, de acuerdo con el cual el reconocimiento de perjuicios de orden moral para aquellas personas que compartían con la víctima una relación afectiva propia de las relaciones paterno-filiales y conyugales corresponde a 100 s.m.l.m.v. En igual sentido se ha fijado como parámetro indemnizatorio a favor de los hermanos del occiso y la abuela la suma de 50 salario mínimos legales mensuales vigentes, filiación que para este caso compartían con el señor Segura Quintero la señora Edelmira Quintero Quintero (abuela) y José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura quienes eran sus hermanos –ver párrafo 8.5.-

14.3. Ahora bien, frente a la solicitud del reconocimiento de lucro cesante a favor de todos los integrantes de la familia de la joven víctima, la Sala empieza por señalar que de cumplirse con todos los presupuestos que recientemente estableció por vía de jurisprudencia esta Corporación para la procedencia de esta tipología de perjuicios, estos solo serían reconocidos a favor de sus padres frente a quienes de conformidad con la consagración legal y jurisprudencial el fallecido le asistiría una obligación alimentaria.

³⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.º 16205.

³⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 26 251, actor: Ana Rita Alarcón vda. de Gutiérrez y otros. C.P. Jaime Orlando Santofimio.



Expediente 41173
actor: María Edelmira Quintero y otros

14.4. En un reciente pronunciamiento la Sección Tercera del Consejo de Estado,³⁶ en sede de unificación jurisprudencial, al analizar la procedencia del reconocimiento del lucro cesante solicitado en favor de los padres de un hijo menor de 25 años y ante necesidad de superar la contradicción presentada por su opuesta presunción de acuerdo con la cual, los padres contribuyen con la manutención de los hijos hasta la misma edad, la Corporación fijó criterios que permiten dilucidar bajo qué supuestos la indemnización por concepto de lucro cesante debe ser otorgada en favor de los progenitores que concurren con esta pretensión. Al respecto la Sección Tercera puntualizó:

62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres.

63. Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento – la capacidad del deudor de la obligación alimentaria– el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían; pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar³⁷.

³⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, exp: 46005, actor: Darío de Jesús Santamaría y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

³⁷ Conforme al criterio empleado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en varias providencias: sentencias de 8 de junio de 2017, exp. 50352; de 11 de junio de 2015, exp. 33355; de 13 de noviembre de 2014, exp. 30753; y de 5 de abril de 2013, exp. 27281, todas con ponencia del suscrito magistrado ponente.



647

Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

14.5. Bajo estos supuestos la Sala encuentra que el primer supuesto de procedencia se encuentra acreditado, comoquiera que el joven Carlos Andrés Segura Quintero³⁸, al momento de su fallecimiento, se dedicaba a la conducción de un vehículo de carga, incluso fue en desempeño de esa labor productiva que sufrió el accidente que ocasionó su muerte.

14.6. Ahora bien, frente al segundo requerimiento concernido con la necesidad alimentaria de los padres, la Sala considera que no se logró acreditar tal condición, pues si bien los testimonios reiteraron en su gran mayoría que Carlos Andrés Segura Quintero aportaba al mantenimiento de su hogar, pero no que los padres no pudiesen satisfacer sus necesidades propias, pues lo realmente probado es que el señor Humberto Segura, su padre de crianza se dedicaba también a la conducción de tracto camiones.

14.7. Por los anteriores argumentos la Sala negará el reconocimiento de este perjuicio.

VI. Responsabilidad del llamado en garantía

15. Debe ahora pronunciarse la Sala sobre la responsabilidad del llamado en garantía, para lo cual verifica que el 8 de octubre de 2003 Compañía Central de Seguros Colpatria S.A. expidió la póliza n.º 120100000169, de la que es tomador, asegurado y beneficiario el Instituto Nacional de Vías y por virtud de la cual se amparó la responsabilidad extracontractual de la entidad entre el 1 de octubre de 2003 y el 1 de enero de 2005 (f. 308, c. 1).

15.1. De acuerdo con la póliza, lo asegurado corresponde a:

Interés asegurable: Indemnizar al asegurado inicial respecto de sus responsabilidades legales provenientes de lesiones personales o muerte causadas a terceros y/o daños materiales a bienes de terceros en conexión con las operaciones del asegurado que involucren la planeación, administración, construcción y mantenimiento de las vías y

³⁸ Al momento de su fallecimiento Carlos Andrés Quintero tenía 20 años de edad, tal como lo certifica el registro civil de nacimiento que da cuenta que nació el 25 de octubre de 1983, f. 3, c.1.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

autopistas, tal como se encuentra descrito y especificado en la póliza original.

Descripción y cuadro de amparos (...) Responsabilidad civil extracontractual derivada de lesiones personales o muerte a personas ocupantes de vehículos que transiten por las carreteras en el territorio nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, como consecuencia en fallas en la prestación del servicio.

15.2. Se pactó como límite a valor asegurado la suma de \$7 500 000 000 cualquier ocurrencia y en el agregado anual.

15.3. En atención a lo pactado entre el INVÍAS y la llamada en garantía, la Sala encuentra que esta última amparó el riesgo de los posibles perjuicios patrimoniales que pueda causar la entidad pública a terceros, aún a través de sus contratistas o subcontratistas, en ejercicio de las actividades propias del asegurado, supuesto que se enmarca dentro de los hechos que dieron lugar a la responsabilidad del instituto en el presente caso y que ocurrieron dentro del período amparado. Por ende, la Compañía Central de Seguros S.A., en virtud de la relación contractual con la entidad condenada en el presente caso, está obligada a repetir en favor de la asegurada el valor pagado por la condena judicial impuesta en el presente fallo, hasta el límite del valor asegurado en la mencionada póliza. Lo anterior deberá tener lugar dentro del mes siguiente a la formalización del reclamo por parte de la entidad pública ante la compañía, de acuerdo con lo estipulado en las condiciones generales de la póliza (f. 353-357, c. 1), siendo entendido que este solo podrá tener lugar una vez la entidad pague efectivamente el valor de la condena impuesta, con lo que se materializa el daño patrimonial que la llamada está obligada a resarcirle. Así se declarará en la parte resolutive de esta decisión.

15.4. Frente a la excepción de prescripción derivada del contrato de seguro propuesta por la compañía aseguradora, la Sala encuentra que no está llamada a prosperar, pues la estipulación legal contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio que fundamenta la excepción, de conformidad con la cual el interesado en obtener el pago del seguro cuenta con dos años contados desde el momento que tuvo o debió tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro no culminaron, pues el



Expediente 41173
Acor: María Edelmira Quintero y otros

conocimiento del hecho dañoso por parte de la entidad ocurrió el 30 de abril de 2005, momento en el cual fue notificada por aviso del contenido de la demanda y con ella de la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, información que le permitió, junto con la contestación de la demandada, llamar en garantía a la entidad aseguradora el 7 de abril de 2006, llamamiento que fue admitido mediante auto del 12 de septiembre del mismo año.

15.5. Así las cosas, la entidad pública llamante hizo uso de las acciones derivadas del contrato de seguro en tiempo, teniendo en cuenta que una vez conoció la existencia del hecho dañoso, el 30 de abril de 2005, llamó en garantía a su aseguradora dentro del término de los dos años.

VI. Costas

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de septiembre de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: SE DECLARA PROBADA las excepción de "Falta de legitimación en la causa por pasiva" en favor de la Nación-Ministerio de



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

Transporte, del departamento del Valle del Cauca y del Instituto Nacional de Concesiones –Inco, hoy Agencia Nacional de Infraestructura.

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías –Invias- responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte de la joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **SE CONDENA** al Instituto Nacional de Vías –Invias- a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

- A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
- A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

CUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO. SE CONDENA a la Compañía Central de Seguros S.A. a pagar al Instituto Nacional de Vías el valor que esta pague efectivamente con ocasión de la presente condena, hasta el límite del valor asegurado, considerando el límite del valor determinado en la póliza de seguros No. 120100000169 expedida por la referida compañía.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO
Presidenta de la Sala

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Consejero

En blanco.





**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B**

Consejera Ponente (E): Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho

Radicación: 760012331000200405560 01 (41173)
Actor: María Edelmira Quintero y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Naturaleza: Acción de reparación directa

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de septiembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

SÍNTESIS DEL CASO

El 16 de octubre de 2003, aproximadamente a las 5: 30 a.m., a la altura de la vereda La Garza, municipio de Dagua, Valle, perdió la vida el señor Carlos Andrés Segura Quintero a consecuencia del impacto que sufrió en su cabeza por una roca que se desprendió de la montaña ubicada en un costado de la vía por donde transitaba, en el momento en que descendió de su vehículo para retirar las piedras que obstruían la carretera.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



1. El 16 de diciembre de 2004¹, los señores María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis, Luz Nancy Segura en su propio nombre y en el de los menores Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura, Humberto Salazar Cabal, en nombre propio y de su hijo menor de edad Juan David Salazar Segura presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y el departamento del Valle del Cauca, procurando las siguientes declaraciones y condenas (f. 30-47, c.1.):

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca, de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los demandantes con la muerte de su hijo, hermano y nieto, CARLOS ANDRÉS SEGURA QUINTERO y por las secuelas de ese hecho trágico acaecido en la vereda La Garza del municipio de Dagua, en la vía que conduce a Buenaventura.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca en su condición de entes administrativa y patrimonialmente responsables, a indemnizar a los demandantes por todos los perjuicios sufridos.

3. Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales infligidos a cada uno de ellos, el equivalente en moneda legal a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, liquidando esta suma de acuerdo al monto del salario mínimo legal vigente en la fecha que se pague según la sentencia o en subsidio en la fecha de la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, conforme a la regulación legal que lo fije o en su defecto según la certificación que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la fecha en que se cancele según la sentencia, de acuerdo al siguiente detalle:

¹ La demanda fue corregida el 13 de mayo de 2005, a solicitud del tribunal, en el sentido de aportar la dirección de notificaciones del Instituto Nacional de Concesiones -Inco-, ente demandado en la presente acción.



Expediente 41173

Actor, María Edelmira Quintero y otros

María Edelmira Quintero Quintero	abuela	200SMLMV
Luz Nancy Segura Quintero	madre	200 SMLMV
Humberto Salazar Cabal	padre crianza	200 SMLMV
José Leonardo Celis Segura	hermano	200 SMLMV
Claudia Alejandra Mosquera	hermano	200 SMLMV
Juan David Salazar Segura	hermano	200 SMLMV

4. De la misma manera condénese a los demandados a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca al pago de todos los perjuicios materiales ocasionados con motivo de ese hecho, de acuerdo a lo que se pruebe en el proceso, así:

A. Para la señora María Edelmira Quintero Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su nieto, Carlos Andrés Segura Quintero, quien en vida se los proporcionaba para la atención de sus gastos y necesidades personales y que ascendían a la para la época del deceso a \$200.000 mensuales

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (I.P.C.) certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2.003, hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

B. Para la señora Luz Nancy Segura Quintero la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas para estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hijo Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener en efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por el Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

Igualmente la indemnización en cuestión debe abarcar tanto el lucro cesante por el periodo vencido o consolidado, que comprende desde el luctuoso hecho el 16 de octubre de 2003 hasta el día de la sentencia en firme, y el periodo futuro, que parte de respectivo fallo ejecutoriado hasta la fecha probable de supervivencia de la demandante, según las aludidas tablas.

C. Para el señor José Leonardo Celis Segura, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de ingresos monetarios que ella (sic) y de los que seguirá privada (sic) hasta el final de sus días por la muerte de su hermano Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su progenitora, de su progenitora, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendían para la época de su deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

Igualmente la indemnización en cuestión debe abarcar tanto el lucro cesante por el periodo vencido o consolidado, que comprende desde el luctuoso hecho el 16 de octubre de 2003 hasta el día de la sentencia en firme, y el periodo futuro, que parte del respectivo fallo ejecutoriado hasta la fecha probable de supervivencia de la demandante, según las aludidas tablas.



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

D. Para la niña Claudia Alejandra Mosquera Segura, quien está representada por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, la de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

E. Para el niño Juan David Salazar Segura, quien está representado por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero y por su padre Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originada en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) y de lo que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba tomando en cuenta el valor del dinero líquido en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

F. Para el señor Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras ordinariamente utilizadas en estos casos, para el daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) experimenta y de los que se seguirá privada (sic) hasta el final de sus días por la muerte de su hijo de crianza Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendían para la época de su deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

4. De manera subsidiaria pido la estimación del lucro cesante tanto para la madre en su nombre propio y en el de sus menores hijos, como para la abuela, padre de crianza y hermanos, se haga con base en el salario mínimo legal vigente en el año 2003 cuando el joven Carlos Andrés Segura Quintero falleció, caso en el cual han de aplicarse las fórmulas matemáticas y financieras pertinentes para establecer el lucro cesante pasado y el futuro: el primero desde la fecha del deceso hasta la respectiva sentencia y el segundo desde la emisión de la misma hasta la fecha estimada probable de vida de cada uno de los reclamantes y la fecha en que la menor alcance la mayoría de edad.

5. Ordenar que el fallo se cumpla en los términos del Código Contencioso Administrativo arts. 176 y 177.

2. Como fundamento de las peticiones aludidas, la parte actora señaló que el 16 de octubre de 2003, en la vía que de Cali conduce a Buenaventura a la altura de la vereda la Garza, municipio de Dagua, el señor Carlos Andrés



Expediente 41173
Acor. María Edelmira Quintero y otros

Segura Quintero perdió la vida tras ser impactado por un gran número de rocas que se desprendieron de la montaña ubicada en uno de los costados de la carretera, impacto que horas después, luego de que el joven fue trasladado al hospital José Rufino Vivas del municipio de Dagua, le causó su muerte debido al trauma craneoencefálico severo que sufrió.

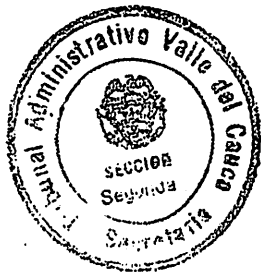
2.1. Destacaron que la injustificada falla en el mantenimiento de la vía por parte de los entes demandados provocó directamente el accidente en que perdió la vida su familiar, en razón de que desde hace más de 30 años, la inestabilidad del terreno originó un desequilibrio en la cordillera debido a la remoción inapropiada de rocas que no fue remediada por las demandadas.

2.2. Señalaron que el derrumbe que se presentó en la vía, por el que la víctima detuvo su marcha a fin de remover algunas de las rocas que obstaculizaban su paso, no fue debidamente señalado o restringido a fin de prevenir el peligro existente, negligencia que contribuyó eficientemente en la causación del daño que intentan les sea reparado.

2.3. Refirieron que el joven Carlos Andrés Segura Quintero convivía al momento de su deceso con su señora madre, padre de crianza y sus hermanos, a quienes dedicaba una parte de sus ingresos mensuales que ascendían para esa fecha a la suma de \$1 000 000 de pesos aproximadamente, mientras que la otra fracción de su salario lo destinaba a la manutención de su abuela, familiares con quienes mantenía vínculos de fraternidad y apoyo.

2.4. Por último indicaron que *"Es indudable que la temprana muerte de Carlos Andrés Segura Quintero, ocasionó un enorme perjuicio a sus padres, hermanos y abuela, pues todos sufrieron un gran dolor moral generado por la desaparición del hijo, hermano y nieto, sumado al detrimento material que experimentaron, en la medida en que su deceso los privó de la ayuda económica que él les brindaba, comoquiera que invertía en ellos la totalidad de los ingresos que recibía como conductor de camión o tractomula"*

II. Trámite procesal



3. La Nación-Ministerio de Transporte **contestó** oportunamente la **demanda** y se opuso a la totalidad de las pretensiones elevadas por la actora. Al respecto, adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de responsabilidad suya, en consideración a que, de conformidad con la normativa vigente al momento de ocurrencia del siniestro e incluso, según las normas que rigieron las funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte antes de que se restructurara en Ministerio de Transporte, no le correspondía realizar el mantenimiento y la señalización de las carreteras en el territorio colombiano, labores que se encontraban repartidas entre el INVÍAS, los departamentos y los municipios.

3.1. De esta manera, adujo que sus competencias se restringían a regular y planificar el sector transporte, y para efectos de fundamentar lo expuesto, trajo a colación las disposiciones pertinentes y el contenido de una sentencia del Consejo de Estado en la que aseveró que se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva (f. 323-325, c.1.).

3.2. El Departamento del Valle del Cauca, en la misma oportunidad procesal, además de indicar que se atenía a lo que resulte probado y de oponerse a las pretensiones, refirió que en la causación del daño padecido por los demandantes medió la fuerza mayor, consistente en un evento de la naturaleza que por su condición de irresistibilidad e imprevisibilidad lo exime de responsabilidad, en consecuencia, solicitó negar las pretensiones formuladas (f. 71-75, c.1.).

3.3. El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- **contestó la demanda**, con escrito en el que propuso como medios exceptivos la inexistencia de responsabilidad y la culpa exclusiva de la víctima. Frente a la primera argumentó que la vía en donde tuvo ocurrencia el fatídico accidente se encontraba en mantenimiento por parte de la entidad a través de la contratación de personal capacitado para tal fin, por lo que no es posible aducir, como lo hace la parte actora, negligencia en el cumplimiento de las funciones a su cargo (f. 298-304, c. 1). En lo que tiene que ver con la



Expediente 41173
Acor. María Edelmira Quintero y otros

configuración del hecho de la víctima estimó que, de conformidad con el relato hecho por los propios demandantes, el señor Carlos Andrés Segura Quintero en una actuación imprudente, descendió de su vehículo y sin protección alguna, pese al peligro que representaba la topografía de la zona, empezó a remover las rocas que poco antes se habían desprendido de la montaña, momento en el que se produjo el derrumbe que acabó con la vida del joven.

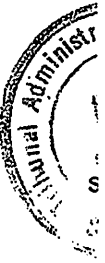
3.4. Por otro lado, señaló que si bien se acreditó el primer elemento necesario para declarar la responsabilidad extracontractual, esto es, el daño consistente en la muerte del familiar de los demandantes, los dos elementos restantes brillan por su ausencia, pues el menoscabo patrimonial no le es imputable a las entidades públicas demandadas, en la medida que es su concreción concurrió la culpa exclusiva de la propia víctima, quien de forma negligente se expuso al riesgo a pesar de las condiciones topográficas por él conocidas, pues no puede desconocerse que se dedicaba profesionalmente al transporte terrestre y decidió libremente exponerse al mismo (f. 298-305, c.1.).

3.5. En escrito separado, la entidad pública llamó en garantía a la Compañía Central de Seguros S.A. en virtud del seguro de responsabilidad extracontractual con ella contratado, a fin de que en caso de una eventual condena en su contra la entidad aseguradora asumiera lo pagado. El tribunal, mediante auto del 12 de septiembre de 2006, admitió el llamamiento en garantía y, en consecuencia, ordenó notificar personalmente al representante legal de la entidad (f. 306-307; 328, c.1.).

3.6. El Instituto Nacional de Concesiones-Inco- excepcionó la inexistencia de responsabilidad, pues en el caso se le adjudica una omisión en el deber de vigilancia de la ejecución del contrato de concesión n.º 0005 de 1999 para el mantenimiento de la malla vial del departamento del Valle del Cauca, concesión a la que no pertenece el tramo en donde ocurrió el accidente en que perdió la vida el señor Segura Quintero, razón por la cual no se encontraba obligada a supervisar el estado de la carretera en



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



cuestión, pues al no ser una vía concesionada no tenía ningún tipo de injerencia sobre ella.

3.7. En igual sentido, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues en su entender no existe identidad de la persona jurídica que figura como extremo de la pretensión y quien presuntamente es responsable del daño causado, pues reiteró que su obligación legal se agotaba en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista.

3.8. Así mismo, refirió que en caso de existir responsabilidad en el deceso del señor Carlos Andrés Segura Quintero esta debía ser imputada al Instituto de Nacional de Vías -Invias-, pues corresponde a esta entidad el deber de vigilancia y control del estado de esa carretera, pues no pertenecía a las vías que fueron dadas en concesión y sobre las cuales ejercía una suerte de interventoría.

3.9. Para finalizar adujo que en la causación de daño alegado medió el hecho exclusivo de la víctima. Estimó que la causa eficiente del daño sufrido por los demandantes tuvo su origen en el abuso de derecho propio ejercido por el señor Segura Quintero, pues se expuso de una manera imprudente al riesgo que representaba aparcarse y descender de su vehículo en un tramo que, dado la inestabilidad del terreno, fácilmente podría derrumbarse (f. 241-259, c.1.).

3.10. La sociedad QBE Central de Seguros S.A. dio respuesta al llamamiento en garantía formulado por el Instituto Nacional de Vías -Invias-, para lo cual afirmó que se oponía a la totalidad de pretensiones elevadas y que se atenía a los hechos probados. Por otro lado, propuso como excepciones de mérito la inexistencia de la falla del servicio, en tanto no se demostró que el menoscabo patrimonial alegado por la parte actora fuera el resultado de incumplimiento en la funciones del ente público contratante del seguro de responsabilidad extracontractual. En el mismo sentido, consideró que la culpa exclusiva de la víctima surgió como la única fuente del accidente en donde perdió la vida el joven Carlos Andrés Segura



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

Quintero, pues la inobservancia de los mínimos para la preservación de su propia vida, condujo al desenlace fatídico hoy conocido.

3.11. Refirió que la suma solicitada por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante es extremadamente alta, si se tiene en cuenta que no se probó la cuantía del salario devengado por la víctima y, más aún, que ese mismo ingreso fuere multiplicado para calcular la indemnización para la abuela, madre, padre de crianza y hermanos del occiso como si se tratase de valores individuales. Indicó que la suma pretendida por perjuicio moral tampoco cuenta con un respaldo probatorio que permita establecer que la misma realmente corresponde a esa tipología de resarcimiento patrimonial.

3.12. Alegó que la acción ordinaria derivada de contrato de seguro se encontraba prescrita, conforme con lo establecido por el artículo 1081 del Código de Comercio, pues desde el momento de la ocurrencia del siniestro, 16 de octubre de 2003, habían transcurrido más de los 2 años para intentar la acción pertinente (f. 370-375, c.1.).

4 Mediante **sentencia** del 14 de septiembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones. Como fundamento de su decisión esgrimió (f. 449-473, c. ppl.):

4.1. En primer lugar, estimó que se encontraba configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca, Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, entidades públicas a las que le son ajenas las obligaciones atinentes al mantenimiento, conservación, reparación y señalización de la vía en donde tuvo ocurrencia el accidente, en tanto revisado el contenido obligatorio de orden legal y contractual, fue claro para el tribunal que esta competencia le fue asignada, de manera exclusiva, al Instituto Nacional de Vías –Invías.

4.2. Consideró que del material probatorio allegado al expediente, en especial de los testimonios recepcionados, se acreditó que el deceso del señor Carlos Andrés Segura Quintero fue el resultado de su actuar



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



negligente, en tanto sin protección alguna descendió de su vehículo y empezó a limpiar la vía de las rocas que en esos momentos se desprendían de la montaña ubicada en un costado en aras de abrirse paso, con tan mala suerte que en ejecución de esta descuidada labor uno de esos elementos contundentes impactó en su cabeza y horas más tarde murió en el hospital al que fue trasladado producto de un trauma craneoencefálico severo, actuación que evidentemente se acompasa con la descripción del eximente de responsabilidad denominado hecho exclusivo de la víctima.

4.3. En últimas, concluyó que *"la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero, no fue el producto de una falla del servicio de la entidad demandada, ni mucho menos por ello puede imputársele automáticamente su responsabilidad, pues la falla del servicio tiene como presupuesto el incumplimiento de una obligación, es decir, que en el presente caso, debía necesariamente demostrarse que el daño fue producto de la omisión de la demandada de cumplir con su deber, con su obligación representado en el adecuado mantenimiento de la vía, la recolección de escombros, etc. Empero resulta que los contratos de mantenimiento a que antes se aludió, celebrados por el Invias y el Inco, reflejan como dicha entidad cumplía satisfactoriamente y a cabalidad con sus obligaciones funcionales por la época en que sucedieron los hechos, huelga repetir, con la obligación de conservación y mantenimiento de la vía en comento, y, por ende, no puede endilgársele omisión alguna en esos sentido"*.

5. El 25 de octubre de 2010, la accionante interpuso y sustentó oportunamente **recurso de apelación** contra la sentencia de primera instancia. En criterio de la parte apelante, la única causa de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero fue la injustificada falla en el mantenimiento de la vía por parte de los entes demandados, tal como quedó demostrado en el proceso, pues los derrumbes en la zona antecedian a la fecha de la ocurrencia de los hechos, deslizamientos que eran de conocimiento general y pese a ello la administración nunca desplegó acción tendiente a evitar accidentes como el que segó la vida del señor Segura Quintero (f. 476-485, c. ppl.).



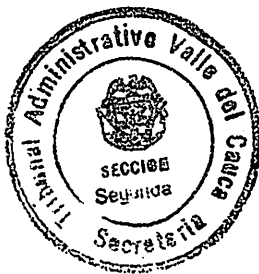
Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

5.1. Refirió que el *a quo* se equivocó al concluir que la muerte de su familiar se debió a un hecho imputable a él, en tanto se acreditó suficientemente que si descendió de su vehículo para retirar las rocas de su camino, como era la costumbre de las personas que transitaban por esa vía, no lo hizo cuando el material rocoso caía, pues las piedras que se encontraban en la carretera ya se estaban ahí antes de su arribo, pero lamentablemente en el instante en que el joven se acercó, ocurrió un nuevo desplome de rocas que al impactar en su humanidad acabaron con su vida.

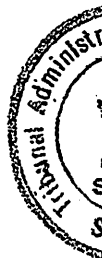
5.2. Insistió en que no se puede desconocer la actitud negligente, pasmosa e inexcusable de los demandados al desatender el mantenimiento y conservación de la vía y de esa manera procurar evitar el peligro latente que esta representaba, omisión que además era de conocimiento popular, pues para esa fecha los accidentes reportados eran de recurrente ocurrencia, sin que ninguna autoridad pública ejerciera el más mínimo control de la situación.

5.3. Señaló que el tribunal obvió, circunstancia de especial relevancia, el hecho de que para la fecha de los hechos no existiera señalización o restricción que advirtiera el peligro representado por la inestabilidad del terreno que constantemente amenazaba a los usuarios y que era conocida ampliamente por las autoridades demandadas.

5.4. Adujo que se encuentra probado conforme lo exige la ley, el perjuicio extrapatrimonial sufrido con ocasión del deceso del joven Segura Quintero, por cuanto la pérdida de un ser querido, máxime a temprana edad, provoca dolor y aflicción moral de grandes proporciones que, si bien no es cuantificable en dinero, merece una compensación económica que resarza mínimamente la angustia vivida. En igual sentido, indicaron que la ayuda económica que la víctima les brindaba logró ser acreditada, pues gracias a la labor productiva que desempeñaba contribuía a que su familia tuviese una buena calidad de vida.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



5.5. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva declarada por el tribunal en favor del departamento del Valle del Cauca, Instituto Nacional de Concesiones –Inco- y el Ministerio de Transporte, solicitó que esta determinación fuese revocada, en tanto el marco obligacional de todas las entidades desvinculadas conciernen deberes de planeación, veeduría, control o ejecución en el mantenimiento, señalización y tránsito por el corredor vial en donde tuvo ocurrencia el trágico accidente.

6. En la etapa para presentar **alegatos de conclusión** en la presente instancia, el Instituto Nacional de Concesiones –Inco- reiteró el argumento conforme al cual la causa del accidente tuvo su origen en la actuación negligente de la propia víctima. Además sostuvo nuevamente que el tramo de la carretera en donde tuvo ocurrencia el accidente no hacía parte de la concesión por ella supervisada, por tanto no era del resorte de sus funciones ejercer vigilancia sobre aquella (f. 548-551, c.1.).

6.1. Por su parte, los demandantes insistieron en la responsabilidad solidaria que le asistía a las entidades públicas demandadas por la muerte de su familiar, en tanto resaltó que fue con ocasión de la prestación defectuosa del servicio de mantenimiento y señalización en la vía que se concretó el daño que intentan les sea reparado (f. 552-573, c.ppl.).

6.2. La Nación-Ministerio de Transporte reiteró los argumentos esgrimidos en su contestación de la demanda, en punto a solicitar se confirmara la falta de legitimación en la causa por pasiva decretada a su favor (f. 576-579, c.ppl.).

CONSIDERACIONES

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en un proceso que, por su



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

cuantía², tiene vocación de doble instancia.

II. Los hechos probados

8. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El 16 de octubre de 2003, aproximadamente a las 5: 30 a.m., en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza, perdió la vida el señor Carlos Andrés Segura Quintero a consecuencia del impacto de un elemento contundente que le ocasionó un trauma craneoencefálico con exposición de tejido óseo y masa encefálica que le comprometió las regiones frontal y occipital (acta de levantamiento del cadáver, f. 84-85, c. 2; acta de inspección de cadáver, f. 86, c. 2; protocolo de necropsia, 89-91, c.2; certificado civil de defunción, f. 96, c.3.).

8.2. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente se tiene que, entre los kilómetros 52 y 53 de la carretera que desde Cali conduce a Buenaventura, aproximadamente a las 5: 30 a.m. se encontraban detenidos en la vía varios vehículos, en su mayoría de servicio de carga, ante la imposibilidad de avanzar por la presencia de material rocoso que se desprendía de la montaña ubicada a un costado, situación que motivó a los conductores a descender de sus automotores y remover las piedras, momento en el que se presentó un nuevo desprendimiento que obligó a los presentes a emprender la huida con tan mala fortuna que el señor Carlos Andrés Segura Quintero fue impactado por uno de estos elementos contundentes con el desenlace ya conocido. Así lo narraron los testigos presenciales del hecho (testimonios rendidos al interior del proceso contencioso administrativo, f. 52-57; 72-78, c.3.):

² La Sala encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de \$550 000 000 (f.47, c.1.), la cual resulta superior a los 500 s.m.l.m.v, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2004 (\$179 000 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



8.2.1. El señor Numar Bedoya Galindo al momento de ser interrogado acerca de las circunstancias en las que falleció el señor Segura Quintero manifestó:

Diría yo que conocí el caso pues estuve en el lugar del accidente es decir la fecha no la recuerdo pero era más o menos 6, corrijo 5 a las 5:30 de la mañana me dirigía de Dagua a Buenaventura y en el sector del K 52 y 53 más o menos intermedio había mucha piedra en la carretera por lo cual ya habían parados varios carros en la vía para quitar las piedras y poder pasar, estábamos quitando las piedras y cuando sentíamos que caían más piedras que pegaban sobre los camiones todos quienes estábamos allí salimos a correr a protegernos atrás de los camiones pero estaba lloviznado y oscuro y no veíamos bien y las piedras que caían no las veíamos por lo oscuro, las luces de los carros estaban prendidas pero las baja cuando oí que cayeron las piedras corrimos y escuché un golpe y miré atrás y vi a Andrés que le había caído una piedra y estaba caído, comencé a gritar lo mató lo mató la piedra, pero nos tocó luego esperar y siguió cayendo piedra para poder rescatarlo y de allí o trajimos en un taxi hasta aquí a Dagua al hospital y lo dejamos aquí (...) (f. 54-55, c.2.)

8.2.2. Por su parte el señor Luis Efrén Díaz Labrada, respondió:

Si lo tengo [conocimiento] los hechos sucedieron es decir el accidente en donde él perdió la vida fue el kilómetro 53 de la vía al mar nueva en sentido Cali Buenaventura, perdió la vida por limpiar la carretera para poder seguir el viaje hacía Buenaventura a mí me tocó hacer igualmente lo mismo para poder pasar pues lo hice antes que él, el mismo día a eso de las 5:30 de la mañana fue lo del accidente de Andrés yo paré al otro lado a unos 200 metros a mirar lo de las llantas de mi carro por si llevaba piedras y cuando ellos llegaron no les paré muchas bolas (sic), estaba oscuro y seguí hacía Buenaventura y ellos, es decir Andrés y los otros compañeros se quedaron limpiando la vía y ya estaba en Buenaventura cuando recibí la noticia de la muerte de Andrés ocurrida en el lugar del derrumbe, es decir en el kilómetro 53 (f. 72-83, c.2.).

8.3. Entre los meses de agosto y septiembre de 2003, el Instituto Nacional de Vías –Invias- suscribió al menos tres contratos, n. 033, 035 y 209, cuyos objetos contractuales se circunscribieron a efectuar el mantenimiento de la carretera Cali-Lobogurrero por un valor total aproximado \$813 000 000 durante un término estimado 5.5 meses. (contratos n.º 033, 209 y 039 del 1, 8 de agosto y 9 de septiembre de 2003, respectivamente, f. 273-297, c 1; 30-35, c.2.).

8.4. De conformidad con lo informado por el diario El País en su emisión del 19 de enero de 2004, a la altura del kilómetro 55 de la vía que de Cali



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

conduce a Buenaventura se presentó un nuevo derrumbe de piedras que obstaculizó el paso de vehículos, el cual fue antecedido por al menos 25 eventos como ese, desde diciembre del año inmediatamente anterior, situación que llevó a que el gobernador del Valle del Cauca solicitara al gobierno nacional la entrega del manejo del peaje ubicado en el corregimiento de Loboguerrero, en el marco de una reunión que sostuvieron en el Puerto de Buenaventura (ejemplar del diario El País del 19 de enero de 2004, f. 21-29, c.1.).

8.5. El señor Carlos Andrés Segura Quintero era hijo de Luz Nancy Segura Quintero, su padre de crianza era Humberto Salazar³, nieto de Edelmira Quintero Quintero y hermano de José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura (copia de los registro civiles de nacimiento y testimonios, f. 3, 8, 12, 14, 16, c.1.)

III. Problema jurídico

9. La Sala debe decidir sobre la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas con ocasión de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida por el impacto de un elemento rocoso desprendido desde la montaña ubicada a un costado de la vía, como quiera que la parte actora atribuye ese accidente al mal estado de la vía y la falta de señalización y medidas para evitar el acceso al sitio, mientras que la Nación-Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Concesiones –Inco- y el departamento de Valle del Cauca aducen la falta

³ Acerca de la relación paternal que mantenía el señor Humberto Salazar con el joven Carlos Anrés Segura Quintero se rindieron las siguientes declaraciones:
El señor Omar Alexander Portilla, quien aseguró conocer a la víctima desde hacía diez años contados desde el momento en que rindió su declaración, señaló: "Preguntado: Manifieste al despacho si tiene conocimiento usted si el señor Carlos Andrés Segura Quintero para los hechos acaecidos el 16 de octubre de 2003, convivía con su familia. En caso positivo, quienes componían su núcleo familiar. Contestó: Sí él vivía con la abuela, a señora Edelmira, con sus padres Nancy y Humberto y sus hermanos Leonardo, Claudia y Andrés David" (f. 76, c.3.). Por su parte el señor Fernando Esguerra Torres, quien se presentó como amigo de la infancia del joven Segura Quintero, adujo: "Preguntado: Manifieste al despacho si conocía a señor Carlos Andrés Segura Quintero, bajo que circunstancias y de que tiempo. Contestó: Si lo conocí, él andaba desde pequeño con el papá don Humberto en el camión pues también es motorista, antes de su muerte unos 13 años más o menos" (f. 77, c.3.).



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



de legitimación en la causa por pasiva, y el INVÍAS niega haber incurrido en falla del servicio que contribuyera causalmente a la producción del deceso, por considerar que se originó exclusivamente por el hecho de la propia víctima.

9.1. Con ese fin, se analizará (i) la legitimación en la causa por pasiva de los entes demandados, examen que se efectuará dado que la parte demandante insistió en la responsabilidad patrimonial de los integrantes de la parte pasiva de la *litis*; (ii) las circunstancias particulares en las que acaeció el siniestro, con el fin de determinar si el daño demandado le puede ser imputado a las entidades demandadas, análisis en el que se abordarán los argumentos específicos de la apelante y cobrará especial importancia la conducta observada por la propia víctima.

IV. Análisis de la Sala

10. En cuanto a la **legitimación en la causa**, es preciso aclarar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda⁴. En este sentido, no siempre quien se

⁴ "(...) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda" (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la *litis*, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores^{5, 6}.

10.1. Igualmente, cabe destacar que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio⁷. De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y

junio de 2004, exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

⁵ [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que "... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

⁷ Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1 de marzo de 2006, exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764).



susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

10.2. Con observancia de lo señalado y partiendo de que los cuatro entes estatales se encuentran legitimados en la causa de hecho, en tanto que fueron vinculados debidamente a la *litis* en calidad de demandados, la Sala observa que mientras el INVÍAS ostenta un interés jurídico sustancial en las resultas del presente proceso, no se logra evidenciar ese mismo interés por parte de la Nación-Ministerio de Transporte, de tal forma que las pretensiones formuladas en su contra serán denegadas.

10.3. Al respecto, de conformidad con la normativa vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, el Ministerio de Transporte tenía a su cargo la formulación de políticas públicas para la dirección del sector y del sistema nacional de transporte, sin que tuviera a su cargo labores de mantenimiento y señalización de las vías que integran las diferentes redes viales y carreteras del país⁸, de tal forma que no se logra avizorar la conexión que tendría la Nación, a través de dicha dependencia ministerial, con el desenlace de los hechos invocados por los demandantes.

10.4. Ciertamente, a partir de las normas referenciadas, no es posible

⁸ Sobre la materia, consultar las ley 105 de 1993 y 769 de 2002, y el Decreto 2053 de 2003. Ver, entre otros: Artículo 1 de la Ley 105 de 1993: "Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte.//Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior (...)". Artículo 5 de la Ley 105 de 1993: "Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito". Artículo 20 de la Ley 105 de 1993: "Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción". Artículo 5 de la Ley 769 de 2002: "El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción". Artículo 1 del Decreto 2053 de 2003: "El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo".



Expediente 41173
Acto María Edelmira Quintero y otros

dilucidar la conexión que tendría el Ministerio de Transporte con el accidente de tránsito que sucedió entre los kilómetros 52 y 53 de la carretera que de Cali conduce a Buenaventura, puesto que le competía la adopción de políticas y planes generales de cara al sistema y al sector de transporte aludidos, pero no la realización de medidas materiales para garantizar la seguridad de los transeúntes en las vías del país, nexo que tampoco se acreditó mediante los elementos de convicción aportados o practicados en el plenario.

10.5. Por lo tanto, es preciso reiterar la tesis de esta Corporación en el sentido que, en términos generales, la Nación-Ministerio de Transporte carece de la legitimación por pasiva en las causas de asuntos como el propuesto en el *sub judice* -a menos que de conformidad con el material probatorio que obre en cada caso concreto se logre determinar alguna situación especial que evidencie su nexo con los hechos de la demanda⁹ y, en consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada, en cuanto a la falta de legitimación de dicho demandado en el presente asunto.

10.6. Por su parte, en lo que tiene que ver con el departamento del Valle del Cauca la Sala advierte que esta entidad territorial tampoco está llamada a resarcir los eventuales perjuicios que se llegaren a determinar, en la medida en que la vía en que tuvo ocurrencia el accidente en que perdió la vida el señor Segura Quintero es del orden nacional, en tanto su origen y destino están localizados en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional¹⁰, por lo cual su mantenimiento y preservación se encuentra funcionalmente asignada al Instituto Nacional de Vías -Invias-, competencia legal que excluye la intervención de cualquier otra entidad pública. Adicionalmente, tampoco se encuentra prueba que permita

⁹ Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 9 de abril de 2014 y del 14 de julio de 2016, exp. 25000-23-26-000-2000-02191-01(28738) y 25000-23-26-000-2000-01902-01(36198), C.P. Hernán Andrade Rincón, y Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 19001-23-31-000-2000-03932-01(32490), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

¹⁰ Ley 105 de 1993 **Artículo 11. perímetros del transporte por carretera.** Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes:
a. El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



concluir que por convenio o negocio jurídico el departamento demandado hubiese asumido algún tipo de obligación frente a la conservación de la carretera, por el contrario, se acreditó que el mismo instituto contrató su reparación e intervención, tal como se lo imponía la propia ley.

10.7. Por las anteriores razones, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa del departamento del Valle del Cauca por la responsabilidad patrimonial deprecada por los demandantes, con ocasión de la muerte de su familiar.

10.8. Frente a la vinculación del Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, organismo que desde su creación adoptó la naturaleza jurídica¹¹ de un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, cuya función principal se circunscribe a la administración, planeación, estructuración, contratación y ejecución de los negocios de infraestructura del país que se adelanten con participación de capital privado, funciones que en principio no ligan su competencia con asuntos de mantenimiento y conservación de las vías y que por tanto lo mantendrían al margen de tal obligación.

10.9. Revisadas las pruebas aportadas al expediente se encuentra que mediante contrato suscrito el 29 de enero de 1999, el Instituto Nacional de Vías entregó en concesión parte de la malla vial del departamento del Valle del Cauca en aras de su diseño, recuperación y mantenimiento, tramo que no comprendió para ese contrato el sector en donde ocurrió el accidente referido en precedencia. Ahora bien, para la Sala es claro que una vez fue creado el Inco -26 de junio de 2003- el Instituto Nacional de Vías se encontraba obligado a subrogar o ceder, a título gratuito, los convenios relacionados con la infraestructura vial del país, de conformidad con lo consignado en el artículo 18 del Decreto Ley 1800 de 2003, por lo que a partir de ese momento era el establecimiento público –Inco- el llamado a

¹¹ Mediante el Decreto Ley 4165 de 2011, el Inco cambió de denominación para convertirse en la Agencia Nacional de Infraestructura y mutó de establecimiento público a agencia nacional de naturaleza especial.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del concesionario, lo que en principio permitiría la atribución de responsabilidad dado el caso de acreditarse la inobservancia de esa labor y como consecuencia la concreción de algún riesgo para el administrado. Sin embargo, se insiste en que el tramo en que ocurrió el desafortunado accidente no hizo parte de esa concesión, circunstancia que excluye la responsabilidad del Inco frente a la muerte del familiar de los demandantes.

10.10. Adicionalmente, la Sala advierte que para la fecha en que perdió la vida el señor Segura Quintero, el Instituto Nacional de Vías suscribió al menos tres convenios de obra –ver párrafo 8.3-, cuyo objeto contractual correspondió al mantenimiento del sector Cali-Lobo guerrero, ruta 1901, en su condición de administrador de las vías del orden nacional no concesionadas, situación que permite colegir que el Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) no le asistía ningún tipo de competencia en lo que a vigilancia y supervisión de esos contratos se refiere. Ante esta situación fáctica para la Sala resulta ajustado declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de orden material del establecimiento público demandado –Inco-, tal como lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

10.11. Por el contrario, el INVÍAS se encuentra legitimado en la causa por pasiva, puesto, se puede establecer que la vía que de Cali conduce a Buenaventura integra la red vial nacional, por lo que según los artículos 12¹² y 19¹³ de la Ley 105, 6¹⁴ y 115¹⁵ de la Ley 769 de 2002, y 1¹⁶ del

¹² "Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por://1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios://a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.//b. Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.//c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.//d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los anteriores criterios,



Decreto 2056 de 2003, entre otros, el establecimiento público en comento era el responsable de su mantenimiento, señalización y adopción de medidas de seguridad, de modo que es evidente que la actividad a su cargo sí tiene una clara conexión material con los supuestos del libelo introductorio y, en ese orden de ideas, se viabiliza el análisis de su responsabilidad patrimonial.

10.12. Como corolario de lo anterior, se advierte que (i) tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Transporte, el departamento del Valle del Cauca y el Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, determinación que será confirmada en esta instancia y por ende, se denegarán las pretensiones elevadas en su contra y, por el contrario (ii) el Invias se encuentra debidamente legitimado como demandado en el proceso, de tal forma que el juicio de responsabilidad patrimonial se verificará únicamente respecto de dicho ente.

11. De manera previa a iniciar el estudio de la responsabilidad patrimonial del Invias, conviene recordar que en varios puntos del recurso de apelación, la actora aseveró que la sentencia de primera instancia debía ser revocada, en consideración a que en contravía del ordenamiento

de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal.//e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales".

¹³ "Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley".

¹⁴ "Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: (...) Parágrafo 1. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código".

¹⁵ "El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio nacional.//Parágrafo 1°. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción".

¹⁶ "El Instituto Nacional de Vías, Invias, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte".



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

jurídico, en especial de la Constitución Política, (i) se desatendió su clamor para obtener la indemnización por la muerte de un ser querido, a quien se le endilgó culpa exclusiva como causa de ese menoscabo, (ii) se desconoció la actitud negligente de las entidades en el cumplimiento de sus labores de mantenimiento y preservación de la vía y (iii) se pasó por alto la ausencia total de señalización, ora de la realización de obras ora del peligro presentado por la caída de las rocas debido a lo inestable del terreno, además de la falta de medidas de seguridad para impedir el acceso al sitio del accidente.

11.1. En relación con los anteriores argumentos, la Sala se permite poner de presente que de conformidad con el artículo 90¹⁷ de la Constitución Política, norma que radica en el fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad patrimonial contractual y extracontractual del Estado¹⁸, para que surja la responsabilidad del aparato estatal se requiere que confluayan sus dos elementos constitutivos a saber, (i) un daño antijurídico, el cual consiste en un menoscabo cuyo padecimiento no sea impuesto por

¹⁷ "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

¹⁸ "Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."//Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual". Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

el ordenamiento jurídico¹⁹, y (ii) su imputabilidad a un ente estatal.

11.2. De esta manera, se advierte que se encuentra debidamente probado el **daño** objeto de la demanda, consistente en la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero el 16 de octubre de 2003, alrededor de las 5:30 a.m., a raíz del impacto que sufrió en su cabeza por la caída de una roca que se desprendió de la montaña ubicada en un costado de la vía por donde transitaba, en el momento en que la víctima, junto con otros conductores, retiraban las rocas que obstaculizaban el paso -ver párrafo 8.1. y 8.2-.

11.3. En cuanto a la **imputabilidad** se encuentra acreditado que el lugar en donde tuvo origen el accidente, esto es, entre los kilómetros 52 y 53 de la vía que desde Cali conduce a Buenaventura, correspondía a una vía del orden nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, establecimiento que, en virtud de las funciones de mantenimiento y preservación que le asistían, contrató por lo menos tres obras, convenios sobre los que si bien no se tiene certeza de su ejecución ante la carencia de material probatorio en

¹⁹ "El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que "[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico 'el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo' (nota n.º 7 de la providencia en cita: '[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.)' (nota n.º 8 de la providencia en cita: 'Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.'). Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que 'no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella' (nota n.º 9 de la providencia en cita: 'Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amortegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.')., en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, si éste tenía que ser soportado o no por quien lo sufre (nota n.º 10 de la providencia en cita: 'Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.').". Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2013, exp. 41001-23-31-000-1997-09301-01(27611), C.P. Danilo Rojas Betancourth.



042

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

ese sentido, dan cuenta que esa infraestructura vial estaba a su cargo y, por ende, la obligación en materia de vigilancia y control le asistía.

11.4. Adicionalmente, se encuentra probado que para el día de la ocurrencia del trágico accidente no se visualizaba ningún tipo de señal de advertencia o bien del peligro originado en la caída del material rocoso o por el desarrollo de algún tipo de intervención vial que obligase a los transeúntes a tomar las medidas de prevención necesarias. Tampoco se allegó prueba alguna que acredite que la entidad demandada hubiese tomado medidas para impedir el tránsito o acceso al sitio, en el que recurrentemente caían piedras, inobservadas por el señor Segura Quintero, esto es que el mismo hubiese accedido al sitio saltándose las medidas adoptadas para impedir el acceso.

11.5. En relación con los accidentes de tránsito causados por la omisión del deber legal de mantenimiento y señalización de la vía por la ocurrencia de siniestros que la obstaculicen, la Sala ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado²⁰, cuando se verifique que la entidad responsable conocía del siniestro y no obró de manera consecuente con su obligación, retirando el obstáculo respectivo, instalando la señalización adecuada para que las personas que transitan la vía conozcan

²⁰ "(...) el daño originado como consecuencia de un deslizamiento de tierra es imputable al Estado en los eventos en los cuales el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, o cuando se produce un deslizamiento intempestivo de tierra el cual exigía la instalación de señales preventivas, o cuando no se realiza la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o cuando existe omisión por parte de la administración en la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas. También ha determinado la Sala que para que se pueda establecer la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omisión por parte de la administración en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control respecto de la realización de obras públicas y del tránsito en las vías, con el fin de prevenir los riesgos que con ellos se generen. (...) Por lo tanto, es obligación del Estado cumplir con las disposiciones contenidas en las normas que regulan las condiciones y requisitos que deben reunir las señales preventivas en vías públicas con el fin de evitar daños a los transeúntes o conductores que transitan por las mismas". Sentencia del 20 de septiembre de 2007, exp. 73001-23-31-000-1997-05020-01(15740), actor: Yimed Ramírez Gallego y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver también sentencia de 13 de febrero de 2003, expediente 11.615; sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 11.615; sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente 14.536 sentencia de 8 de noviembre de 2001, expediente 12.820 del Consejo de Estado, Sección Tercera.



del peligro e imponiendo medidas para evitar el acceso al sitio que amenaza peligro. Al respecto, indicó:

En casos similares como el que ocupa la atención de la Sala, se ha considerado que puede existir falla en la prestación del servicio, si se hubiera avisado sobre la caída del árbol o si la entidad responsable, enterada de la presencia del obstáculo, no hubiera tomado las medidas necesarias para removerlo o para prevenir el peligro que éste implicaba. Al respecto, la Sala ha determinado la responsabilidad en el deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas²¹ y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía^{22, 23}

11.6. Es así como en el presente caso, al analizar el material probatorio, se encuentra acreditada la existencia de la omisión por parte del Instituto Nacional de Vías –Invias-, en consideración a que incumplió el contenido obligatorio a su cargo contemplado en la ley.

11.7. Para la fecha del accidente de tránsito, esto es, el 16 de octubre de 2003, la señalización, conservación y mantenimiento de la vía se encontraba exclusivamente a cargo del Instituto Nacional de Vías –Invias- por tratarse de una vía del orden nacional, pues tanto su origen como destino se encontraban ubicadas en diferentes departamentos, tal como se expresó en párrafos anteriores. Las anteriores obligaciones se derivan de lo dispuesto por la Ley 105 de 1993²⁴ y el Decreto Ley 1344 de 1970²⁵, mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, normas que se encontraban vigentes para la época de los hechos y por consiguiente, plenamente aplicables al caso.

²¹[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de seis de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actores: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

²² [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de marzo de 2000, expediente 11877, actores: Socorro Parra de Martínez y otros.

²³ Sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 54001-23-31-000-1993-07769-01(18375), actor: María Melba Ortiz Hernández y otros, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

²⁴ Ley mediante la cual se establecieron disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamentó la planeación en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones. Fue publicada en el Diario Oficial 41.158 del 30 de diciembre de 1993.

²⁵ Fue publicado en el Diario Oficial No. 33.139 del 4 de agosto de 1970.



643

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

11.8. Respecto del deber de mantenimiento de las vías, de conformidad con lo señalado por los artículos 11²⁶, 12²⁷ y 19²⁸ de la Ley 105 de 1993, el transporte nacional comprende, entre otras, las vías que cumplen una integración básica de las zonas de producción del país como en el caso

²⁶ Artículo 11 de la Ley 105 de 1993: "Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (...)".

El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes Departamentos dentro del perímetro Nacional"

²⁷ **Artículo 12º.-** Definición e integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por:

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.

b. Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.

c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.

d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal.

e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales.

Con el propósito de que se promueva la transferencia de las vías que están hoy a cargo de la Nación hacia los Departamentos, el Ministerio de Transporte adoptará los mecanismos necesarios para que la administración, conservación y rehabilitación de esas vías, se pueda adelantar por contrato.

Las carreteras nacionales podrán convertirse en departamentales a petición del Departamento respectivo, si este demuestra la capacidad para su rehabilitación y conservación.

2. Los ríos, canales de aguas navegables, su señalización y aquellos puertos públicos fluviales de interés Nacional.

3. Los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación, y sus canales de acceso.

4. Las líneas férreas de propiedad de la Nación que incluye su zona, señalización e infraestructura para el control del tránsito.

5. La red de ayudas, comunicaciones y meteorología del transporte aéreo, básicos para prestar los servicios de aeronavegación y la infraestructura aeroportuaria.

6. Los faros, boyas y otros elementos de señalización para el transporte marítimo.

7. Los puentes construidos sobre los accesos viales en zonas de frontera.

8. Los viaductos, túneles, puentes y accesos en general a las capitales de departamentos, distritos y municipios

²⁸ Artículo 19 de la Ley 105 de 1993: "Constitución y Conservación. Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley."



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

que nos ocupa, cuya construcción y conservación le corresponde a la entidad del orden nacional creada para tal fin, en este caso el Instituto Nacional de Vías –Invias-.

11.9. Por otra parte, en relación con el deber de señalización de las vías, el artículo 112²⁹ del Decreto Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre la cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertar a los usuarios sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza. La referida señalización en vías nacionales es responsabilidad del Ministerio de obras o en su defecto quien tenga en administración la infraestructura vial.

11.10. En este orden de ideas, las funciones de mantenimiento y conservación le corresponden al Instituto Nacional de Vías cuando se trate de infraestructuras viales nacionales de su propiedad no concesionadas. De igual forma, su señalización le corresponde al mismo establecimiento público.

11.11. Por lo anterior, para la Sala resulta claro que la muerte del señor Segura Quintero como consecuencia del impacto de una roca desprendida le es imputable al Instituto Nacional de Vías, en el entendido que fue a causa de la ausencia de mantenimiento e intervención de la montaña ubicada a un costado de la carretera que este material rocoso se deslizaba ante la mirada impávida de todos los usuarios de la vía, sin que la entidad mediante obras propias, ni a través de sus contratistas, conjurara el riesgo

²⁹ Artículo 112 del Decreto Ley 1344 de 1970: "Las señales de tránsito se dividen en:

1. Señales de reglamentación o reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.

2. Señales de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

3. Señales de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar y se dividen en:

a) Señales para indicar dirección y para identificar carreteras;

b) Señales de localización;

c) Señales de información general."



644

Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

presentado o al menos advirtiera de tal situación.

11.12. Si bien se acreditó que el Instituto Nacional de Vías contrató al menos 3 obras de mantenimiento y conservación para ese tramo de la carretera, labor que le era exigible conforme a su marco obligacional, no se logró establecer que las mismas tuvieran incidencia en la corrección de los constantes desplomes de piedras ocurridos en aquel sector, los cuales eran ampliamente conocidos por las autoridades locales y nacionales.

11.13. Prueba de ese conocimiento lo constituye no solo las declaraciones de los testigos presenciales de los trágicos hechos —ver párrafo 8.2.— usuarios permanentes de la vía, dada su labor como conductores de vehículos de carga, quienes fueron contestes en afirmar que los deslizamientos de rocas era constantes en el sector, sino además la publicación en un diario de amplia circulación departamental que informó, pocos meses posteriores a los sucesos, que a la altura del kilómetro 55 de la carretera que de Cali conduce a Buenaventura se había presentado un nuevo deslizamiento de rocas, otro más que se sumaba a los 25 ocurridos en los meses anteriores, situación que motivó a que el gobernador solicitara al gobierno nacional la entrega de los recaudados por peajes a fin de realizar una intervención por parte suya.

11.14. Este material probatorio demuestra contundentemente que el riesgo presentado en esta zona debido al constante desprendimiento de rocas de la montaña situada en un costado, era ampliamente conocido por las entidades públicas sin que se efectuara una intervención oportuna y acorde con la necesidad presentada, pues si bien, el Invias contrató obras de mantenimiento estas no fueron las requeridas para este tipo de peligro o amenaza.

11.15. De igual forma, la Sala reprocha la ausencia total de señalización que advirtiera a los usuarios de la vía del peligro inminente al que estaban expuestos, o un aviso que restringiera el paso por ese sector.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



12. En lo que tiene que ver con la decisión adoptada por el tribunal de declarar el hecho de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad, la Sala considera que no se dan los supuestos para su configuración, por las razones que pasan a explicarse:

12.1. El juez de la responsabilidad del Estado debe analizar, de oficio o a petición de parte³⁰, la existencia de las causales de eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables en los regímenes subjetivos y objetivos de responsabilidad, entre ellas, el **hecho de la víctima, a partir de lo cual puede concluir**, por ejemplo, que esta última se expuso a la causación de su propio daño. Ello en tanto que³¹:

...mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada – además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la

³⁰ Se recuerda que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el juez de lo contencioso administrativo debe pronunciarse "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada".

³¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, exp: 23354, actor: Luis Carlos Orozco Osorio, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora.

12.2. Tradicionalmente se ha considerado que, para que se configure alguna de las causales de exoneración —fuerza mayor, hecho de la víctima y hecho exclusivo y determinante de un tercero—, se requiere la concurrencia de tres elementos: i) su irresistibilidad; ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto de la demandada³².

12.3. En este mismo sentido es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad. En efecto, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido. Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar que si el hecho de la persona afectada con el daño alegado, fue la causa de la concreción del mismo.

12.4. En el **caso concreto** la Sala considera que no es cierto que el actuar del señor Segura Quintero determinara la causación de su propio daño, pues si bien la roca que impactó sobre su cabeza lo hizo en el momento en que este se encontraba sobre la vía, una vez descendió de su vehículo sin ningún tipo de protección, lo cierto es que la inestabilidad del terreno era conocida por la entidad demandada que tenía a su cargo los deberes de mantenimiento y señalización de la vía, así como la adopción de medidas para impedir el acceso al sitio del derrumbe, cuyo cumplimiento no se acreditó en el proceso.

³² Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de Marzo de 2011, exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.



12.5. En ese orden, para la Sala la atribución del daño hecha a la propia víctima resulta desproporcionada, en el entendido que fue ella misma quien para cumplir una función que le era propia a la entidad demandada, intentó retirar los obstáculos, junto con otros usuarios, quienes debido a los constantes derrumbes y ante la ausencia total de las autoridades, debían abrirse paso y así poder culminar con su trayecto, aun esto les representara un riesgo que pusiera en peligro hasta su propia vida, que para el caso del señor Segura Quintero lamentablemente se concretó, mismo que la entidad demandada pasó por alto, sin adoptar medida alguna que impidiera su concreción.

13. En consecuencia, acreditado el daño antijurídico, la omisión y el nexo causal entre aquel y ésta, resulta evidente la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Instituto Nacional de Vías –Invias-, razón por la cual se revocará la sentencia apelada para declarar su responsabilidad por los perjuicios derivados de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero.

V. Liquidación de perjuicios

14. En relación con los perjuicios morales, en la demanda se solicitó el reconocimiento de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre, padre de crianza, abuela y hermanos de la víctima.

14.1. La indemnización del perjuicio moral no se trata de restitución ni de reparación, se hace a título de compensación en cuanto "... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia..."³³; (ii) la tasación del perjuicio, por razón de su naturaleza inmaterial, se establece con fundamento en el criterio de la equidad; (iii) la determinación del monto deberá sustentarse en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar

³³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación n.º 13232.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad³⁴.

14.2. En el expediente se encuentra probado que la señora Luz Nancy Segura Quintero era la madre del señor Carlos Andrés Segura Quintero, al paso que Humberto Salazar era su padre de crianza, a quienes se les reconocerá una indemnización de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con el lineamiento jurisprudencial fijado por esta Corporación³⁵, de acuerdo con el cual el reconocimiento de perjuicios de orden moral para aquellas personas que compartían con la víctima una relación afectiva propia de las relaciones paterno-filiales y conyugales corresponde a 100 s.m.l.m.v. En igual sentido se ha fijado como parámetro indemnizatorio a favor de los hermanos del occiso y la abuela la suma de 50 salario mínimos legales mensuales vigentes, filiación que para este caso compartían con el señor Segura Quintero la señora Edelmira Quintero Quintero (abuela) y José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura quienes eran sus hermanos –ver párrafo 8.5.-

14.3. Ahora bien, frente a la solicitud del reconocimiento de lucro cesante a favor de todos los integrantes de la familia de la joven víctima, la Sala empieza por señalar que de cumplirse con todos los presupuestos que recientemente estableció por vía de jurisprudencia esta Corporación para la procedencia de esta tipología de perjuicios, estos solo serían reconocidos a favor de sus padres frente a quienes de conformidad con la consagración legal y jurisprudencial el fallecido le asistiría una obligación alimentaria.

³⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.º 16205.

³⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 26 251, actor: Ana Rita Alarcón vda. de Gutiérrez y otros. C.P. Jaime Orlando Santofimio.



Expediente 41173
actor: María Edelmira Quintero y otros

14.4. En un reciente pronunciamiento la Sección Tercera del Consejo de Estado,³⁶ en sede de unificación jurisprudencial, al analizar la procedencia del reconocimiento del lucro cesante solicitado en favor de los padres de un hijo menor de 25 años y ante necesidad de superar la contradicción presentada por su opuesta presunción de acuerdo con la cual, los padres contribuyen con la manutención de los hijos hasta la misma edad, la Corporación fijó criterios que permiten dilucidar bajo qué supuestos la indemnización por concepto de lucro cesante debe ser otorgada en favor de los progenitores que concurren con esta pretensión. Al respecto la Sección Tercera puntualizó:

62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres.

63. Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento – la capacidad del deudor de la obligación alimentaria– el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían; pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar³⁷.

³⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, actor: Darío de Jesús Santamaría y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

³⁷ Conforme al criterio empleado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en varias providencias: sentencias de 8 de junio de 2017, exp. 50352; de 11 de junio de 2015, exp. 33355; de 13 de noviembre de 2014, exp. 30753; y de 5 de abril de 2013, exp. 27281, todas con ponencia del suscrito magistrado ponente.



647

Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

14.5. Bajo estos supuestos la Sala encuentra que el primer supuesto de procedencia se encuentra acreditado, comoquiera que el joven Carlos Andrés Segura Quintero³⁸, al momento de su fallecimiento, se dedicaba a la conducción de un vehículo de carga, incluso fue en desempeño de esa labor productiva que sufrió el accidente que ocasionó su muerte.

14.6. Ahora bien, frente al segundo requerimiento concernido con la necesidad alimentaria de los padres, la Sala considera que no se logró acreditar tal condición, pues si bien los testimonios reiteraron en su gran mayoría que Carlos Andrés Segura Quintero aportaba al mantenimiento de su hogar, pero no que los padres no pudiesen satisfacer sus necesidades propias, pues lo realmente probado es que el señor Humberto Segura, su padre de crianza se dedicaba también a la conducción de tracto camiones.

14.7. Por los anteriores argumentos la Sala negará el reconocimiento de este perjuicio.

VI. Responsabilidad del llamado en garantía

15. Debe ahora pronunciarse la Sala sobre la responsabilidad del llamado en garantía, para lo cual verifica que el 8 de octubre de 2003 Compañía Central de Seguros Colpatria S.A. expidió la póliza n.º 120100000169, de la que es tomador, asegurado y beneficiario el Instituto Nacional de Vías y por virtud de la cual se amparó la responsabilidad extracontractual de la entidad entre el 1 de octubre de 2003 y el 1 de enero de 2005 (f. 308, c. 1).

15.1. De acuerdo con la póliza, lo asegurado corresponde a:

Interés asegurable: Indemnizar al asegurado inicial respecto de sus responsabilidades legales provenientes de lesiones personales o muerte causadas a terceros y/o daños materiales a bienes de terceros en conexión con las operaciones del asegurado que involucren la planeación, administración, construcción y mantenimiento de las vías y

³⁸ Al momento de su fallecimiento Carlos Andrés Quintero tenía 20 años de edad, tal como lo certifica el registro civil de nacimiento que da cuenta que nació el 25 de octubre de 1983, f. 3, c.1.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

autopistas , tal como se encuentra descrito y especificado en la póliza original.

Descripción y cuadro de amparos (...) Responsabilidad civil extracontractual derivada de lesiones personales o muerte a personas ocupantes de vehículos que transiten por las carreteras en el territorio nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, como consecuencia en fallas en la prestación del servicio.

15.2. Se pactó como límite a valor asegurado la suma de \$7 500 000 000 cualquier ocurrencia y en el agregado anual.

15.3. En atención a lo pactado entre el INVÍAS y la llamada en garantía, la Sala encuentra que esta última amparó el riesgo de los posibles perjuicios patrimoniales que pueda causar la entidad pública a terceros, aún a través de sus contratistas o subcontratistas, en ejercicio de las actividades propias del asegurado, supuesto que se enmarca dentro de los hechos que dieron lugar a la responsabilidad del instituto en el presente caso y que ocurrieron dentro del período amparado. Por ende, la Compañía Central de Seguros S.A., en virtud de la relación contractual con la entidad condenada en el presente caso, está obligada a repetir en favor de la asegurada el valor pagado por la condena judicial impuesta en el presente fallo, hasta el límite del valor asegurado en la mencionada póliza. Lo anterior deberá tener lugar dentro del mes siguiente a la formalización del reclamo por parte de la entidad pública ante la compañía, de acuerdo con lo estipulado en las condiciones generales de la póliza (f. 353-357, c. 1), siendo entendido que este solo podrá tener lugar una vez la entidad pague efectivamente el valor de la condena impuesta, con lo que se materializa el daño patrimonial que la llamada está obligada a resarcirle. Así se declarará en la parte resolutive de esta decisión.

15.4. Frente a la excepción de prescripción derivada del contrato de seguro propuesta por la compañía aseguradora, la Sala encuentra que no está llamada a prosperar, pues la estipulación legal contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio que fundamenta la excepción, de conformidad con la cual el interesado en obtener el pago del seguro cuenta con dos años contados desde el momento que tuvo o debió tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro no culminaron, pues el



648

Expediente 41173
Acor: María Edelmira Quintero y otros

conocimiento del hecho dañoso por parte de la entidad ocurrió el 30 de abril de 2005, momento en el cual fue notificada por aviso del contenido de la demanda y con ella de la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, información que le permitió, junto con la contestación de la demandada, llamar en garantía a la entidad aseguradora el 7 de abril de 2006, llamamiento que fue admitido mediante auto del 12 de septiembre del mismo año.

15.5. Así las cosas, la entidad pública llamante hizo uso de las acciones derivadas del contrato de seguro en tiempo, teniendo en cuenta que una vez conoció la existencia del hecho dañoso, el 30 de abril de 2005, llamó en garantía a su aseguradora dentro del término de los dos años.

VI. Costas

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de septiembre de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: SE DECLARA PROBADA las excepción de "Falta de legitimación en la causa por pasiva" en favor de la Nación-Ministerio de



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

Transporte, del departamento del Valle del Cauca y del Instituto Nacional de Concesiones –Inco, hoy Agencia Nacional de Infraestructura.

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías –Invias- responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte de la joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **SE CONDENA** al Instituto Nacional de Vías –Invias- a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

- A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
- A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

CUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO. SE CONDENA a la Compañía Central de Seguros S.A. a pagar al Instituto Nacional de Vías el valor que esta pague efectivamente con ocasión de la presente condena, hasta el límite del valor asegurado, considerando el límite del valor determinado en la póliza de seguros No. 120100000169 expedida por la referida compañía.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO
Presidenta de la Sala

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Consejero



650

CONSEJERO(A) PONENTE
DANILO ROJAS BETANCOURTH

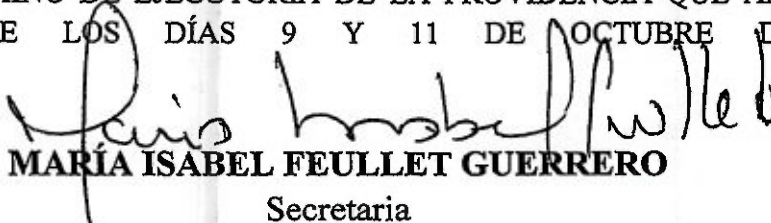
EDICTO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, NOTIFICA A LAS PARTES LA SENTENCIA PROFERIDA EN EL SIGUIENTE PROCESO:

EXPEDIENTE: 760012331000200405560 01 (41173)
DEMANDANTE: MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO
Y OTROS
DEMANDADO: NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE -
INVIAS Y OTROS
NATURALEZA: ACCION DE REPARACION DIRECTA
FECHA DE LA SENTENCIA: TREINTA (30) de AGOSTO de DOS MIL
DIECIOCHO (2018)

EL PRESENTE EDICTO SE FIJA EN LUGAR PÚBLICO DE ESTA SECRETARÍA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS 8:00 A.M. DEL 04/10/2018 Y LAS 5:00 P.M. DEL 08/10/2018, HORA EN QUE SE DESFIJA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 331 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EL TÉRMINO DE EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE ANTECEDE CORRE ENTRE LOS DÍAS 9 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018


MARÍA ISABEL FEULLET GUERRERO

Secretaria

ACC



CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

I) PARTE CEDENTE:

LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.200.978, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de los señores **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.631.290; **MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.201.813; **JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.421.750 y **CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.144.176, conforme al poder especial, amplio y suficiente que le confirieron para celebrar el presente contrato y que hace parte íntegra del mismo, para efectos del mismo en el presente acto todos ellos se denominarán en conjunto la parte **CEDENTE**; y por otro lado:

II) PARTE CESIONARIA:

G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S, sociedad legalmente constituida, con domicilio en Cali, identificada con NIT 900.701.533-7, representada legalmente por **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., conforme al certificado de existencia y representación legal que se adjunta, sociedad que para los efectos de este contrato se denominará la parte **CESIONARIA** o **CESIONARIO**.

Las partes arriba identificadas hemos convenido celebrar el presente contrato de **CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO** o del derecho a recibir la indemnización que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** deberá pagar, conforme a las estipulaciones que se consignan seguidamente y además a las normas de la legislación vigente, previa la incorporación de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante sentencia de segunda instancia calendada el 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto No. 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, Acción de Reparación Directa, Demandantes: Humberto Salazar Cabal, Juan David Salazar Segura, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Luz Nancy Segura Quintero, Demandados: Nación-Mintransporte, Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el Departamento del Valle del Cauca, Radicación 76001233100020040556001 (41173), se resolvió lo siguiente:

"[...]"

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías – Invias- responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte de la joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENA al Instituto Nacional de Vías – Invias- a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

- A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
- A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos

legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos. [...] (Negrita corresponde al texto original).

2. El valor de la condena impuesta a favor de cada uno de los integrantes de la parte **CEDENTE** es el siguiente:

Demandantes	Condena en SMLMV	Condena Liquidada Año 2018
Luz Nancy Segura Quintero	100 SMLMV AÑO 2018	\$78.124.200
Humberto Salazar Cabal	100 SMLMV AÑO 2018	\$78.124.200
María Edelmira Quintero Quintero	50 SMLMV AÑO 2018	\$39.062.100
José Leonardo Celis Segura	50 SMLMV AÑO 2018	\$39.062.100
Claudia Alejandra Mosquera Segura	50 SMLMV AÑO 2018	\$39.062.100
Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.)	50 SMLMV AÑO 2018	\$39.062.100
TOTAL:		\$312.496.800

3. Los **CEDENTES** contrataron al abogado **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., para que los representara como apoderado especial y ejerciera en su nombre la Acción de Reparación Directa, mencionada en el numeral 1 de este acápite. Para el ejercicio de esa labor el **ABOGADO** asumió por su cuenta todos los gastos y costos que se requerían, incluida la atención personal del proceso tanto en la ciudad de Cali ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como en Bogotá en el Consejo de Estado y se estipuló que si el proceso terminaba negándole todas las pretensiones a los referidos demandantes, él apoderado tampoco recibiría ningún emolumento o valor por concepto de honorarios.
4. En el proceso, al finalizar la primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó todas las pretensiones de los demandantes y solo fue después de que se presentó el recurso de apelación contra tal sentencia, que se obtuvo en el Consejo de Estado la providencia mencionada en el antecedente "1" de este escrito.
5. El 12 de septiembre de 2008 falleció **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA**, en momentos en los que aún era menor de edad, cuando contaba apenas con once (11) años de edad, siendo sus únicos herederos, sus dos progenitores: **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO** y **HUMBERTO SALAZAR CABAL**.
6. La liquidación de la sucesión del menor **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.)**, se adelantó ante la Notaría 5 del Círculo de Cali, la cual culminó con la expedición de la Escritura Pública No. 3183 del 28 de septiembre de 2021, por medio de la cual, a título de herencia, se adjudicó en favor de **HUMBERTO SALAZAR CABAL** y **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**, el ciento (100)% de la indemnización que le correspondía en vida al causante (Juan David Salazar), quien era su hijo, de conformidad con la sentencia de segunda instancia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del Edicto No. 650 del 04 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, dentro de la Acción de Reparación Directa distinguida con el radicado 76001233100020040556001, en los siguientes porcentajes: Humberto Salazar Cabal 50%, que corresponde a la cifra de \$19.531.050 Pesos M/cte (25 SMLMV liquidados para el año 2018) y Luz Nancy Segura Quintero 50%, que corresponde a la cifra de \$19.531.050 Pesos M/cte (25 SMLMV liquidados para el año 2018).

Por tal motivo, Humberto Salazar Cabal y Luz Nancy Segura Quintero se encuentran plenamente habilitados para ceder el derecho de crédito que, en virtud de la muerte de su hijo y la referida liquidación de sucesión, les fue adjudicado en proporciones iguales.

7. Que mediante documento poder especial debidamente autenticado ante Notaría y que hace parte íntegra de este contrato, los señores Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero

Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura, facultaron expresamente a Luz Nancy Segura Quintero, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.200.978 (**LA CEDENTE**), para que en su nombre y representación estableciera con el cesionario las cláusulas y condiciones que regirán el presente contrato de cesión.

8. Que **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S** representada legalmente por **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA** manifiesta su decisión de adquirir los derechos de crédito.

CLÁUSULAS

PRIMERA - RATIFICACIÓN: LAS PARTES RATIFICAN y ACEPTAN todas las disposiciones contenidas en el acápite de antecedentes.

SEGUNDA – OBJETO: Mediante el presente acto la parte **CEDENTE**, integrada por **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO; HUMBERTO SALAZAR CABAL; MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO; JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA y CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA**, cede en favor de la parte **CESIONARIA** identificada atrás, todos los derechos de crédito contenidos y que se deriven de la sentencia que se indica adelante, incluida la totalidad de la indemnización a la que se condenó el INVIAS, mediante providencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del Edicto No. 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, Acción de Reparación Directa, Demandantes: Humberto Salazar Cabal, Juan David Salazar Segura, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Luz Nancy Segura Quintero, Demandados: Nación-Mintransporte, Invias y el Departamento del Valle del Cauca, Radicación 76001233100020040556001 (41173). Se cede también el derecho de la indemnización concedido en favor del menor Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), quien por su fallecimiento ocurrido el 12 de septiembre de 2008, cuando contaba apenas con once (11) años de edad fue heredado por Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal, a quienes se les adjudicó en la sucesión el 100% del mismo y en tal virtud en este acto ceden ese derecho heredado a la sociedad **CESIONARIA**, transfiriéndoselo íntegramente.

PARÁGRAFO PRIMERO: la parte **CEDENTE** transfiere así por medio de este acto a título de cesión a la parte **CESIONARIA**, todos los derechos de crédito, para que cobre y reciba para sí el valor de la indemnización que deberá pagar el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, incluidos los intereses causados y los que se llegaren a causar, transfiriendo a la **CESIONARIA** íntegramente el derecho litigioso y a la indemnización reconocida a favor de Luz Nancy Segura Quintero, Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y el menor fallecido Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), mediante la sentencia referida en esta cláusula. Igualmente se estipula respecto del crédito reconocido a este último en tal providencia, que los suscritos **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO y HUMBERTO SALAZAR CABAL**, como herederos de **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.)** y adjudicatarios del derecho a la liquidación de la sucesión, ceden íntegramente ese derecho a la **CESIONARIA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad **CESIONARIA** notificará al **INVIAS** de esta cesión, para lo cual la parte **CEDENTE** la faculta sin limitación.

TERCERA - . EXISTENCIA DE LOS DERECHOS DE CRÉDITO: la parte **CEDENTE** garantiza que al momento en el que se realiza la presente cesión existen los derechos de crédito de los que se ha hecho mención en este contrato. Así mismo, declara que la sentencia no ha sido pagada y no han enajenado, ni dispuesto, ni gravado los derechos objeto de la presente cesión.

CUARTA – PRECIO: La parte **CESIONARIA** paga a la parte **CEDENTE** como contraprestación por la cesión que se hace a su favor de la sentencia y del derecho de crédito reconocido en ella, la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$296.871.960) M/CTE**, de esta manera esta cesión o compra de cartera se hace con un descuento del 5%. Tal cantidad se cancela a la parte **CEDENTE**, representada en este acto por Luz Nancy Segura Quintero, quien está facultada para recibir y declara que la recibió a entera satisfacción, a la firma del presente contrato de cesión, de la siguiente forma: *i)* en efectivo recibió la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$128.871.960) M/CTE**, y *ii)* en dos cheques la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$168.000.000) M/CTE**; el primero de **QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000)**, cheque No. 856132 de Bancolombia, cuenta corriente 06639511411 a favor de la señora Luz Nancy Segura Quintero y el segundo, por **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$153.000.000) M/CTE**, cheque No. 856135 de Bancolombia, de la misma cuenta corriente y a favor de la señora Luz Nancy Segura Quintero, quien ratifica haber recibido a satisfacción el pago y declara a la **CESIONARIA** a paz y salvo. Este acto de cesión del crédito y/o de los derechos reconocidos a la parte **CEDENTE** mediante la citada sentencia, se perfecciona sin perjuicio de la obligación que tienen los comparecientes de pagar el valor de los honorarios del abogado.

QUINTA – INTEGRALIDAD: Este contrato regula en su totalidad la relación entre **LAS PARTES** y reemplaza en su integridad cualquier acuerdo previo, entendimiento, tratativas contractuales, promesas y en general negociación entre las partes sobre la materia. **LAS PARTES** declaran que leído y explicado su contenido, comprenden en su totalidad lo acordado y manifiestan estar de acuerdo con su perfeccionamiento.

SEXTA - MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo y se rige conforme a las leyes colombianas, por lo tanto, podrá exigirse sus obligaciones, sin necesidad de requerimientos o constituciones en mora, a los cuales renuncian las partes.

SÉPTIMA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hace parte del presente contrato el poder especial debidamente conferido por los señores **HUMBERTO SALAZAR CABAL; MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO; JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA y CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA** en favor de **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**, del cual se hizo referencia en el antecede "7" de este escrito.

OCTAVA - DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual es la ciudad de Cali. Para constancia y en señal de aceptación se firma en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), en dos (2) ejemplares idénticos, del mismo tenor y valor, a los veintitrés (23) días del mes diciembre del año 2021. Las firmas y contenido se autentican ante notario.

LA PARTE CEDENTE

LA PARTE CESIONARIA


LUZ NANCY SEGURA QUINTERO
C.C. No. 31.200.978


G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.
NIT.900.701.533-7
R.L. GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.



DEL CIRCULO DE CALI

CALLE 29N No. 6AN-35 Barrio Santa Monica Residencial Teléfono: PBX.6410608 Correo

Electrónico: notaria5decali@gmail.com

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

Notaria.

Esta hoja hace parte del documento que antecede para conservar su continuidad por falta de espacio para estampar los sellos de la notaria. Para su comprobación se le impone sello de unión de páginas.

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Cali, 2021-12-23 12:23:43

Ante GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL
CIRCULO DE CALI compareció:
SEGURA QUINTERO LUZ NANCY

Identificado con C.C. 31200978

Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. Código alxgd



Segura Quintero
Firma compareciente



notaria 5

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
4467-6469651a
Notaria 5 de Cali



OTROSÍ No. 1

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO SUSCRITO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 ENTRE LA SEÑORA LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.

LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.200.978, quien actúa en nombre propio y en representación de los señores **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.631.290; **MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.201.813; **JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.421.750 y **CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.144.176, conforme a memorial poder que le fue conferido el 20 de diciembre de 2021, en adelante la **PARTE CEDENTE**, y la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, sociedad legalmente constituida, con domicilio en Cali, identificada con NIT 900.701.533-7, representada legalmente por **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., en adelante la **PARTE CESIONARIA**, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ** con el fin de modificar el parágrafo de la **CLÁUSULA CUARTA** del referido contrato, previas las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

1. Que el 20 de diciembre de 2021, la señora **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO** actuando en nombre propio y en representación de los señores **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, **MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO**, **JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA** y **CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA** celebró con la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, representada legalmente por **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, contrato de cesión de derecho del crédito del que son titulares aquellos, contenido en la sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto No. 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, Acción de Reparación Directa, Demandantes: Luz Nancy Segura Quintero y otros, Demandados: Instituto Nacional de Vías - INVIAS y otros, Radicación 76001233100020040556001 (41173).
2. Que en el parágrafo de la **CLÁUSULA CUARTA** del citado contrato, se pactó la forma de realizar el pago del mencionado derecho de crédito de los cedentes y que las partes pueden de mutuo acuerdo modificar esta estipulación.
3. El número de cuenta suministrado por la **PARTE CEDENTE** al momento de suscribir el contrato, es la cuenta de ahorros No. 0003200055447400001 del Banco W, tiene 17 dígitos lo que imposibilitó su inscripción en la plataforma de la entidad financiera donde se encuentran depositados los recursos con los cuales se pagará la obligación, pues la misma admite únicamente la inscripción de cuentas de 11 dígitos.

II. CLÁUSULA

CLÁUSULA PRIMERA: Ante la dificultad de realizar el pago mediante transferencia electrónica a la cuenta de ahorros No. 0003200055447400001 del Banco W, las partes **CEDENTE** y **CESIONARIA**, acuerdan de manera expresa, inequívoca y voluntaria realizar una modificación al PARÁGRAFO de la **CLÁUSULA CUARTA** del contrato de cesión de derechos de crédito suscrito el día 20 de diciembre de 2021 entre la señora Luz Nancy Segura Quintero y G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S., la cual quedará así:

PARÁGRAFO: El precio pactado se pagará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la firma de este otrosí, a través de dos cheques, como se precisa a continuación: i) **QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) M/cte**, mediante el cheque No. 856132 de Bancolombia, girado a cargo de la cuenta corriente No. 06639511411, a favor de la señora Luz Nancy Segura Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.200.978, ii) El saldo restante, ascendente a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$153.748.128) M/cte**, se pagará mediante el cheque No. 856133 de Bancolombia girado a cargo de la cuenta corriente No. 06639511411, a favor de la señora Luz Nancy Segura Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.200.978.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás estipulaciones de la cesión de derechos de crédito se ratifican.

Se firma dos ejemplares del presente otrosí el 20 de diciembre de 2021.

Parte Cedente:

Luz Nancy Segura Quintero
LUZ NANCY SEGURA QUINTERO
C.C. No. 31.200.978

Parte Cesionaria:

G.HERRERA ASOCIADO Y ABOGADOS S.A.S.
NIT.900.701.533-7
R.L. GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

REPUBLICA DE COLOMBIA
notaria 5 de Cali

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Cali, 2021-12-21 15:39:30
Ante MA. OLGA AMPARO PÉREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE CALI compareció:
SEGURA QUINTERO LUZ NANCY
Identificado con C.C. 31200978
Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. Código ajuj5

Luz Nancy Segura Quintero
Firma compareciente

notaria 5
4467-103e91c1



Ma. Olga Amparo Pérez de Espinosa
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE CALI

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS

Ciudad

Solicitud cumplimiento y
Pago de sentencia
con anexos

Referencia: Cumplimiento y pago de sentencia.

Acción de Reparación Directa.

Demandante: María Edelmira Quintero Quintero y otros.

Demandado: Instituto Nacional de Vías INVÍAS y otros.

Radicación: 76001-23-31-000-2004-05560-01.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado judicial dentro del proceso de la referencia de los señores: Luz Nancy Segura Quintero, quien actuó en su propio nombre y en representación de su hijo menor, Juan David Salazar; Humberto Salazar Cabal, quien actuó en su propio nombre y en representación de su hijo menor, Juan David Salazar Segura; María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, y Claudia Alejandra Mosquera Segura, y en calidad de representante legal de la firma **G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S.**, identificada con el Nit. 900.701.533-7, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali, solicito respetuosamente, y en virtud de la facultad expresa que me fue conferida por los nombrados, se sirva pagar a favor de la nombrada sociedad, los conceptos que a continuación relaciono por la indemnización reconocida a mis representados, incluyendo los intereses que se hubieren causado y los que se llegaren a causar, con ocasión de la condena impuesta en contra del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, mediante la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, de fecha 30 de agosto de 2018, dentro del proceso administrativo de reparación directa, identificado bajo el radicado No. 76001-23-31-000-2004-05560-01:

- i. El 100% del valor de la condena impuesta al Instituto Nacional de Vías INVÍAS, en favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura, Juan David Salazar Segura, Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal, en el proceso de reparación directa, identificado bajo el radicado No. 76001-23-31-000-2004-05560-00, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en segunda al Consejo de Estado, es decir, el equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, así:

Luz Nancy Segura Quintero	100 SMLMV
Humberto Salazar Cabal	100 SMLMV
María Edelmira Quintero Quintero	50 SMLMV
José Leonardo Celis Segura	50 SMLMV
Claudia Alejandra Mosquera Segura	50 SMLMV

- ii. El valor de los intereses moratorios sobre la condena impuesta dentro del proceso antes señalado, causados a partir del día 11 de octubre de 2018, fecha en la cual quedó debidamente ejecutoriada la sentencia de 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado.

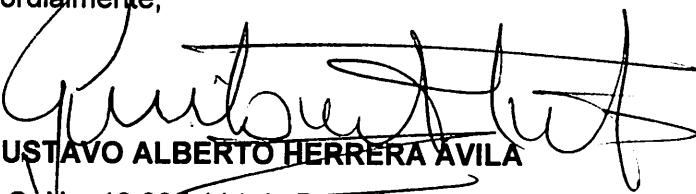
Para proceder con el pago de la indemnización referida, se acompaña a esta solicitud los siguientes documentos:

1. Copia autentica de la sentencia de primera instancia, de 14 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. (25 folios).
2. Copia autentica de la sentencia de segunda instancia, de 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. (21 folios).
3. Oficio No. 2702 FGM2004-05560-00, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por el cual pone en conocimiento al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la sentencia de primera instancia del 14 de septiembre de 2010 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y la sentencia de segunda instancia, de 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado, indicando que la misma fue notificada y quedó ejecutoriada el día 11 de octubre de 2018. Del mismo modo, hace constar que los poderes a mí otorgados no han sido sustituidos ni revocados por los otorgantes, encontrándose vigentes a la fecha. (1 folio).
4. Copia autentica de los poderes otorgados al suscrito por Luz Nancy Segura Quintero, quien actuó en su propio nombre y en representación de su hijo menor, Juan David Salazar; Humberto Salazar Cabal, quien actuó en su propio nombre y en representación de su hijo menor, Juan David Salazar Segura; María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, y Claudia Alejandra Mosquera Segura, donde consta mi facultad para recibir. (5 folios).
5. Cuenta de cobro. (1 folio).
6. Copia autentica del Rut de G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. (4 folios).
7. Copia del certificado de existencia y representación legal de G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. (7 folios).
8. Copia autentica de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito. (2 folios).
9. Certificación expedida por Bancolombia, donde consta la vinculación con esa entidad bancaria y el número de cuenta a nombre de G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. en la que debe consignarse el monto de la condena impuesta. (1 folio).

En total se entregan como anexos 65 folios útiles.

Respetuosamente, manifiesto que recibiré notificaciones en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100, oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape, de la ciudad de Cali. E-mail: gherrera@gha.com.co.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

OAJ 32497

Bogotá D. C., 24 de junio de 2021

Solicitud Documentos
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
Apoderado
gherrera@gha.com.co
Bogotá

Asunto: Solicitud Documentos

Respetado doctor Herrera Ávila,

En atención a solicitud de pago de sentencia, proferida en el proceso de la referencia, me permito indicar que una vez revisados la documentación que soporta su requerimiento, se requiere que se aporten los siguientes documentos, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015, el cual regula el pago de sentencias y conciliaciones a cargo de las entidades públicas:

- Solicitud de pago por escrito, dirigida a INVIAS, para que se dé cumplimiento sentencia, laudo arbitral o conciliación, en la que el beneficiario o su apoderado **manifieste bajo la gravedad del juramento que no ha presentado solicitud de pago por el mismo concepto, ni ha intentado el cobro ejecutivo**, (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1)
- El poder que se hubiere otorgado, **el cual debe reunir los requisitos de ley, incluir explícitamente la facultad de recibir el dinero y estar expresamente dirigido al INVIAS**. (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1)
- [Los datos de identificación, teléfono, correo electrónico y dirección de los beneficiarios](#) y sus apoderados. (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1)
- Certificación bancaria, expedida por la entidad financiera, donde se indique el número y tipo de cuenta del apoderado y la de los beneficiarios mayores de edad que soliciten que el pago se les efectúe directamente. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias. (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1)
- Copia del documento de identidad de la persona a favor de quien se ordena efectuar la consignación. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias. (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1)
- **Copia del Registro Único Tributario -RUT- de los beneficiarios del crédito judicial** y cédula de

OAJ 32497


ciudadanía y del apoderado. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias. Decreto 2674 de 2012 y Manual de SIIF, Resolución DIAN 228 de 21 de octubre de 2013)

- Si el beneficiario de la sentencia o conciliación en menor de edad, debe solicitarse a través de su representante, o apoderado por el constituido, para lo cual deberá aportar el registro civil de nacimiento del menor, en donde se constate tal calidad. Si en el transcurso del proceso judicial o del trámite de la solicitud de pago, el beneficiario cumple la mayoría de edad, deberá aportarse la ratificación del poder existente, o nuevo poder.

Hasta tanto no se allegue la documentación requerida, su solicitud no puede cumplir con los requisitos exigidos por la Ley.

Quedamos atentos al envío de la documentación y a resolver cualquier duda acerca del trámite de pago.

Atentamente,

 Firmado
digitalmente por
JUAN GABRIEL
DURAN SANCHEZ

JUAN GABRIEL DURAN SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto: LINA MARIA FRANCO

Reviso: MIGUEL ERNESTO SANZ BRIÑEZ



República de Colombia

1

SEO836867080



notaría 5

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

DOCUMENTO

CLASE	NUMERO	FECHA	OFICINA DE ORIGEN
ESCRITURA	3183	28 SEPTIEMBRE DEL 2021	NOTARIA QUINTA

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO

CÓDIGO REGISTRAL	CÓDIGO NOTARIAL	ESPECIFICACIÓN	VALOR DEL ACTO
0109	01090000	ADJUDICACION EN SUCESION	ACTIVO LIQUIDO \$39.062.100

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

CAUSANTE:	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA T.I. No. 97040314427 DE CALI	
ABOGADO: GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA	C.C. 19.395.114 DE BOGOTA D.C T.P. No. 39.116 del C.S.J.
INTERESADOS: LUZ NANCY SEGURA (HEREDERA)	C.C. # 31.200.978 DE TULUA
HUMBERTO SALAZAR CABAL (HEREDERO)	C.C. #2.631.290 DE SAN PEDRO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO : TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES (3183)-----

En la ciudad de Santiago de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de SEPTIEMBRE del año Dos Mil Veintiuno (2021) al despacho de la NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE CALI, DE LA CUAL ES TITULAR LA DOCTORA GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO -----

COMPARECENCIA

Compareció el Doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad,

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial.

SEO836867080

PC025573585



F864VNDOP7VCH53F

11/03/2021

09-09-21 PC025573585

CO081GN7F4

THOMAS GREG & SONS.

de esta vecindad, titular de la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C, Abogado inscrito y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, hábil para contratar y obligarse manifestó: _____

ESTIPULACIONES

PRIMERO: Que obra en calidad de apoderado especial de los señores **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 31.200.978 expedida en Tulua-Valle y **HUMBERTO SALAZAR CABAL** mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de Ciudadanía No. 2.631.290 de San Pedro, en calidades de padres del CAUSANTE **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA**, quien en vida se identificó con la tarjeta de identidad No 97040314427 DE CALI y quien falleció el día 12 de Septiembre de 2008, en la ciudad de Cali, siendo la Ciudad de Cali, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fecha en la cual por ministerio de la ley, se definió su herencia; según poder que se protocoliza con este instrumento, y eleva a escritura pública el trabajo de partición y adjudicación de bienes efectuados dentro del trámite notarial de la sucesión intestada del nombrado causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA**, llevada a cabo en esta Notaria y dentro del mencionado trámite se realizaron entre otras, las siguientes actuaciones: _____

A).- Se inició mediante Acta No. 022 de fecha 26 de Abril de 2021. _____

B).- Se efectuaron las comunicaciones sobre la admisión del trámite sucesoral a la Superintendencia de Notariado y Registro el día 19 de Mayo de 2021. _____

C).- Se efectuaron las comunicaciones sobre la admisión del trámite sucesoral a la Superintendencia de Notariado y Registro el día 19 de Mayo de 2020, a la Administración de Impuestos Nacionales – DIAN, el día 19 de Mayo de 2021 y a la Tesorería General Municipal, el día 19 de Mayo de 2021; _____

C).- Se practicaron las publicaciones mediante edicto del día 20 de Mayo de 2021 sin que se hubiere presentado persona alguna a reclamar, distinta de los herederos; _____



República de Colombia

3



SEO636867081



D).- Se publicó el emplazamiento de que trata el artículo tercero, numeral 3) del Decreto 902 de 1988, en el Diario La republica el 27 de Mayo de 2021 y en la emisora UNIVALLE ESTÉREO 105.3 F.M. el día 27 de mayo de 2021.

E).- Una vez vencido el término del emplazamiento y autorizado para continuar con el trámite sucesoral mediante Oficio No10524444311091225 de fecha 08 de Junio de 2021 enviado por la Oficina de Cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", recibido en este despacho y por no haber concurrido el Administrador de Impuestos a la liquidación notarial dentro de los 20 días siguientes a la comunicación hecha, no obstante advirtiéndolo a los herederos que si surgen posteriores obligaciones a cargo del causante, ellos responden solidariamente por las mismas, (artículo 793 literal a del Estatuto Tributario); se dio continuación al trámite, el cual concluye con la elevación a escritura pública del correspondiente trabajo de partición y adjudicación de bienes, como en efecto se hace protocolizando con la presente escritura la documentación anexa a la solicitud de su iniciación, así como toda actuación realizada dentro de ella.

SEGUNDO.-QUE EL TRABAJO DE LIQUIDACION Y ADJUDICACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, es el siguiente:

Señor (a):

NOTARIO QUINTO (5) DEL CIRCULO DE CALI.

E. S. D.

REFERENCIA: PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN.

CAUSANTE: JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.

IDENTIFICACIÓN: T.I 97040314427.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali e identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura obrando en calidad de apoderado sustituto de LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y HUMBERTO



SEO636867081



PC025573584

G9VAY/SW49SWM5DNO

11/03/2021

09-09-21 PC025573584

L1HWXSJ890

THOMAS GREG & SONS

SALAZAR CABAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro Valle del Cauca; en calidad de **HEREDEROS**, atentamente concurre a esta Notaría para adelantar, conforme al procedimiento establecido por el Decreto 902 de 1988, la liquidación de la herencia derivada del deceso del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA**:_____

HECHOS

PRIMERO: El doce (12) de septiembre del año dos mil ocho (2008) falleció en la ciudad de Cali, el menor de edad **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA** quien se identificó en vida con el número Tarjeta de identidad 97040314427, como consta en el registro civil de defunción con número de indicativo serial 06611069 de la Notaria Segunda (2) de la ciudad de Cali (V), siendo la ciudad de Cali el lugar de su último domicilio._____

SEGUNDO: Mediante sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección B, ponencia de la Honorable Consejera Doctora Stella Conto Díaz del Castillo, dentro de acción de reparación directa promovida por el señor **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, quien actuó en nombre propio y representación del menor Juan David Salazar Segura; **MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO**, **JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA**, **CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA**, Y **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO** contra el Instituto Nacional de Vías- **INVIAS**, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173, se resolvió: _____

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías –**INVIAS** responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura._____

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **SE CONDENA** al Instituto Nacional de Vías –**INVIAS** a pagarlas siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales: _____

A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) SMLMV a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos. _____



República de Colombia

5



SEO436867082



A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

TERCERO: Al causante le sobreviven sus padres LUZ NANCY SEGURA QUINTERO mujer, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y HUMBERTO SALAZAR CABAL, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca, quienes entran a ser los herederos de la indemnización adjudicada al menor mediante la sentencia anteriormente mencionada.

CUARTO: Mis poderdantes aceptan la herencia con beneficio de inventario.

QUINTO: Mis poderdantes LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL son personas plenamente capaces para solicitar la presente liquidación notarial.

SEXTO: Se trata de una sucesión intestada donde no existiendo testamento ni donaciones, corresponde a mis representados LUZ NANCY SEGURA QUINTERO y HUMBERTO SALAZAR CABAL en calidad de herederos, el cien por ciento sobre la citada indemnización que tenía derecho a recibir el causante y que conforma el activo de la herencia.

SEPTIMO: Mis poderdantes LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL, me han conferido poder especial, amplio y suficiente para iniciar, desarrollar y culminar el proceso de liquidación de la herencia del causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, con facultades expresas para presentar la solicitud de sucesión intestada, convenir el inventario y avalúo, realizar el trabajo de partición y adjudicación y suscribir la respectiva escritura pública.

I. ACERVO HEREDITARIO

Teniendo en cuenta el inventario y avalúo, el monto total del activo es de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV) liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la notificación de la sentencia 2018 que corresponden a TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS (\$39.062.100).

SEO436867082

PC025573583



CIMA7N768139DEGY

11/03/2021

09-09-21 PC025573583

EQ44NR07S

THOMAS GREG & SONS.

Como se observa de la presentación de inventarios y avalúos, no existe pasivo.

ACTIVO

PARTIDA UNICA: El ciento por ciento (100%) de la indemnización que le correspondería en vida al causante por la muerte de Carlos Andrés Salazar Segura según sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173.

AVALUO: La indemnización antes descrita es de **CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV)** liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la notificación de la sentencia (2018) corresponden a **TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS (\$39.062.100)** más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento del pago efectivo de la obligación por parte del INVIAS.

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA \$ 39.062.100

TOTAL, ACTIVO \$ 39.062.100

PASIVO:

No existe pasivo que relacionar ni inventariar por lo tanto es cero (0).

II. LIQUIDACIÓN DE HERENCIA

Los herederos legítimos **LUZ NANCY SEGURA** identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca como padres del causante; recibirán cada uno por concepto de herencia, la suma de **VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS (25 SMLMV)** liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la notificación de la sentencia (2018) que corresponden a **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS (\$19.531.050)**, que se derivan de dividir en dos partes iguales la indemnización (50 SMLMV) contenida en sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173, a favor del causante Juan David Salazar Segura.

TOTAL ACTIVO A REPARTIR \$



República de Colombia

7



SEO236867083



39.062.100

III. ADJUDICACIÓN

HIJUELA NÚMERO UNO: LUZ NANCY SEGURA QUINTERO mujer, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá Valle del Cauca; recibirá la mitad de la indemnización contenida en la sentencia del 30 de agosto de 2018 a favor del causante. Consecuentemente, le corresponde la suma de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS (\$19.531.050)** por concepto de herencia, más los intereses que dicho capital genere hasta el momento del pago efectivo de la obligación por parte del INVIAS.

PARA CUBRIR ESTA HIJUELA, SE LE ADJUDICA LO SIGUIENTE:

PARTIDA UNICA: El cincuenta por ciento (50 %) de la indemnización que le correspondería en vida al causante Juan David Salazar Segura por la muerte de Carlos Andrés Salazar Segura, según sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173.

AVALUO: La indemnización antes descrita tiene un avalúo de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS (\$39.062.100)** más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento de la entrega del mismo.

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA.....\$ 39.062.100

TOTAL HIJUELA NUMERO UNO.....\$19.531.050

HIJUELA NÚMERO DOS: HUMBERTO SALAZAR CABAL, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca; recibirá la mitad de la indemnización contenida en la sentencia del 30 de agosto de 2018 a favor del causante. Consecuentemente, le corresponde la suma de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS (\$19.531.050)** por concepto de herencia, más los intereses que dicho capital genere hasta el momento del pago efectivo de la obligación por parte del INVIAS.

SEO236867083

PC025573582



CT714ZYEXDESXRF

11/03/2021

09-09-21 PC025573582

U1Z6YMSCGK

THOMAS GREG & SONS

PARA CUBRIR ESTA HIJUELA, SE LE ADJUDICA LO SIGUIENTE:-----

PARTIDA UNICA: El cincuenta por ciento (50 %) de la indemnización que le correspondería en vida al causante Juan David Salazar Segura por la muerte de Carlos Andrés Salazar Segura según sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173.-----

AVALUO: La indemnización antes descrita tiene un avalúo de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS (\$39.062.100)** más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento de la entrega del mismo.-----

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA.....\$ 39.062.100

TOTAL HIJUELA NUMERO DOS.....\$19.531.050

COMPROBACIÓN

Valor de los bienes inventariados.....\$ 39.062.100

TOTAL ACTIVO.....\$ 39.062.100

HIJUELA PRIMERA a favor de **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO** por concepto de Herenciales \$19.531.050.-----

HIJUELA SEGUNDA a favor de **HUMBERTO SALAZAR CABAL** por concepto de Herenciales \$19.531.050.-----

PASIVO INVENTARIADO.....\$ -0-

PARA UN TOTAL.....\$39.062.100

En los anteriores términos dejo presentado el trabajo de partición de los bienes relictos dejados por el causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.**-----

Del señor notario-----

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA-----

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.-----

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.-----

(HASTA AQUI EL TRABAJO DE PARTICION Y ADJUDICACION PRESENTADO POR EL ABOGADO).-----

TERCERO: Que se ha dado cumplimiento a lo señalado por el decreto 902 de 1988 para iniciar, desarrollar y culminar con este instrumento público, el trámite de la liquidación de sucesión a ella vinculada.-----



OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Leído el presente instrumento en su totalidad por los otorgantes, quienes la encontraron conforme a su pensamiento y voluntad y por no observar error alguno en su contenido le imparten su aprobación y proceden a firmarla con el suscrito notario que da fe; declarando los comparecientes: 1.- Estar notificados de que un error no corregido en esta escritura antes de ser firmada respecto al nombre e identificación de cada uno de ellos, ó la identificación del inmueble objeto del presente acto por su cabida, dimensiones, forma de adquisición del bien, identificación catastral y matrícula inmobiliaria del mismo, da lugar a una escritura aclaratoria que conlleva a nuevos gastos para los contratantes conforme lo manda los artículos 35 y 102 del decreto ley 960 de 1970, así mismo, a los otorgantes se les hizo la advertencia que deben presentar esta escritura para registro, en la oficina correspondiente, dentro del término perentorio de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, cuyo incumplimiento causará intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo.- 2.- Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y los otorgantes las aprueban totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asumen la responsabilidad por cualquier inexactitud. 3.- conocen la ley y saben que la notaria responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. 4.- Los otorgantes manifiestan expresamente para efectos propios de la ley de extinción de dominio y aquellas normas que la adicionen, modifiquen o reformen, que los bienes materia u objeto del presente acto o contrato, así como los dineros con que se satisfacen las prestaciones derivadas de él, provienen o se originan en el ejercicio de actividades lícitas. 5.- Se advirtió a los otorgantes de esta escritura la obligación que tiene de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo pertinente antes de firmarla, la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia la notaria no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes que son reconocidos con posterioridad a la firma de los otorgantes y de la notaria, en tal caso estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial, quienes sufragaran en su totalidad los gastos que ello genere. (artículo 35, decreto ley 960 de 1.970).- De la identificación biométrica: Los comparecientes manifiestan que exhiben los documentos de identidad de los



SEO236867097



PC025573581



5NKU3JLQXTB812B5

11/03/2021

09-09-21 PC025573581

P6X2WJ740

THOMAS GREG & SONS

cuales son titulares y que son los idóneos para establecer los atributos de su personalidad como lo son sus nombres, nacionalidad, mayoría de edad y serial de identificación. que acceden a que sus cédulas de ciudadanía sean sometidas a una lectura biométrica que permite extraer del código de barras la información que habilita a la notaría presumir la originalidad, validez y autenticidad del documento de identidad. en caso que el compareciente presente para su identificación una contraseña que señale el trámite de duplicado, corrección o rectificación, el ciudadano afirma bajo la gravedad de juramento que el sello que certifica el estado de su trámite ha sido estampado en una oficina de la registraduría nacional del estado civil. en todo caso, los titulares de las contraseñas de expedición de la cédula de ciudadanía por primera vez o no certificadas, las cédulas de extranjería, pasaporte o visas que no pueden ser sometidas al control de captura de identificación biométrica, manifiestan que estos documentos han sido tramitados y expedidos por la entidad competente y legitimadamente constituida para ello (registraduría, consulado, embajadas, etc...) y que no ha sido adulteradas o modificada dolosamente. **Políticas de privacidad:** Los otorgantes, expresamente declaran que no autorizan la divulgación, ni comercialización, ni publicación por ningún medio, sin excepción alguna, de su imagen personal y/o fotografía tomada de la Notaria Quinta del circulo de Cali (Valle), ni su huella digital, ni de sus documentos de identidad, ni su dirección electrónica, ni física, ni teléfonos, salvo lo relacionado con el presente instrumento y demás gastos notariales que personalmente o por intermedio de su apoderado solicite por escrito conforme a la ley. _____

SE PROTOCOLIZAN CON ESTE INSTRUMENTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: _____

Copia autentica de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera -Subsección B del 30 de Agosto del 2018. Radicación No 76001233100020040556001(41173) _____

CIERRE

SE OTORGÓ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8º Y 9º DEL DECRETO 960 DE 1970. DERECHOS: \$ 151.720,00 , RECAUDOS:\$ 20.400,00 -IVA: \$ 77.277,00 _____



República de Colombia

11



SEO036867098



VIENE DE LA HOJA SELLADA No _____ SEO236867097
QUE HACE PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA No 3183 DE FECHA
SEPTIEMBRE 28 DEL 2021 DE LA NOTARIA QUINTA DE CALI _____
LA PRESENTE ESCRITURA SE CORRIÓ EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL
CODIGOS DE BARRAS / Nos. SEO836867080/ SEO636867081/
SEO436867082/ SEO236867083/ SEO236867097/ SEO036867098

Notary

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No 19395114

T.P. No. 39116

DIRECCION: AVDA 6 ABIS #35 N-100 OF. 212

TELEFONO 659 40 75

OCUPACION ABOGADO

CORREO ELECTRONICO: gherrera@gha.com.co

Persona expuesta políticamente Decreto 1674 de 2016

SI ☐ NO ☒ Cargo:

Fecha de vinculación: _____ Fecha de Desvinculación: _____

Quien obra como apoderado especial de: LUZ NANCY SEGURA QUINTERO,
y HUMBERTO SALAZAR CABAL

LA NOTARIA

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE CALI

M.L.A

SEO036867098

PC025573580



SV1V39RGNGHBP167

11/03/2021

09-09-21 PC025573580

6X7UTB9PO

THOMAS GREG & SONS

República de Colombia · TCS
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial.

Señor:

NOTARIO QUINTO (5) DEL CIRCULO DE CALI.

E. S. D.

REFERENCIA: TRAMITE NOTARIAL DE SUCESIÓN INTESTADA CON
CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO.

CAUSANTE: JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.

IDENTIFICACIÓN: T.I 97040314427.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura obrando en calidad de apoderado sustituto de de los señores: LUZ NANCY SEGURA QUINTERO mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y HUMBERTO SALAZAR CABAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca; en calidad de HEREDEROS cuya representación acredito con el memorial de sustitución anexo a este escrito; atentamente concurro a esta Notaría para adelantar, conforme al procedimiento establecido por el Decreto 902 de 1988, la liquidación de la herencia derivada del deceso del causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA quien se identificó en vida con el número Tarjeta de identidad 97040314427, fallecido el día doce (12) de septiembre del año dos mil ocho (2008) tal como consta en el registro civil de defunción con número de indicativo serial 06611069 siendo la ciudad de Cali Valle del Cauca el último lugar de su domicilio; teniendo en cuenta los siguientes:

I. HECHOS

PRIMERO: El doce (12) de septiembre del año dos mil ocho (2008) falleció en la ciudad de Cali, el menor de edad JUAN DAVID SALAZAR SEGURA quien se identificó en vida con el número Tarjeta de identidad 97040314427, tal como consta en el registro civil de defunción con número de indicativo serial 06611069 de la Notaria Segunda (2) de la ciudad de Cali (V), siendo la ciudad de Cali el lugar de su último domicilio.



SEGUNDO: Mediante sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección B, ponencia de la Honorable Consejera Doctora Stella Conto Díaz del Castillo, dentro de acción de reparación directa promovida por el señor HUMBERTO SALAZAR CABAL, quien actuó en nombre propio y representación del menor JUAN DAVID SALAZAR SEGURA; MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO; JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA; CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA Y LUZ NANCY SEGURA QUINTERO contra el Instituto de Nacional de Vías- INVIAS, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173, se resolvió:

"[...]"

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías –INVIAS-responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **SE CONDENA** al Instituto Nacional de Vías –INVIAS a pagarlas siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

- A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) SMLMV a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
- A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

"[...]"

TERCERO: Al causante le sobreviven sus padres LUZ NANCY SEGURA QUINTERO mujer, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá Valle del Cauca y HUMBERTO SALAZAR CABAL, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro Valle del Cauca, quienes entran a ser los herederos de la indemnización adjudicada al menor mediante la sentencia anteriormente mencionada.

CUARTO: Mis poderdantes aceptan la herencia con beneficio de inventario.

Página 2 de 7
MPPH



PC025573579



09-09-21 PC025573579

H03PRDSL4X

THOMAS GREG & SONS

QUINTO: Mis poderdantes LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL son personas plenamente capaces para solicitar la presente liquidación notarial.

SEXTO: Se trata de una sucesión intestada donde no existiendo testamento ni donaciones, le corresponde a cada uno de mis representados LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL en calidad de herederos, el cincuenta por ciento sobre la citada indemnización que tenía derecho a recibir el causante y que conforma el activo de la herencia.

SEPTIMO: Mis poderdantes LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL, me ha conferido poder especial, amplio y suficiente para iniciar, desarrollar y culminar el proceso de liquidación de la herencia del causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, con facultades expresas para presentar la solicitud de sucesión intestada, convenir el inventario y avalúo, realizar el trabajo de partición y adjudicación y suscribir la respectiva escritura pública.

II. PETICIÓN

Con base en los anteriores HECHOS, muy respetuosamente formulo a la señora Notario Quinto del círculo de Cali, las siguientes peticiones:

- A. Que se tenga como herederos a LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR, en el trámite notarial de sucesión.
- B. Que se tenga a la doctora MYRIAN SALAZAR SEGURA como apoderada principal y al doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, como apoderado sustituto de los interesados acreditado en la liquidación de la herencia de JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.
- C. Aceptar mediante acta la presente solicitud de trámite de sucesión, por cumplir cabalmente con los requisitos exigidos a través de las disposiciones vigentes, especialmente las contenidas en el Decreto 902 de 1998.
- D. Ordenar la citación de las personas que tengan derecho a concurrir a la liquidación, por medio de Edicto emplazatorio, a publicar en un periódico de amplia circulación y la difusión



en una emisora y la fijación del Edicto por el término de 10 días en sitio visible de la Notaria, conforme a lo establecido en el Decreto 902 de 1988.

- E. Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro, la iniciación de este trámite de liquidación, informando el nombre de los causantes, número de sus cédulas o identificación en vida. Así mismo efectuar la comunicación a la Administración de Impuestos Nacionales, a efectos de que otorguen el paz y salvo respectivo.
- F. Ordenar que se solemnice y perfeccione la adjudicación de la herencia mediante la correspondiente escritura pública, si dentro de los plazos establecidos de publicación de Edictos y comunicación de la Dian, no se han hecho parte ante este Despacho Notarial.

III. DERECHO

Invoco como fundamento de derecho lo preceptuado en el Decreto 902 de 1.988 y demás normas sustanciales y procesales concordantes.

IV. JURAMENTO

Mis poderdantes bajo la gravedad del juramento, como se desprende del poder conferido han manifestado:

Que no conocen a otros interesados con igual o mejor derecho del que tienen, que no saben de la existencia de otros legatarios o acreedores distintos a los que se enuncian en esta solicitud, que no han adelantado ningún otro trámite ante Juez de la República o ante Notario Público, relativo a la sucesión y que el último domicilio del causante fue esta ciudad Cali Departamento del Valle del cauca.

Que toda la información verbal como documental aportada es cierta y verdadera y desde ya, mis representadas (os) asumen toda responsabilidad, exonerando a la apoderada.

Página 4 de 7
MPPH



09-09-21 PC025573578

ZN3T8MKVX

THOMAS GREG & SONS



V. PRUEBAS Y ANEXOS

Me permito acompañar los siguientes documentos:

- A. Un (1) memorial de poder para actuar.
- B. Un (1) memorial de sustitución de poder para actuar.
- C. Registro civil de defunción del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA**.
- D. Registro civil de nacimiento del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA**.
- E. Fotocopia de cédulas de los herederos.
- F. Copia de la sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173.
- G. Relación de inventario y avalúo.
- H. Trabajo de partición y adjudicación del bien.
- I. Fotocopia de cedula y tarjeta profesional del apoderado sustituto.

VI. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

El procedimiento es el señalado en el Decreto 902 de 1.988. Es usted competente señor(a) Notario. Por razón del proceso y el factor territorial. Por el primero porque siendo una sucesión ilíquida no se ha tramitado ni concluido proceso de Sucesión Jurídica o Notarial alguno; por el segundo, porque el último domicilio del causante fue la ciudad de Cali Valle.

En consecuencia, ruego señor notario ordenar la publicación del edicto de que trata el numeral 2° del artículo 3° del Decreto 902 de 1.988. Dar los avisos ordenados por la misma disposición, además adelantar el trámite previsto para la liquidación de la herencia en cuestión.

Que toda la información verbal como documental aportada es cierta y verdadera y desde ya, mis representadas (os) asumen toda responsabilidad, exonerando a los apoderados.



VII. NOTIFICACIONES

Las notificaciones las recibiré en la Av. 6ª A Bis No.35 N - 100, Oficina 212, Centro Empresarial
Chipichape, en Cali. Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

mperez@gha.com.co
3152200887

Del señor notario,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

Página 6 de 7
MPPH



PC025573577



09-09-21 PC025573577

7UVO1Q83G

THOMAS GREG & SONS

Señor:

NOTARIO QUINTO (5) DEL CIRCULO DE CALI.

E. S. D.

REFERENCIA: RELACIÓN DE INVENTARIO Y AVALUO.

CAUSANTE: JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.

IDENTIFICACIÓN: T.I 97040314427.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura obrando en calidad de apoderado sustituto de los señores: LUZ NANCY SEGURA QUINTERO mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y HUMBERTO SALAZAR CABAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca; en calidad de HEREDEROS cuya representación acredito, atentamente concurro a esta Notaría para adelantar, conforme al procedimiento establecido por el Decreto 902 de 1.988, la liquidación de la herencia derivada del deceso del causante la liquidación de la herencia derivada del deceso del causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA quien se identificó en vida con el número Tarjeta de identidad 97040314427, fallecido el día doce (12) de septiembre del año dos mil ocho (2008) tal como consta en el registro civil de defunción con número de indicativo serial 06611069 siendo la ciudad de Cali Valle del Cauca el último lugar de su domicilio; y presentar ante su despacho el inventario y avalúo de los bienes relictos en la forma que a continuación se detalla:

I. ACTIVO

PARTIDA UNICA: El cien por ciento (100%) de la indemnización que le correspondería en vida al causante por la muerte de Carlos Andrés Salazar Segura según sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173.

AVALUO: La indemnización antes descrita es de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV) liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la notificación de la sentencia (2018) corresponden a TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS (\$39.062.100) más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento del pagoefectivo del crédito por parte del INVIAS.

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA.....\$ 39.062.100

TOTAL, ACTIVO.....\$ 39.062.100



II. PASIVO:

No existe pasivo que relacionar ni inventariar por lo tanto es cero (0).

En los anteriores términos dejo presentado el trabajo de partición de los bienes relictos dejados por el causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.

Del señor notario

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.



09-09-21 PC025573576

H3JC78V1UP

THOMAS GREG & SONS.

AVALUO: La indemnización antes descrita es de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV) liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la ejecutoria de la sentencia (2018) corresponden a TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS (\$39.062.100) más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento del pago efectivo del crédito por parte del INVIAS.

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA.....\$ 39.062.100

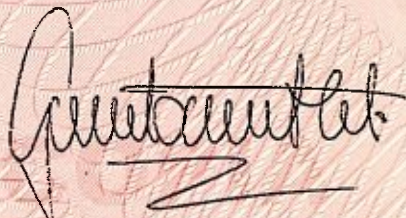
TOTAL, ACTIVO.....\$ 39.062.100

II. PASIVO:

No existe pasivo que relacionar ni inventariar por lo tanto es cero (0).

En los anteriores términos dejo presentado el inventario de los bienes relictos dejados por el causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.**

Del señor notario



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.



Señor (a):

NOTARIO QUINTO (5) DEL CIRCULO DE CALI.

E. S. D.

REFERENCIA: PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN.

CAUSANTE: JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.

IDENTIFICACIÓN: T.I 97040314427.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali e identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura obrando en calidad de apoderado sustituto de LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y HUMBERTO SALAZAR CABAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro Valle del Cauca; en calidad de HEREDEROS, atentamente concurro a esta Notaría para adelantar, conforme al procedimiento establecido por el Decreto 902 de 1988, la liquidación de la herencia derivada del deceso del causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA:

HECHOS

PRIMERO: El doce (12) de septiembre del año dos mil ocho (2008) falleció en la ciudad de Cali, el menor de edad JUAN DAVID SALAZAR SEGURA quien se identificó en vida con el número Tarjeta de identidad 97040314427, como consta en el registro civil de defunción con número de indicativo serial 0611069 de la Notaría Segunda (2) de la ciudad de Cali (V), siendo la ciudad de Cali el lugar de su último domicilio.

SEGUNDO: Mediante sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección B, ponencia de la Honorable Consejera Doctora Stella Conto Díaz del Castillo, dentro de acción de reparación directa promovida por el señor HUMBERTO SALAZAR CABAL, quien actuó en nombre propio y representación del menor Juan David Salazar Segura; MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO, JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA, CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA

Página 1 de 7
MPPH



09-09-21 PC025573575

SKOZL82FJA

THOMAS GREG & SONS

SEGURA, Y LUZ NANCY SEGURA QUINTERO contra el Instituto de Nacional de Vías-
INVIAS, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173, se resolvió:

"[...]

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías –INVIAS-responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENA al Instituto Nacional de Vías –INVIAS a pagarlas siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

- A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) SMLMV a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
- A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

"[...]"

TERCERO: Al causante le sobreviven sus padres LUZ NANCY SEGURA QUINTERO mujer, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y HUMBERTO SALAZAR CABAL, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca, quienes entran a ser los herederos de la indemnización adjudicada al menor mediante la sentencia anteriormente mencionada.

CUARTO: Mis poderdantes aceptan la herencia con beneficio de inventario.

QUINTO: Mis poderdantes LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL son personas plenamente capaces para solicitar la presente liquidación notarial.

SEXTO: Se trata de una sucesión intestada donde no existiendo testamento ni donaciones, corresponde a mis representados LUZ NANCY SEGURA QUINTERO y

HUMBERTO SALAZAR CABAL en calidad de herederos, el cien por ciento sobre la citada indemnización que tenía derecho a recibir el causante y que conforma el activo de la herencia.

SEPTIMO: Mis poderdantes LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL, me han conferido poder especial, amplio y suficiente para iniciar, desarrollar y culminar el proceso de liquidación de la herencia del causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, con facultades expresas para presentar la solicitud de sucesión intestada, convenir el inventario y avalúo, realizar el trabajo de partición y adjudicación y suscribir la respectiva escritura pública.

I. ACERVO HEREDITARIO

Teniendo en cuenta el inventario y avalúo, el monto total del activo es de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV) liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la notificación de la sentencia que corresponden a TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS (\$39.062.100).

Como se observa de la presentación de inventarios y avalúos, no existe pasivo.

ACTIVO

PARTIDA UNICA: El ciento por ciento (100%) de la indemnización que le correspondería en vida al causante por la muerte de Carlos Andrés Salazar Segura según sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173.

AVALUO: La indemnización antes descrita es de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV) liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la notificación de la sentencia (2018) corresponden a TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS (\$39.062.100) más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento del pago efectivo de la obligación por parte del INVIAS.



PC025573574



09-09-21 PC025573574

QC1T5USMP9

THOMAS OREG & SOHS.

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA.....\$ 39.062.100

TOTAL, ACTIVO.....\$ 39.062.100

PASIVO:

No existe pasivo que relacionar ni inventariar por lo tanto es cero (0).

II. LIQUIDACIÓN DE HERENCIA

Los herederos legítimos **LUZ NANCY SEGURA** identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá - Valle del Cauca y **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca como padres del causante; recibirán cada uno por concepto de herencia, la suma de **VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS (25 SMLMV)** liquidados con el salario mínimo del año de la fecha de la notificación de la sentencia (2018) que corresponden a **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS (\$19.531.050)**, que se derivan de dividir en dos partes iguales la indemnización (50 SMLMV) contenida en sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173, a favor del causante Juan David Salazar Segura.

TOTAL ACTIVO A REPARTIR\$ 39.062.100

III. ADJUDICACIÓN

HIJUELA NÚMERO UNO: **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO** mujer, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.200.978 expedida en Tuluá Valle del Cauca; recibirá la mitad de la indemnización contenida en la sentencia del 30 de agosto de 2018 a favor del causante. Consecuentemente, le corresponde la suma de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS**



(\$19.531.050) por concepto de herencia, más los intereses que dicho capital genere hasta el momento del pago efectivo de la obligación por parte del INVIAS.

PARA CUBRIR ESTA HIJUELA, SE LE ADJUDICA LO SIGUIENTE:

PARTIDA UNICA: El cincuenta por ciento (50 %) de la indemnización que le correspondería en vida al causante Juan David Salazar Segura por la muerte de Carlos Andrés Salazar Segura, según sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173

AVALUO: La indemnización antes descrita tiene un avalúo de TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS (\$39.062.100) más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento de la entrega del mismo.

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA.....\$ 39.062.100

TOTAL HIJUELA NUMERO UNO.....\$19.531.050

HIJUELA NÚMERO DOS: HUMBERTO SALAZAR CABAL, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro - Valle del Cauca: recibirá la mitad de la indemnización contenida en la sentencia del 30 de agosto de 2018 a favor del causante. Consecuentemente, le corresponde la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS (\$19.531.050) por concepto de herencia, más los intereses que dicho capital genere hasta el momento del pago efectivo de la obligación por parte del INVIAS.

PARA CUBRIR ESTA HIJUELA, SE LE ADJUDICA LO SIGUIENTE:

PARTIDA UNICA: El cincuenta por ciento (50 %) de la indemnización que le correspondería en vida al causante Juan David Salazar Segura por la muerte de Carlos Andrés Salazar Segura según sentencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto N° 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, radicación 76001233100020040556001, expediente N° 41.173.

Página 5 de 7
MPPH



08-09-21 PC025573573

W8C8AFDQ09

THOMAS GREG & SONS

AVALUO: La indemnización antes descrita tiene un avalúo de TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS (\$39.062.100) más los intereses y capital que se hayan generado hasta el momento de la entrega del mismo.

VALOR TOTAL PARTIDA UNICA.....\$ 39.062.100

TOTAL HIJUELA NUMERO DOS.....\$19.531.050

COMPROBACIÓN

Valor de los bienes inventariados.....\$ 39.062.100

TOTAL ACTIVO.....\$ 39.062.100

HIJUELA PRIMERA a favor de LUZ NANCY SEGURA QUINTERO por concepto de Herenciales \$19.531.050.

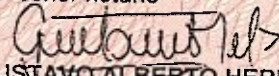
HIJUELA SEGUNDA a favor de HUMBERTO SALAZAR CABAL por concepto de Herenciales \$19.531.050.

PASIVO INVENTARIADO.....\$ -0-

PARA UN TOTAL.....\$39.062.100

En los anteriores términos dejo presentado el trabajo de partición de los bienes relictos dejados por el causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.

Del señor notario


GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

NOTARIA 9 DE CALI
PODER
VERIFICAR EN REPOSITORIO

MYRIAN SALAZAR HERNÁNDEZ.

ABOGADA

Señora:

NOTARIA (22) DEL CÍRCULO NOTARIAL DE CALI-VALLE.

E. S. D.

REF: PODER PARA TRÁMITE DE SUCESION INTESTADA.

CAUSANTE: JUAN DAVID SALAZAR SEGURA.

LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, mujer, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No.31.200.978 expedida en Tuluá-Valle y HUMBERTO SALAZAR CABAL, varón, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No.2.631.290 expedida en San Pedro-Valle, personas plenamente capaces, hábiles para contratar y obligarse, de estado civil solteros con unión marital de hecho, con domicilio y residencia en Carrera 1E Norte #83-18, del barrio Comfenalco de esta ciudad de Cali-Valle, obrando en nombres propios, por medio del presente escrito en calidad de padres del causante JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, manifestamos que conferimos Poder especial, amplio y suficiente a MYRIAN SALAZAR HERNANDEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No.28.815.117 del Libano-Tolima, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No.39974 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio comercial en la calle 11 # 5-61, oficina 704 del edificio valher de Cali, para que en nuestros nombres y representación inicie y lleve hasta su terminación "EL TRAMITE NOTARIAL DE SUCESION INTESTADA" de nuestro hijo JUAN DAVID SALAZAR SEGURA, quien en vida se identificó con la tarjeta de identidad No.97040314427, fallecido en esta ciudad de Cali-Valle el día doce (12) de septiembre de 2008, de acuerdo al certificado de defunción expedido por la Notaria segunda (02) de Cali-Valle, y según indicativo serial No.06611069, siendo Cali-Valle, el lugar de su ultimo domicilio.

Manifestamos que aceptamos la sucesión con beneficio de Inventario.

Manifestamos en forma expresa bajo la gravedad del juramento que LOS SUSCRITOS, somos las únicas personas interesadas en esta sucesión, que ignoramos la existencia de otros interesados de igual o mejor derecho y que no ha habido, ni hay proceso judicial o trámite notarial respecto a esta sucesión. Que no conozco la existencia de acreedores o legatarios que tengan interés en presente tramite.

Nuestra apoderada queda ampliamente facultada para solicitar la liquidación de la herencia, elaborar la relación de inventario y avalúo, el trabajo de partición y adjudicación, suscribir la Escritura Pública, aclarar, para aclarar y gestionar particiones adicionales, para conciliar, desistir, reasumir, recibir, transigir, sustituir el poder, adelantar dicho trámite, según lo establecido en el Decreto 902 de mayo de 1988, modificado por el decreto 1729 de 1989. De la señora Notaria Atentamente:

Luz Nancy Segura

LUZ NANCY SEGURA QUINTERO.

C.C.No.31.200.978 de Tuluá-Valle.

Humberto Salazar

HUMBERTO SALAZAR CABAL.

C.C.No.2.631.290 de San Pedro-Valle.

Acepto Poder:

Myrian Salazar Hernandez

MYRIAN SALAZAR HERNANDEZ

C.C.No.28.815.117 del Libano-Tolima.

T.P.No.39974 del C. S. J.

Cel.300-5352364.



PC025573572



09-09-21 PC025573572

6ULPQHGT8

THOMAS GREG & SONS.



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO**

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



3925

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el dos (02) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Nueve (9) del Círculo de Cali, compareció:

HUMBERTO SALAZAR CABAL, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0002631290 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Humberto Salazar

----- Firma autógrafa -----



310u6ln09649
02/11/2019 - 10:26:44:755



LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0031200978 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Luz Nancy Segura

----- Firma autógrafa -----



2u9k69m9oqkp
02/11/2019 - 10:28:35:577



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de PODER PARA TRAMITE NOTARIAL SOBRE SUCESSION INTESTADA y que contiene la siguiente información NOTARIA ENCARGADA BAJO RESOLUCION 14348/01/11/2019

Yolanda Morillo Infante

YOLANDA MORILLO INFANTE

Notaría nueve (9) del Círculo de Cali - Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 310u6ln09649



836

Señores
NOTARIA () DEL CIRCULO DE CALI
 E.S.D.




REF: MEMORIAL DE SUSTITUCIÓN PARA SUCESIÓN INTESTADA
CAUSANTE: JUAN DAVID SALAZAR SEGURA


MYRIAN SALAZAR HERNANDEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 28.815.117 de Libano Tolima, persona plenamente capaz, abogada en ejercicio con tarjeta Profesional N° 39974 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio comercial en la calle 11 #5-61, oficina 704 del Edificio Valher de Cali, por medio del presente escrito manifiesto que sustituyo poder especial que me fuera otorgado por los señores **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**, mujer mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31200978 expedida en Tuluá Valle y **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, varón mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 2.631.290 expedida en San Pedro Valle, personas plenamente capaces, de estado civil solteros con unión marital de hecho, con domicilio y residencia en Carrera 1E Norte #83-18, del Barrio Comfenalco de la ciudad de Cali-Valle, al doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali e identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, persona plenamente capaz, con domicilio en la Venida 6 A BIS #35N-100 Edificio Centro Empresarial Chipichape oficina 212 para que inicie y lleve hasta su terminación "EL TRAMITE NOTARIAL DE SUCESIÓN INTESTADA" de **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA** quien en vida se identificó con Tarjeta de Identidad N° 97040314427, fallecido en esta ciudad de Cali Valle el día doce (12) de septiembre de 2008, de acuerdo al certificado de defunción expedido por la Notaria Segunda (02) de Cali-Valle, y según indicativo serial N° 06611069, siendo Cali-Valle, en lugar de su último domicilio.

Mi sustituto apoderado queda ampliamente facultado para solicitar la liquidación de la herencia, elaborar la relación de inventario y avalúo, el trabajo de partición y adjudicación, suscribir la Escritura Pública, aclarar y gestionar particiones adicionales, para conciliar, desistir, reasumir, recibir, transigir, sustituir el poder, adelantar dicho trámite según lo establecido en el Decreto 902 de mayo de 1988, modificado por el decreto 1729 de 1989.

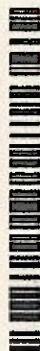
Acepto,


GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
 C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.
 T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Atentamente,


MYRIAN SALAZAR HERNANDEZ
 C.C. N° 28.815.117 de Libano Tolima
 T.P. N° 39.974 del C.S. de la J.

1



PC025573571



09-09-21 PC025573571

UD852V43BW

THOMAS OREG & GONS.



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



2353836

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Veintidos (22) del Círculo de Cali, compareció: MYRIAN SALAZAR HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 28815117 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Myrian Salazar H.

----- Firma autógrafa -----



v4z267e44mo5
21/04/2021 - 14:05:14



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de poder signado por el compareciente, en el que aparecen como partes MYRIAN SALAZAR HERNANDEZ.

LUZ ELENA HURTADO AGUDELO

LUZ ELENA HURTADO AGUDELO

Notario Veintidos (22) del Círculo de Cali, Departamento de Valle

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: v4z267e44mo5



REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL



REGISTRO DE NACIMIENTO

IDENTIFICACION No.

25716973

1 Parte básica 2 Parte sompl.
97 04 03 14427

OFICINA REGISTRO CIVIL 3 Clase (Notaría, Consulado, Registraduría Estado Civil, Inspección, etc.) NOTARIA DECIMA. - - - - 4 Municipio y Departamento CALI VALLE. - - - - 5 Código 9800

SECCION GENERAL

ASCRITO 6 Primer apellido SALAZAR. - - - - 7 Segundo apellido SEGURA. - - - - 8 Nombres JUAN DAVID. - - - -
SEXO 9 ESCRIBA MASCULINO O FEMENINO MASCULINO. - - - - FECHA DE NACIMIENTO 10 Día 03 11 Mes ABRIL. 12 Año 1.997
LUGAR DE NACIMIENTO 13 País COLOMBIA 14 Departamento VALLE. 15 Municipio CALI.

SECCION ESPECIFICA

DATOS DEL NACIMIENTO 16 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento I. S. S. - 17 Hora 11.21AM.
18 Documento presentado—Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.) CERTIFICADO DE NACIMIENTO. 19 Nombre del profesional que certificó el nacimiento FIRMA ILEGIBLE. 20 K.E. licencia 33.
MADRE 21 Apellidos (de soltera) SEGURA QUINTERO. - - - - 22 Nombres LUZ NANCY. - - - - 23 K.E. licencia 33.
24 Identificación (clase y número) C.C.No. 31.200.978 TULUA V. 25 Nacionalidad COLOMBIANA 26 Profesión u oficio OPERARIA.
PADRE 27 Apellidos SALAZAR CABAL. - - - - 28 Nombres HUMBERTO. - - - - 29 K.E. licencia 33.
30 Identificación (clase y número) C.C.No. 2.631.290 SAN PEDRO V. 31 Nacionalidad COLOMBIANA 32 Profesión u oficio MOTORISTA.
33 Identificación (clase y número) C.C.No. 2.631.290 SAN PEDRO V. 34 Firma (autógrafa) H. Humberto Salazar Cabal.
35 Dirección postal CRA. 20 No. 13-38 DAGUA V. 36 Nombre HUMBERTO SALAZAR CABAL.
37 Identificación (clase y número) - 38 Firma (autógrafa) -
39 Domicilio (Municipio) - 40 Nombre - 41 Firma (autógrafa) -
42 Identificación (clase y número) - 43 Nombre - 44 Firma (autógrafa) -
45 Domicilio (Municipio) - 46 Nombre - 47 Firma (autógrafa) -
FECHA DE REGISTRO (FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO) 48 Día 07 49 Mes ABRIL 50 Año 1.997 51 Firma (autógrafa) del funcionario ante quien se hace el registro
52 Nombre del funcionario ante quien se hace el registro
Forma DANE IPTG - 0 VI/77

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA DECIMA DE CALI

CERTIFICA

Que a petición del interesado HUMBERTO SALAZAR o su representante se expide la presente partida que es su fiel y autentica copia del original que aparece en el señal adjunto. Esta copia fue solicitada para

ES VALIDO PARA

y se presentará en TRAMITES LEGALES

NOTA: las copias del registro civil de nacimiento tendrán plena validez en todos los efectos sin importar la fecha de su expedición.
DEC. 1268/78. ART. 115 Y 278/72. ART. 1 LEY 962/05
VALIDO PARA ESTABLECER PARENTESCO

16 FEB 2021

NOTARIA DECIMA DE CALI

Dpto. Del Valle del Cauca

VIVIAN ARISTIZABAL C.
Registro Civil
Notaria

PC025573570



09-09-21 PC025573570

09K6QM0YFT

THOMAS GREG & SONS

RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL

(59) Para efectos del artículo primero de la Ley 75 de 1968 reconozco a la persona a quien se refiere esta acta como hijo extramatrimonial en cuya constancia firmo. A los días del mes de

Firma del Padre Humberto Salazar
 Nro. Documento de Identidad 9621290 San Pedro
HUMBERTO SALAZAR CABAL.

Nombre Completo del Padre

Cra. 20 N.º. 13-38 DASNA V.-

Dirección Residencia

Nombre del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma de la Madre Luz Nand Segura Q
 Nro. Documento de Identidad 318200478 10104
LUZ NAND SEGURA QUINTERO

Nombre Completo de la Madre

Dirección Residencia

Firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

(61) NOTAS



ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo
Serial

06611069

Datos de la oficina de registro							
Clase de oficina:	Registraduría	Notaría	<input checked="" type="checkbox"/>	Consulado	Corregimiento	Insp. de Policía	Código
Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía							
NOTARIA 2 CALI COLOMBIA VALLE CALI*****							

Datos del inscrito	
Apellidos y nombres completos	
SALAZAR SEGURA JUAN DAVID*****	
Documento de identificación (Clase y número)	Sexo (en Letras)
TARJETA DE IDENTIDAD 97040314427*****	MASCULINO*****

Datos de la defunción	
Lugar de la Defunción: Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía	
COLOMBIA VALLE CALI*****	
Fecha de la defunción	Hora
Año 2008 Mes SEP Día 12 02:00****	Número de certificado de defunción
802833810*****	
Presunción de muerte	
Juzgado que profiere la sentencia	Fecha de la sentencia
*****	Año * * * * Mes * * * * Día * *
Documento presentado	Nombre y cargo del funcionario
Autorización judicial <input type="checkbox"/> Certificado Médico <input checked="" type="checkbox"/>	JAMES ARTURO ZAMBRANO*****
	MEDICO*****

Datos del denunciante	
Apellidos y nombres completos	
FERNANDEZ CASTRO OSCAR*****	
Documentos de identificación (Clase y número)	Firma
CEDULA DE CIUDADANIA 0094524385*****	

Primer testigo	
Apellidos y nombres completos	
EL NOTARIO SEGUNDO DE *****	
Documentos de identificación (Clase y número)	Firma
*****	*****

Segundo testigo	
Apellidos y nombres completos	

Documentos de identificación (Clase y número)	Firma
*****	*****

Fecha de inscripción	
Año 2008 Mes SEP Día 12	NOTARIO JAMES JORDAN MEJIA*****

ESPACIO PARA NOTAS



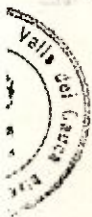
* 0 6 6 1 1 0 6 9

PC025573569



09-09-21 PC025573569

THOMAS GREG & SONS



629

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B**

Consejera Ponente (E): Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho

Radicación: 760012331000200405560 01 (41173)
Actor: María Edelmira Quintero y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Naturaleza: Acción de reparación directa

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de septiembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

SÍNTESIS DEL CASO

El 16 de octubre de 2003, aproximadamente a las 5: 30 a.m., a la altura de la vereda La Garza, municipio de Dagua, Valle, perdió la vida el señor Carlos Andrés Segura Quintero a consecuencia del impacto que sufrió en su cabeza por una roca que se desprendió de la montaña ubicada en un costado de la vía por donde transitaba, en el momento en que descendió de su vehículo para retirar las piedras que obstruían la carretera.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



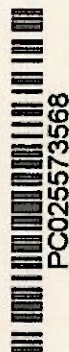
1. El 16 de diciembre de 2004¹, los señores María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis, Luz Nancy Segura en su propio nombre y en el de los menores Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura, Humberto Salazar Cabal, en nombre propio y de su hijo menor de edad Juan David Salazar Segura presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y el departamento del Valle del Cauca, procurando las siguientes declaraciones y condenas (f. 30-47, c.1.):

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca, de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los demandantes con la muerte de su hijo, hermano y nieto, CARLOS ANDRÉS SEGURA QUINTERO y por las secuelas de ese hecho trágico acaecido en la vereda La Garza del municipio de Dagua, en la vía que conduce a Buenaventura.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca en su condición de entes administrativa y patrimonialmente responsables, a indemnizar a los demandantes por todos los perjuicios sufridos.

3. Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales infligidos a cada uno de ellos, el equivalente en moneda legal a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, liquidando esta suma de acuerdo al monto del salario mínimo legal vigente en la fecha que se pague según la sentencia o en subsidio en la fecha de la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, conforme a la regulación legal que lo fije o en su defecto según la certificación que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la fecha en que se cancele según la sentencia, de acuerdo al siguiente detalle:

¹ La demanda fue corregida el 13 de mayo de 2005, a solicitud del tribunal, en el sentido de aportar la dirección de notificaciones del Instituto Nacional de Concesiones -Inco-, ente demandado en la presente acción.





María Edelmira Quintero Quintero	abuela	200SMLMV
Luz Nancy Segura Quintero	madre	200 SMLMV
Humberto Salazar Cabal	padre crianza	200 SMLMV
José Leonardo Celis Segura	hermano	200 SMLMV
Claudia Alejandra Mosquera	hermano	200 SMLMV
Juan David Salazar Segura	hermano	200 SMLMV *

4. De la misma manera condénese a los demandados a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca al pago de todos los perjuicios materiales ocasionados con motivo de ese hecho, de acuerdo a lo que se pruebe en el proceso, así:

A. Para la señora María Edelmira Quintero Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su nieto, Carlos Andrés Segura Quintero, quien en vida se los proporcionaba para la atención de sus gastos y necesidades personales y que ascendían a la para la época del deceso a \$200.000 mensuales

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (I.P.C.) certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2.003, hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

B. Para la señora Luz Nancy Segura Quintero la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas para estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hijo Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener en efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por el Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

Igualmente la indemnización en cuestión debe abarcar tanto el lucro cesante por el periodo vencido o consolidado, que comprende desde el luctuoso hecho el 16 de octubre de 2003 hasta el día de la sentencia en firme, y el periodo futuro, que parte de respectivo fallo ejecutoriado hasta la fecha probable de supervivencia de la demandante, según las aludidas tablas.

C. Para el señor José Leonardo Celis Segura, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de ingresos monetarios que ella (sic) y de los que seguirá privada (sic) hasta el final de sus días por la muerte de su hermano Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su progenitora, de su progenitora, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendían para la época de su deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

Igualmente la indemnización en cuestión debe abarcar tanto el lucro cesante por el periodo vencido o consolidado, que comprende desde el luctuoso hecho el 16 de octubre de 2003 hasta el día de la sentencia en firme, y el periodo futuro, que parte del respectivo fallo ejecutoriado hasta la fecha probable de supervivencia de la demandante, según las aludidas tablas.



PC025573567



09-09-21 PC025573567

NC8U4JMA13

THOMAS GREG & SONS



D. Para la niña Claudia Alejandra Mosquera Segura, quien está representada por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, la de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

E. Para el niño Juan David Salazar Segura, quien está representado por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero y por su padre Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originada en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) y de lo que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba tomando en cuenta el valor del dinero líquido en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

F. Para el señor Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras ordinariamente utilizadas en estos casos, para el daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) experimenta y de los que se seguirá privada (sic) hasta el final de sus días por la muerte de su hijo de crianza Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendían para la época de su deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

4. De manera subsidiaria pido la estimación del lucro cesante tanto para la madre en su nombre propio y en el de sus menores hijos, como para la abuela, padre de crianza y hermanos, se haga con base en el salario mínimo legal vigente en el año 2003 cuando el joven Carlos Andrés Segura Quintero falleció, caso en el cual han de aplicarse las fórmulas matemáticas y financieras pertinentes para establecer el lucro cesante pasado y el futuro: el primero desde la fecha del deceso hasta la respectiva sentencia y el segundo desde la emisión de la misma hasta la fecha estimada probable de vida de cada uno de los reclamantes y la fecha en que la menor alcance la mayoría de edad.

5. Ordenar que el fallo se cumpla en los términos del Código Contencioso Administrativo arts. 176 y 177.

2. Como fundamento de las peticiones aludidas, la parte actora señaló que el 16 de octubre de 2003, en la vía que de Cali conduce a Buenaventura a la altura de la vereda la Garza, municipio de Dagua, el señor Carlos Andrés



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

Segura Quintero perdió la vida tras ser impactado por un gran número de rocas que se desprendieron de la montaña ubicada en uno de los costados de la carretera, impacto que horas después, luego de que el joven fue trasladado al hospital José Rufino Vivas del municipio de Dagua, le causó su muerte debido al trauma craneoencefálico severo que sufrió.

2.1. Destacaron que la injustificada falla en el mantenimiento de la vía por parte de los entes demandados provocó directamente el accidente en que perdió la vida su familiar, en razón de que desde hace más de 30 años, la inestabilidad del terreno originó un desequilibrio en la cordillera debido a la remoción inapropiada de rocas que no fue remediada por las demandadas.

2.2. Señalaron que el derrumbe que se presentó en la vía, por el que la víctima detuvo su marcha a fin de remover algunas de las rocas que obstaculizaban su paso, no fue debidamente señalado o restringido a fin de prevenir el peligro existente, negligencia que contribuyó eficientemente en la causación del daño que intentan les sea reparado.

2.3. Refirieron que el joven Carlos Andrés Segura Quintero convivía al momento de su deceso con su señora madre, padre de crianza y sus hermanos, a quienes dedicaba una parte de sus ingresos mensuales que ascendían para esa fecha a la suma de \$1 000 000 de pesos aproximadamente, mientras que la otra fracción de su salario lo destinaba a la manutención de su abuela, familiares con quienes mantenía vínculos de fraternidad y apoyo.

2.4. Por último indicaron que *"Es indudable que la temprana muerte de Carlos Andrés Segura Quintero, ocasionó un enorme perjuicio a sus padres, hermanos y abuela, pues todos sufrieron un gran dolor moral generado por la desaparición del hijo, hermano y nieto, sumado al detrimento material que experimentaron, en la medida en que su deceso los privó de la ayuda económica que él les brindaba, comoquiera que invertía en ellos la totalidad de los ingresos que recibía como conductor de camión o tractomula"*

II. Trámite procesal



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



3. La Nación-Ministerio de Transporte **contestó** oportunamente la demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones elevadas por la actora. Al respecto, adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de responsabilidad suya, en consideración a que, de conformidad con la normativa vigente al momento de ocurrencia del siniestro e incluso, según las normas que rigieron las funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte antes de que se restructurara en Ministerio de Transporte, no le correspondía realizar el mantenimiento y la señalización de las carreteras en el territorio colombiano, labores que se encontraban repartidas entre el INVÍAS, los departamentos y los municipios.

3.1. De esta manera, adujo que sus competencias se restringían a regular y planificar el sector transporte, y para efectos de fundamentar lo expuesto, trajo a colación las disposiciones pertinentes y el contenido de una sentencia del Consejo de Estado en la que aseveró que se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva (f. 323-325, c.1.).

3.2. El Departamento del Valle del Cauca, en la misma oportunidad procesal, además de indicar que se atendía a lo que resulte probado y de oponerse a las pretensiones, refirió que en la causación del daño padecido por los demandantes medió la fuerza mayor, consistente en un evento de la naturaleza que por su condición de irresistibilidad e imprevisibilidad lo exime de responsabilidad, en consecuencia, solicitó negar las pretensiones formuladas (f. 71-75, c.1.).

3.3. El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- **contestó la demanda**, con escrito en el que propuso como medios exceptivos la inexistencia de responsabilidad y la culpa exclusiva de la víctima. Frente a la primera argumentó que la vía en donde tuvo ocurrencia el fatídico accidente se encontraba en mantenimiento por parte de la entidad a través de la contratación de personal capacitado para tal fin, por lo que no es posible aducir, como lo hace la parte actora, negligencia en el cumplimiento de las funciones a su cargo (f. 298-304, c. 1). En lo que tiene que ver con la



PC025573565



09-09-21 PC025573565



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

configuración del hecho de la víctima estimó que, de conformidad con el relato hecho por los propios demandantes, el señor Carlos Andrés Segura Quintero en una actuación imprudente, descendió de su vehículo y sin protección alguna, pese al peligro que representaba la topografía de la zona, empezó a remover las rocas que poco antes se habían desprendido de la montaña, momento en el que se produjo el derrumbe que acabó con la vida del joven.

3.4. Por otro lado, señaló que si bien se acreditó el primer elemento necesario para declarar la responsabilidad extracontractual, esto es, el daño consistente en la muerte del familiar de los demandantes, los dos elementos restantes brillan por su ausencia, pues el menoscabo patrimonial no le es imputable a las entidades públicas demandadas, en la medida que es su concreción concurrió la culpa exclusiva de la propia víctima, quien de forma negligente se expuso al riesgo a pesar de las condiciones topográficas por él conocidas, pues no puede desconocerse que se dedicaba profesionalmente al transporte terrestre y decidió libremente exponerse al mismo (f. 298-305, c.1.).

3.5. En escrito separado, la entidad pública llamó en garantía a la Compañía Central de Seguros S.A. en virtud del seguro de responsabilidad extracontractual con ella contratado, a fin de que en caso de una eventual condena en su contra la entidad aseguradora asumiera lo pagado. El tribunal, mediante auto del 12 de septiembre de 2006, admitió el llamamiento en garantía y, en consecuencia, ordenó notificar personalmente al representante legal de la entidad (f. 306-307; 328, c.1.).

3.6. El Instituto Nacional de Concesiones-Inco- excepcionó la inexistencia de responsabilidad, pues en el caso se le adjudica una omisión en el deber de vigilancia de la ejecución del contrato de concesión n.º 0005 de 1999 para el mantenimiento de la malla vial del departamento del Valle del Cauca, concesión a la que no pertenece el tramo en donde ocurrió el accidente en que perdió la vida el señor Segura Quintero, razón por la cual no se encontraba obligada a supervisar el estado de la carretera en



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



cuestión, pues al no ser una vía concesionada no tenía ningún tipo de injerencia sobre ella.

3.7. En igual sentido, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues en su entender no existe identidad de la persona jurídica que figura como extremo de la pretensión y quien presuntamente es responsable del daño causado, pues reiteró que su obligación legal se agotaba en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista.

3.8. Así mismo, refirió que en caso de existir responsabilidad en el deceso del señor Carlos Andrés Segura Quintero esta debía ser imputada al Instituto de Nacional de Vías -Invias-, pues corresponde a esta entidad el deber de vigilancia y control del estado de esa carretera, pues no pertenecía a las vías que fueron dadas en concesión y sobre las cuales ejercía una suerte de interventoría.

3.9. Para finalizar adujo que en la causación de daño alegado medió el hecho exclusivo de la víctima. Estimó que la causa eficiente del daño sufrido por los demandantes tuvo su origen en el abuso de derecho propio ejercido por el señor Segura Quintero, pues se expuso de una manera imprudente al riesgo que representaba aparcarse y descender de su vehículo en un tramo que, dado la inestabilidad del terreno, fácilmente podría derrumbarse (f. 241-259, c.1.).

3.10. La sociedad QBE Central de Seguros S.A. dio respuesta al llamamiento en garantía formulado por el Instituto Nacional de Vías -Invias-, para lo cual afirmó que se oponía a la totalidad de pretensiones elevadas y que se atenía a los hechos probados. Por otro lado, propuso como excepciones de mérito la inexistencia de la falla del servicio, en tanto no se demostró que el menoscabo patrimonial alegado por la parte actora fuera el resultado de incumplimiento en la funciones del ente público contratante del seguro de responsabilidad extracontractual. En el mismo sentido, consideró que la culpa exclusiva de la víctima surgió como la única fuente del accidente en donde perdió la vida el joven Carlos Andrés Segura



PC025573564



09-09-21 PC025573564

E9RY07X6J1

THOMAS GREG & SONS.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

Quintero, pues la inobservancia de los mínimos para la preservación de su propia vida, condujo al desenlace fatídico hoy conocido.

3.11. Refirió que la suma solicitada por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante es extremadamente alta, si se tiene en cuenta que no se probó la cuantía del salario devengado por la víctima y, más aún, que ese mismo ingreso fuere multiplicado para calcular la indemnización para la abuela, madre, padre de crianza y hermanos del occiso como si se tratase de valores individuales. Indicó que la suma pretendida por perjuicio moral tampoco cuenta con un respaldo probatorio que permita establecer que la misma realmente corresponde a esa tipología de resarcimiento patrimonial.

3.12. Alegó que la acción ordinaria derivada de contrato de seguro se encontraba prescrita, conforme con lo establecido por el artículo 1081 del Código de Comercio, pues desde el momento de la ocurrencia del siniestro, 16 de octubre de 2003, habían transcurrido más de los 2 años para intentar la acción pertinente (f. 370-375, c.1.).

4 Mediante **sentencia** del 14 de septiembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones. Como fundamento de su decisión esgrimió (f. 449-473, c. ppl.):

4.1. En primer lugar, estimó que se encontraba configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca, Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, entidades públicas a las que le son ajenas las obligaciones atinentes al mantenimiento, conservación, reparación y señalización de la vía en donde tuvo ocurrencia el accidente, en tanto revisado el contenido obligacional de orden legal y contractual, fue claro para el tribunal que esta competencia le fue asignada, de manera exclusiva, al Instituto Nacional de Vías –Invías.

4.2. Consideró que del material probatorio allegado al expediente, en especial de los testimonios recepcionados, se acreditó que el deceso del señor Carlos Andrés Segura Quintero fue el resultado de su actuar



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



negligente, en tanto sin protección alguna descendió de su vehículo y empezó a limpiar la vía de las rocas que en esos momentos se desprendían de la montaña ubicada en un costado en aras de abrirse paso, con tan mala suerte que en ejecución de esta descuidada labor uno de esos elementos contundentes impactó en su cabeza y horas más tarde murió en el hospital al que fue trasladado producto de un trauma craneoencefálico severo, actuación que evidentemente se acompasa con la descripción del eximente de responsabilidad denominado hecho exclusivo de la víctima.

4.3. En últimas, concluyó que *"la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero, no fue el producto de una falla del servicio de la entidad demandada, ni mucho menos por ello puede imputársele automáticamente su responsabilidad, pues la falla del servicio tiene como presupuesto el incumplimiento de una obligación, es decir, que en el presente caso, debía necesariamente demostrarse que el daño fue producto de la omisión de la demandada de cumplir con su deber, con su obligación representado en el adecuado mantenimiento de la vía, la recolección de escombros, etc. Empero resulta que los contratos de mantenimiento a que antes se aludió, celebrados por el Invias y el Inco, reflejan como dicha entidad cumplía satisfactoriamente y a cabalidad con sus obligaciones funcionales por la época en que sucedieron los hechos, huelga repetir, con la obligación de conservación y mantenimiento de la vía en comento, y, por ende, no puede endilgársele omisión alguna en esos sentidos"*.

5. El 25 de octubre de 2010, la accionante interpuso y sustentó oportunamente **recurso de apelación** contra la sentencia de primera instancia. En criterio de la parte apelante, la única causa de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero fue la injustificada falla en el mantenimiento de la vía por parte de los entes demandados, tal como quedó demostrado en el proceso, pues los derrumbes en la zona antecedían a la fecha de la ocurrencia de los hechos, deslizamientos que eran de conocimiento general y pese a ello la administración nunca desplegó acción tendiente a evitar accidentes como el que segó la vida del señor Segura Quintero (f. 476-485, c. ppl.).



09-09-21 PC025573563

EBGB2DL3W9
THOMAS GREG & SONS.



5.1. Refirió que el *a quo* se equivocó al concluir que la muerte de su familiar se debió a un hecho imputable a él, en tanto se acreditó suficientemente que si descendió de su vehículo para retirar las rocas de su camino, como era la costumbre de las personas que transitaban por esa vía, no lo hizo cuando el material rocoso caía, pues las piedras que se encontraban en la carretera ya se estaban ahí antes de su arribo, pero lamentablemente en el instante en que el joven se acercó, ocurrió un nuevo desplome de rocas que al impactar en su humanidad acabaron con su vida.

5.2. Insistió en que no se puede desconocer la actitud negligente, pasmosa e inexcusable de los demandados al desatender el mantenimiento y conservación de la vía y de esa manera procurar evitar el peligro latente que esta representaba, omisión que además era de conocimiento popular, pues para esa fecha los accidentes reportados eran de recurrente ocurrencia, sin que ninguna autoridad pública ejerciera el más mínimo control de la situación.

5.3. Señaló que el tribunal obvió, circunstancia de especial relevancia, el hecho de que para la fecha de los hechos no existiera señalización o restricción que advirtiera el peligro representado por la inestabilidad del terreno que constantemente amenazaba a los usuarios y que era conocida ampliamente por las autoridades demandadas.

5.4. Adujo que se encuentra probado conforme lo exige la ley, el perjuicio extrapatrimonial sufrido con ocasión del deceso del joven Segura Quintero, por cuanto la pérdida de un ser querido, máxime a temprana edad, provoca dolor y aflicción moral de grandes proporciones que, si bien no es cuantificable en dinero, merece una compensación económica que resarza mínimamente la angustia vivida. En igual sentido, indicaron que la ayuda económica que la víctima les brindaba logró ser acreditada, pues gracias a la labor productiva que desempeñaba contribuía a que su familia tuviese una buena calidad de vida.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



5.5. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva declarada por el tribunal en favor del departamento del Valle del Cauca, Instituto Nacional de Concesiones –Inco- y el Ministerio de Transporte, solicitó que esta determinación fuese revocada, en tanto el marco obligacional de todas las entidades desvinculadas conciernen deberes de planeación, veeduría, control o ejecución en el mantenimiento, señalización y tránsito por el corredor vial en donde tuvo ocurrencia el trágico accidente.

6. En la etapa para presentar alegatos de conclusión en la presente instancia, el Instituto Nacional de Concesiones –Inco- reiteró el argumento conforme al cual la causa del accidente tuvo su origen en la actuación negligente de la propia víctima. Además sostuvo nuevamente que el tramo de la carretera en donde tuvo ocurrencia el accidente no hacía parte de la concesión por ella supervisada, por tanto no era del resorte de sus funciones ejercer vigilancia sobre aquella (f. 548-551, c.1.).

6.1. Por su parte, los demandantes insistieron en la responsabilidad solidaria que le asistía a las entidades públicas demandadas por la muerte de su familiar, en tanto resaltó que fue con ocasión de la prestación defectuosa del servicio de mantenimiento y señalización en la vía que se concretó el daño que intentan les sea reparado (f. 552-573, c.ppl.).

6.2. La Nación-Ministerio de Transporte reiteró los argumentos esgrimidos en su contestación de la demanda, en punto a solicitar se confirmara la falta de legitimación en la causa por pasiva decretada a su favor (f. 576-579, c.ppl.).

CONSIDERACIONES

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en un proceso que, por su



PC025573562



09-09-21 PC025573562

6RHD28CEXZ

THOMAS GREG & SONS



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

cuantía², tiene vocación de doble instancia.

II. Los hechos probados

8. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El 16 de octubre de 2003, aproximadamente a las 5: 30 a.m., en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura, a la altura de la vereda La Garza, perdió la vida el señor Carlos Andrés Segura Quintero a consecuencia del impacto de un elemento contundente que le ocasionó un trauma craneoencefálico con exposición de tejido óseo y masa encefálica que le comprometió las regiones frontal y occipital (acta de levantamiento del cadáver, f. 84-85, c. 2; acta de inspección de cadáver, f. 86, c. 2; protocolo de necropsia, 89-91, c.2; certificado civil de defunción, f. 96, c.3.).

8.2. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente se tiene que, entre los kilómetros 52 y 53 de la carretera que desde Cali conduce a Buenaventura, aproximadamente a las 5: 30 a.m. se encontraban detenidos en la vía varios vehículos, en su mayoría de servicio de carga, ante la imposibilidad de avanzar por la presencia de material rocoso que se desprendía de la montaña ubicada a un costado, situación que motivó a los conductores a descender de sus automotores y remover las piedras, momento en el que se presentó un nuevo desprendimiento que obligó a los presentes a emprender la huida con tan mala fortuna que el señor Carlos Andrés Segura Quintero fue impactado por uno de estos elementos contundentes con el desenlace ya conocido. Así lo narraron los testigos presenciales del hecho (testimonios rendidos al interior del proceso contencioso administrativo, f. 52-57; 72-78, c.3.):

² La Sala encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de \$550 000 000 (f.47, c.1.), la cual resulta superior a los 500 s.m.l.m.v. exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2004 (\$179 000 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



8.2.1. El señor Numar Bedoya Galindo al momento de ser interrogado acerca de las circunstancias en las que falleció el señor Segura Quintero manifestó:

Diría yo que conocí el caso pues estuve en el lugar del accidente es decir la fecha no la recuerdo pero era más o menos 6, corrijo 5 a las 5:30 de la mañana me dirigía de Dagua a Buenaventura y en el sector del K 52 y 53 más o menos intermedio había mucha piedra en la carretera por lo cual ya habían parados varios carros en la vía para quitar las piedras y poder pasar, estábamos quitando las piedras y cuando sentíamos que caían más piedras que pegaban sobre los camiones todos quienes estábamos allí salimos a correr a protegernos atrás de los camiones pero estaba lloviznado y oscuro y no veíamos bien y las piedras que caían no las veíamos por lo oscuro, las luces de los carros estaban prendidas pero las baja cuando oí que cayeron las piedras corrimos y escuché un golpe y miré atrás y vi a Andrés que le había caído una piedra y estaba caído, comencé a gritar lo mató lo mató la piedra, pero nos tocó luego esperar y siguió cayendo piedra para poder rescatarlo y de allí o trajimos en un taxi hasta aquí a Dagua al hospital y lo dejamos aquí (...) (f. 54-55, c.2.)

8.2.2. Por su parte el señor Luis Efrén Díaz Labrada, respondió:

Si lo tengo [conocimiento] los hechos sucedieron es decir el accidente en donde él perdió la vida fue el kilómetro 53 de la vía al mar nueva en sentido Cali Buenaventura, perdió la vida por limpiar la carretera para poder seguir el viaje hacia Buenaventura a mí me tocó hacer igualmente lo mismo para poder pasar pues lo hice antes que él, el mismo día a eso de las 5:30 de la mañana fue lo del accidente de Andrés yo paré al otro lado a unos 200 metros a mirar lo de las llantas de mi carro por si llevaba piedras y cuando ellos llegaron no les paré muchas bolas (sic), estaba oscuro y seguí hacia Buenaventura y ellos, es decir Andrés y los otros compañeros se quedaron limpiando la vía y ya estaba en Buenaventura cuando recibí la noticia de la muerte de Andrés ocurrida en el lugar del derrumbe, es decir en el kilómetro 53 (f. 72-83, c.2.).

8.3. Entre los meses de agosto y septiembre de 2003, el Instituto Nacional de Vías –Invias- suscribió al menos tres contratos, n. 033, 035 y 209, cuyos objetos contractuales se circunscribieron a efectuar el mantenimiento de la carretera Cali-Lobogurrero por un valor total aproximado \$813 000 000 durante un término estimado 5.5 meses. (contratos n.º 033, 209 y 039 del 1, 8 de agosto y 9 de septiembre de 2003, respectivamente, f. 273-297, c 1; 30-35, c.2.).

8.4. De conformidad con lo informado por el diario El País en su emisión del 19 de enero de 2004, a la altura del kilómetro 55 de la vía que de Cali

PC025573561



09-09-21 PC025573561

48H7PJVZD

THOMAS GREG & SONS



conduce a Buenaventura se presentó un nuevo derrumbe de piedras que obstaculizó el paso de vehículos, el cual fue antecedido por al menos 25 eventos como ese, desde diciembre del año inmediatamente anterior, situación que llevó a que el gobernador del Valle del Cauca solicitara al gobierno nacional la entrega del manejo del peaje ubicado en el corregimiento de Loboguerrero, en el marco de una reunión que sostuvieron en el Puerto de Buenaventura (ejemplar del diario El País del 19 de enero de 2004, f. 21-29, c.1.).

8.5. El señor Carlos Andrés Segura Quintero era hijo de Luz Nancy Segura Quintero, su padre de crianza era Humberto Salazar³, nieto de Edelmira Quintero Quintero y hermano de José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura (copia de los registro civiles de nacimiento y testimonios, f. 3, 8, 12, 14, 16, c.1.)

III. Problema jurídico

9. La Sala debe decidir sobre la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas con ocasión de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida por el impacto de un elemento rocoso desprendido desde la montaña ubicada a un costado de la vía, como quiera que la parte actora atribuye ese accidente al mal estado de la vía y la falta de señalización y medidas para evitar el acceso al sitio, mientras que la Nación-Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y el departamento de Valle del Cauca aducen la falta

³ Acerca de la relación paternal que mantenía el señor Humberto Salazar con el joven Carlos Andrés Segura Quintero se rindieron las siguientes declaraciones: El señor Omar Alexander Portilla, quien aseguró conocer a la víctima desde hacía diez años contados desde el momento en que rindió su declaración, señaló: "Preguntado: Manifieste al despacho si tiene conocimiento usted si el señor Carlos Andrés Segura Quintero para los hechos acaecidos el 16 de octubre de 2003, convivía con su familia. En caso positivo, quienes componían su núcleo familiar. Contestó: Si él vivía con la abuela, a señora Edelmira, con sus padres Nancy y Humberto y sus hermanos Leonardo, Claudia y Andrés David" (f. 76, c.3.). Por su parte el señor Fernando Esguerra Tortes, quien se presentó como amigo de la infancia del joven Segura Quintero, adujo: "Preguntado: Manifieste al despacho si conocía a señor Carlos Andrés Segura Quintero, bajo que circunstancias y de que tiempo. Contestó: Si lo conocí, él andaba desde pequeño con el papá don Humberto en el camión pues también es motorista, antes de su muerte unos 13 años más o menos" (f. 77, c.3).



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



de legitimación en la causa por pasiva, y el INVÍAS niega haber incurrido en falla del servicio que contribuyera causalmente a la producción del deceso, por considerar que se originó exclusivamente por el hecho de la propia víctima.

9.1. Con ese fin, se analizará (i) la legitimación en la causa por pasiva de los entes demandados, examen que se efectuará dado que la parte demandante insistió en la responsabilidad patrimonial de los integrantes de la parte pasiva de la *litis*; (ii) las circunstancias particulares en las que acaeció el siniestro, con el fin de determinar si el daño demandado le puede ser imputado a las entidades demandadas, análisis en el que se abordarán los argumentos específicos de la apelante y cobrará especial importancia la conducta observada por la propia víctima.

IV. Análisis de la Sala

10. En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso aclarar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda⁴. En este sentido, no siempre quien se

⁴ "(...) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda" (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de



PC025573560



09-09-21 PC025573560

L8DW9FV34

THOMAS GREG & SONS



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la *litis*, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores^{5,6}.

10.1. Igualmente, cabe destacar que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio⁷. De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y

junio de 2004, exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

⁵ [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que "... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

⁷ Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1 de marzo de 2006, exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764).



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

10.2. Con observancia de lo señalado y partiendo de que los cuatro entes estatales se encuentran legitimados en la causa de hecho, en tanto que fueron vinculados debidamente a la *litis* en calidad de demandados, la Sala observa que mientras el INVÍAS ostenta un interés jurídico sustancial en las resultas del presente proceso, no se logra evidenciar ese mismo interés por parte de la Nación-Ministerio de Transporte, de tal forma que las pretensiones formuladas en su contra serán denegadas.

10.3. Al respecto, de conformidad con la normativa vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, el Ministerio de Transporte tenía a su cargo la formulación de políticas públicas para la dirección del sector y del sistema nacional de transporte, sin que tuviera a su cargo labores de mantenimiento y señalización de las vías que integran las diferentes redes viales y carreteras del país⁸, de tal forma que no se logra avizorar la conexión que tendría la Nación, a través de dicha dependencia ministerial, con el desenlace de los hechos invocados por los demandantes.

10.4. Ciertamente, a partir de las normas referenciadas, no es posible

⁸ Sobre la materia, consultar las ley 105 de 1993 y 769 de 2002, y el Decreto 2053 de 2003. Ver, entre otros: Artículo 1 de la Ley 105 de 1993: "Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte."//Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior (...). Artículo 5 de la Ley 105 de 1993: "Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito". Artículo 20 de la Ley 105 de 1993: "Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción". Artículo 5 de la Ley 769 de 2002: "El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción". Artículo 1 del Decreto 2053 de 2003: "El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo".

PC025573559



09-09-21 PC025573559

D3ZFC4BH1K

THOMAS GREG & SONS



dilucidar la conexión que tendría el Ministerio de Transporte con el accidente de tránsito que sucedió entre los kilómetros 52 y 53 de la carretera que de Cali conduce a Buenaventura, puesto que le competía la adopción de políticas y planes generales de cara al sistema y al sector de transporte aludidos, pero no la realización de medidas materiales para garantizar la seguridad de los transeúntes en las vías del país, nexo que tampoco se acreditó mediante los elementos de convicción aportados o practicados en el plenario.

10.5. Por lo tanto, es preciso reiterar la tesis de esta Corporación en el sentido que, en términos generales, la Nación-Ministerio de Transporte carece de la legitimación por pasiva en las causas de asuntos como el propuesto en el *sub judice* -a menos que de conformidad con el material probatorio que obre en cada caso concreto se logre determinar alguna situación especial que evidencie su nexo con los hechos de la demanda-⁹ y, en consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada, en cuanto a la falta de legitimación de dicho demandado en el presente asunto.

10.6. Por su parte, en lo que tiene que ver con el departamento del Valle del Cauca la Sala advierte que esta entidad territorial tampoco está llamada a resarcir los eventuales perjuicios que se llegaren a determinar, en la medida en que la vía en que tuvo ocurrencia el accidente en que perdió la vida el señor Segura Quintero es del orden nacional, en tanto su origen y destino están localizados en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional¹⁰, por lo cual su mantenimiento y preservación se encuentra funcionalmente asignada al Instituto Nacional de Vías -Invias-, competencia legal que excluye la intervención de cualquier otra entidad pública. Adicionalmente, tampoco se encuentra prueba que permita

⁹ Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 9 de abril de 2014 y del 14 de julio de 2016, exp. 25000-23-26-000-2000-02191-01(28738) y 25000-23-26-000-2000-01902-01(36198), C.P. Hernán Andrade Rincón, y Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 19001-23-31-000-2000-03932-01(32490), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

¹⁰ Ley 105 de 1993 **Artículo 11. perímetros del transporte por carretera.** Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes:

a. El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



concluir que por convenio o negocio jurídico el departamento demandado hubiese asumido algún tipo de obligación frente a la conservación de la carretera, por el contrario, se acreditó que el mismo instituto contrató su reparación e intervención, tal como se lo imponía la propia ley.

10.7. Por las anteriores razones, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa del departamento del Valle del Cauca por la responsabilidad patrimonial deprecada por los demandantes, con ocasión de la muerte de su familiar.

10.8. Frente a la vinculación del Instituto Nacional de Concesiones –Inco-, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, organismo que desde su creación adoptó la naturaleza jurídica¹¹ de un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, cuya función principal se circunscribe a la administración, planeación, estructuración, contratación y ejecución de los negocios de infraestructura del país que se adelanten con participación de capital privado, funciones que en principio no ligan su competencia con asuntos de mantenimiento y conservación de las vías y que por tanto lo mantendrían al margen de tal obligación.

10.9. Revisadas las pruebas aportadas al expediente se encuentra que mediante contrato suscrito el 29 de enero de 1999, el Instituto Nacional de Vías entregó en concesión parte de la malla vial del departamento del Valle del Cauca en aras de su diseño, recuperación y mantenimiento, tramo que no comprendió para ese contrato el sector en donde ocurrió el accidente referido en precedencia. Ahora bien, para la Sala es claro que una vez fue creado el Inco -26 de junio de 2003- el Instituto Nacional de Vías se encontraba obligado a subrogar o ceder, a título gratuito, los convenios relacionados con la infraestructura vial del país, de conformidad con lo consignado en el artículo 18 del Decreto Ley 1800 de 2003, por lo que a partir de ese momento era el establecimiento público –Inco- el llamado a

¹¹ Mediante el Decreto Ley 4165 de 2011, el Inco cambió de denominación para convertirse en la Agencia Nacional de Infraestructura y mutó de establecimiento público a agencia nacional de naturaleza especial.



PC025573558



09-09-21 PC025573558

61UAOF4CX

THOMAS GREG & SONS.



Expediente 41173

Acor: María Edelmira Quintero y otros

verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del concesionario, lo que en principio permitiría la atribución de responsabilidad dado el caso de acreditarse la inobservancia de esa labor y como consecuencia la concreción de algún riesgo para el administrado. Sin embargo, se insiste en que el tramo en que ocurrió el desafortunado accidente no hizo parte de esa concesión, circunstancia que excluye la responsabilidad del Inco frente a la muerte del familiar de los demandantes.

10.10. Adicionalmente, la Sala advierte que para la fecha en que perdió la vida el señor Segura Quintero, el Instituto Nacional de Vías suscribió al menos tres convenios de obra –ver párrafo 8.3–, cuyo objeto contractual correspondió al mantenimiento del sector Cali-Lobo guerrero, ruta 1901, en su condición de administrador de las vías del orden nacional no concesionadas, situación que permite colegir que el Instituto Nacional de Concesiones –Inco–, (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) no le asistía ningún tipo de competencia en lo que a vigilancia y supervisión de esos contratos se refiere. Ante esta situación fáctica para la Sala resulta ajustado declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de orden material del establecimiento público demandado –Inco–, tal como lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

10.11. Por el contrario, el INVÍAS se encuentra legitimado en la causa por pasiva, puesto, se puede establecer que la vía que de Cali conduce a Buenaventura integra la red vial nacional, por lo que según los artículos 12¹² y 19¹³ de la Ley 105, 6¹⁴ y 115¹⁵ de la Ley 769 de 2002, y 1¹⁶ del

¹² "Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por://1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios://a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.//b. Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.//c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.//d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los anteriores criterios,



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



Decreto 2056 de 2003, entre otros, el establecimiento público en comento era el responsable de su mantenimiento, señalización y adopción de medidas de seguridad, de modo que es evidente que la actividad a su cargo sí tiene una clara conexión material con los supuestos del libelo introductorio y, en ese orden de ideas, se viabiliza el análisis de su responsabilidad patrimonial.

10.12. Como corolario de lo anterior, se advierte que (i) tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Transporte, el departamento del Valle del Cauca y el Instituto Nacional de Concesiones -Inco-, determinación que será confirmada en esta instancia y por ende, se denegarán las pretensiones elevadas en su contra y, por el contrario (ii) el Invias se encuentra debidamente legitimado como demandado en el proceso, de tal forma que el juicio de responsabilidad patrimonial se verificará únicamente respecto de dicho ente.

11. De manera previa a iniciar el estudio de la responsabilidad patrimonial del Invias, conviene recordar que en varios puntos del recurso de apelación, la actora aseveró que la sentencia de primera instancia debía ser revocada, en consideración a que en contravía del ordenamiento

de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal.//e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales".

¹³ "Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley".

¹⁴ "Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: (...) Parágrafo 1. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código".

¹⁵ "El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio nacional.//Parágrafo 1°. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción".

¹⁶ "El Instituto Nacional de Vías, Invias, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte".



PC025573557



09-09-21 PC025573557

N97H1LK5Q

THOMAS GREG & SONS



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

jurídico, en especial de la Constitución Política, (i) se desatendió su clamor para obtener la indemnización por la muerte de un ser querido, a quien se le endilgó culpa exclusiva como causa de ese menoscabo, (ii) se desconoció la actitud negligente de las entidades en el cumplimiento de sus labores de mantenimiento y preservación de la vía y (iii) se pasó por alto la ausencia total de señalización, ora de la realización de obras ora del peligro presentado por la caída de las rocas debido a lo inestable del terreno, además de la falta de medidas de seguridad para impedir el acceso al sitio del accidente.

11.1. En relación con los anteriores argumentos, la Sala se permite poner de presente que de conformidad con el artículo 90¹⁷ de la Constitución Política, norma que radica en el fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad patrimonial contractual y extracontractual del Estado¹⁸, para que surja la responsabilidad del aparato estatal se requiere que confluyan sus dos elementos constitutivos a saber, (i) un daño antijurídico, el cual consiste en un menoscabo cuyo padecimiento no sea impuesto por

¹⁷ "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

¹⁸ "Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."//Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual". Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.



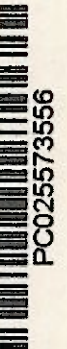
Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

el ordenamiento jurídico¹⁹, y (ii) su imputabilidad a un ente estatal.

11.2. De esta manera, se advierte que se encuentra debidamente probado el daño objeto de la demanda, consistente en la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero el 16 de octubre de 2003, alrededor de las 5:30 a.m., a raíz del impacto que sufrió en su cabeza por la caída de una roca que se desprendió de la montaña ubicada en un costado de la vía por donde transitaba, en el momento en que la víctima, junto con otros conductores, retiraban las rocas que obstaculizaban el paso -ver párrafo 8.1. y 8.2-.

11.3. En cuanto a la imputabilidad se encuentra acreditado que el lugar en donde tuvo origen el accidente, esto es, entre los kilómetros 52 y 53 de la vía que desde Cali conduce a Buenaventura, correspondía a una vía del orden nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, establecimiento que, en virtud de las funciones de mantenimiento y preservación que le asistían, contrató por lo menos tres obras, convenios sobre los que si bien no se tiene certeza de su ejecución ante la carencia de material probatorio en

¹⁹ "El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que "[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico 'el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo' (nota n.º 7 de la providencia en cita: '[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.)' (nota n.º 8 de la providencia en cita: 'Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.'). Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que 'no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella' (nota n.º 9 de la providencia en cita: 'Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amortegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.')., en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, si éste tenía que ser soportado o no por quien lo sufre (nota n.º 10 de la providencia en cita: 'Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.').". Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2013, exp. 41001-23-31-000-1997-09301-01(27611), C.P. Danilo Rojas Betancourth.





042

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

ese sentido, dan cuenta que esa infraestructura vial estaba a su cargo y, por ende, la obligación en materia de vigilancia y control le asistía.

11.4. Adicionalmente, se encuentra probado que para el día de la ocurrencia del trágico accidente no se visualizaba ningún tipo de señal de advertencia o bien del peligro originado en la caída del material rocoso o por el desarrollo de algún tipo de intervención vial que obligase a los transeúntes a tomar las medidas de prevención necesarias. Tampoco se allegó prueba alguna que acredite que la entidad demandada hubiese tomado medidas para impedir el tránsito o acceso al sitio, en el que recurrentemente caían piedras, inobservadas por el señor Segura Quintero, esto es que el mismo hubiese accedido al sitio saltándose las medidas adoptadas para impedir el acceso.

11.5. En relación con los accidentes de tránsito causados por la omisión del deber legal de mantenimiento y señalización de la vía por la ocurrencia de siniestros que la obstaculicen, la Sala ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado²⁰, cuando se verifique que la entidad responsable conocía del siniestro y no obró de manera consecuente con su obligación, retirando el obstáculo respectivo, instalando la señalización adecuada para que las personas que transitan la vía conozcan

²⁰ "(...) el daño originado como consecuencia de un deslizamiento de tierra es imputable al Estado en los eventos en los cuales el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, o cuando se produce un deslizamiento intempestivo de tierra el cual exigía la instalación de señales preventivas, o cuando no se realiza la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o cuando existe omisión por parte de la administración en la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas. También ha determinado la Sala que para que se pueda establecer la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omisión por parte de la administración en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control respecto de la realización de obras públicas y del tránsito en las vías, con el fin de prevenir los riesgos que con ellos se generen. (...) Por lo tanto, es obligación del Estado cumplir con las disposiciones contenidas en las normas que regulan las condiciones y requisitos que deben reunir las señales preventivas en vías públicas con el fin de evitar daños a los transeúntes o conductores que transitan por las mismas". Sentencia del 20 de septiembre de 2007, exp. 73001-23-31-000-1997-05020-01(15740), actor: Yimed Ramírez Gallego y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver también sentencia de 13 de febrero de 2003, expediente 12.509; sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 11.615; sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente 14.536 sentencia de 8 de noviembre de 2001, expediente 12.820 del Consejo de Estado, Sección Tercera.



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

del peligro e imponiendo medidas para evitar el acceso al sitio que amenaza peligro. Al respecto, indicó:

En casos similares como el que ocupa la atención de la Sala, se ha considerado que puede existir falla en la prestación del servicio, si se hubiera avisado sobre la caída del árbol o si la entidad responsable, enterada de la presencia del obstáculo, no hubiera tomado las medidas necesarias para removerlo o para prevenir el peligro que éste implicaba. Al respecto, la Sala ha determinado la responsabilidad en el deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas²¹ y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía^{22, 23}.

11.6. Es así como en el presente caso, al analizar el material probatorio, se encuentra acreditada la existencia de la omisión por parte del Instituto Nacional de Vías –Invias-, en consideración a que incumplió el contenido obligacional a su cargo contemplado en la ley.

11.7. Para la fecha del accidente de tránsito, esto es, el 16 de octubre de 2003, la señalización, conservación y mantenimiento de la vía se encontraba exclusivamente a cargo del Instituto Nacional de Vías –Invias- por tratarse de una vía del orden nacional, pues tanto su origen como destino se encontraban ubicadas en diferentes departamentos, tal como se expresó en párrafos anteriores. Las anteriores obligaciones se derivan de lo dispuesto por la Ley 105 de 1993²⁴ y el Decreto Ley 1344 de 1970²⁵, mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, normas que se encontraban vigentes para la época de los hechos y por consiguiente, plenamente aplicables al caso.

²¹[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de seis de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actores: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

²² [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de marzo de 2000, expediente 11877, actores: Socorro Parra de Martínez y otros.

²³ Sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 54001-23-31-000-1993-07769-01(18375), actor: María Melba Ortiz Hernández y otros, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

²⁴ Ley mediante la cual se establecieron disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamentó la planeación en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones. Fue publicada en el Diario Oficial 41.158 del 30 de diciembre de 1993.

²⁵ Fue publicado en el Diario Oficial No. 33.139 del 4 de agosto de 1970.



PC025573555



09-09-21 PC025573555

SATY2FEO8Q

THOMAS GREG & SONS



Expediente 41173
Acor. María Edelmira Quintero y otros

11.8. Respecto del deber de mantenimiento de las vías, de conformidad con lo señalado por los artículos 11²⁶, 12²⁷ y 19²⁸ de la Ley 105 de 1993, el transporte nacional comprende, entre otras, las vías que cumplen una integración básica de las zonas de producción del país como en el caso

²⁶ Artículo 11 de la Ley 105 de 1993: "Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (...)

El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes Departamentos dentro del perímetro Nacional"

²⁷ Artículo 12º.- Definición e integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por:

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.

b. Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.

c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.

d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal.

e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales.

Con el propósito de que se promueva la transferencia de las vías que están hoy a cargo de la Nación hacia los Departamentos, el Ministerio de Transporte adoptará los mecanismos necesarios para que la administración, conservación y rehabilitación de esas vías, se pueda adelantar por contrato.

Las carreteras nacionales podrán convertirse en departamentales a petición del Departamento respectivo, si este demuestra la capacidad para su rehabilitación y conservación.

2. Los ríos, canales de aguas navegables, su señalización y aquellos puertos públicos fluviales de interés Nacional.

3. Los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación, y sus canales de acceso.

4. Las líneas férreas de propiedad de la Nación que incluye su zona, señalización e infraestructura para el control del tránsito.

5. La red de ayudas, comunicaciones y meteorología del transporte aéreo, básicos para prestar los servicios de aeronavegación y la infraestructura aeroportuaria.

6. Los faros, boyas y otros elementos de señalización para el transporte marítimo.

7. Los puentes construidos sobre los accesos viales en zonas de frontera.

8. Los viaductos, túneles, puentes y accesos en general a las capitales de departamentos, distritos y municipios

²⁸ Artículo 19 de la Ley 105 de 1993: "Constitución y Conservación. Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley."



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros



que nos ocupa, cuya construcción y conservación le corresponde a la entidad del orden nacional creada para tal fin, en este caso el Instituto Nacional de Vías --Invias--.

11.9. Por otra parte, en relación con el deber de señalización de las vías, el artículo 112²⁹ del Decreto Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre la cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertar a los usuarios sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza. La referida señalización en vías nacionales es responsabilidad del Ministerio de obras o en su defecto quien tenga en administración la infraestructura vial.

11.10. En este orden de ideas, las funciones de mantenimiento y conservación le corresponden al Instituto Nacional de Vías cuando se trate de infraestructuras viales nacionales de su propiedad no concesionadas. De igual forma, su señalización le corresponde al mismo establecimiento público.

11.11. Por lo anterior, para la Sala resulta claro que la muerte del señor Segura Quintero como consecuencia del Impacto de una roca desprendida le es imputable al Instituto Nacional de Vías, en el entendido que fue a causa de la ausencia de mantenimiento e intervención de la montaña ubicada a un costado de la carretera que este material rocoso se deslizaba ante la mirada impávida de todos los usuarios de la vía, sin que la entidad mediante obras propias, ni a través de sus contratistas, conjurara el riesgo

²⁹ Artículo 112 del Decreto Ley 1344 de 1970: "Las señales de tránsito se dividen en:

1. Señales de reglamentación o reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.
2. Señales de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.
3. Señales de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar y se dividen en:
 - a) Señales para indicar dirección y para identificar carreteras;
 - b) Señales de localización;
 - c) Señales de información general."



PC025573554



09-09-21 PC025573554

VT3YUHW5A

THOMAS GREG & SONS





644

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

presentado o al menos advirtiera de tal situación.

11.12. Si bien se acreditó que el Instituto Nacional de Vías contrató al menos 3 obras de mantenimiento y conservación para ese tramo de la carretera, labor que le era exigible conforme a su marco obligacional, no se logró establecer que las mismas tuvieran incidencia en la corrección de los constantes desplomes de piedras ocurridos en aquel sector, los cuales eran ampliamente conocidos por las autoridades locales y nacionales.

11.13. Prueba de ese conocimiento lo constituye no solo las declaraciones de los testigos presenciales de los trágicos hechos —ver párrafo 8.2.— usuarios permanentes de la vía, dada su labor como conductores de vehículos de carga, quienes fueron contestes en afirmar que los deslizamientos de rocas era constantes en el sector, sino además la publicación en un diario de amplia circulación departamental que informó, pocos meses posteriores a los sucesos, que a la altura del kilómetro 55 de la carretera que de Cali conduce a Buenaventura se había presentado un nuevo deslizamiento de rocas, otro más que se sumaba a los 25 ocurridos en los meses anteriores, situación que motivó a que el gobernador solicitara al gobierno nacional la entrega de los recaudados por peajes a fin de realizar una intervención por parte suya.

11.14. Este material probatorio demuestra contundentemente que el riesgo presentado en esta zona debido al constante desprendimiento de rocas de la montaña situada en un costado, era ampliamente conocido por las entidades públicas sin que se efectuara una intervención oportuna y acorde con la necesidad presentada, pues si bien, el Invias contrató obras de mantenimiento estas no fueron las requeridas para este tipo de peligro o amenaza.

11.15. De igual forma, la Sala reprocha la ausencia total de señalización que advirtiera a los usuarios de la vía del peligro inminente al que estaban expuestos, o un aviso que restringiera el paso por ese sector.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



12. En lo que tiene que ver con la decisión adoptada por el tribunal de declarar el hecho de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad, la Sala considera que no se dan los supuestos para su configuración, por las razones que pasan a explicarse:

12.1. El juez de la responsabilidad del Estado debe analizar, de oficio o a petición de parte³⁰, la existencia de las causales de eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables en los regímenes subjetivos y objetivos de responsabilidad, entre ellas, el hecho de la víctima, a partir de lo cual puede concluir, por ejemplo, que esta última se expuso a la causación de su propio daño. Ello en tanto que³¹:

...mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada – además de la antijuridicidad del mismo, claro está, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la

³⁰ Se recuerda que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el juez de lo contencioso administrativo debe pronunciarse "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada".

³¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, exp: 23354, actor: Luis Carlos Orozco Osorio, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.





Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora.

12.2. Tradicionalmente se ha considerado que, para que se configure alguna de las causales de exoneración —fuerza mayor, hecho de la víctima y hecho exclusivo y determinante de un tercero—, se requiere la concurrencia de tres elementos: i) su irresistibilidad; ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto de la demandada³².

12.3. En este mismo sentido es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad. En efecto, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido. Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar que si el hecho de la persona afectada con el daño alegado, fue la causa de la concreción del mismo.

12.4. En el caso concreto la Sala considera que no es cierto que el actuar del señor Segura Quintero determinara la causación de su propio daño, pues si bien la roca que impactó sobre su cabeza lo hizo en el momento en que este se encontraba sobre la vía, una vez descendió de su vehículo sin ningún tipo de protección, lo cierto es que la inestabilidad del terreno era conocida por la entidad demandada que tenía a su cargo los deberes de mantenimiento y señalización de la vía, así como la adopción de medidas para impedir el acceso al sitio del derrumbe, cuyo cumplimiento no se acreditó en el proceso.

³² Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de Marzo de 2011, exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros



12.5. En ese orden, para la Sala la atribución del daño hecha a la propia víctima resulta desproporcionada, en el entendido que fue ella misma quien para cumplir una función que le era propia a la entidad demandada, intentó retirar los obstáculos, junto con otros usuarios, quienes debido a los constantes derrumbes y ante la ausencia total de las autoridades, debían abrirse paso y así poder culminar con su trayecto, aun esto les representara un riesgo que pusiera en peligro hasta su propia vida, que para el caso del señor Segura Quintero lamentablemente se concretó, mismo que la entidad demandada pasó por alto, sin adoptar medida alguna que impidiera su concreción.

13. En consecuencia, acreditado el daño antijurídico, la omisión y el nexo causal entre aquel y ésta, resulta evidente la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Instituto Nacional de Vías -Invias-, razón por la cual se revocará la sentencia apelada para declarar su responsabilidad por los perjuicios derivados de la muerte del señor Carlos Andrés Segura Quintero.

V. Liquidación de perjuicios

14. En relación con los perjuicios morales, en la demanda se solicitó el reconocimiento de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre, padre de crianza, abuela y hermanos de la víctima.

14.1. La indemnización del perjuicio moral no se trata de restitución ni de reparación, se hace a título de compensación en cuanto "... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia..."³³; (ii) la tasación del perjuicio, por razón de su naturaleza inmaterial, se establece con fundamento en el criterio de la equidad; (iii) la determinación del monto deberá sustentarse en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar

³³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alir Eduardo Hernández Enríquez, radicación n.º 13232.



PC025573552



09-09-21 PC025573552

686JOPAWTO

THOMAS GREG & SONS



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad³⁴.

14.2. En el expediente se encuentra probado que la señora Luz Nancy Segura Quintero era la madre del señor Carlos Andrés Segura Quintero, al paso que Humberto Salazar era su padre de crianza, a quienes se les reconocerá una indemnización de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con el lineamiento jurisprudencial fijado por esta Corporación³⁵, de acuerdo con el cual el reconocimiento de perjuicios de orden moral para aquellas personas que compartían con la víctima una relación afectiva propia de las relaciones paterno-filiales y conyugales corresponde a 100 s.m.l.m.v. En igual sentido se ha fijado como parámetro indemnizatorio a favor de los hermanos del occiso y la abuela la suma de 50 salario mínimos legales mensuales vigentes, filiación que para este caso compartían con el señor Segura Quintero la señora Edelmira Quintero Quintero (abuela) y José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura quienes eran sus hermanos –ver párrafo 8.5.-

14.3. Ahora bien, frente a la solicitud del reconocimiento de lucro cesante a favor de todos los integrantes de la familia de la joven víctima, la Sala empieza por señalar que de cumplirse con todos los presupuestos que recientemente estableció por vía de jurisprudencia esta Corporación para la procedencia de esta tipología de perjuicios, estos solo serían reconocidos a favor de sus padres frente a quienes de conformidad con la consagración legal y jurisprudencial el fallecido le asistiría una obligación alimentaria.

³⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.º 16205.

³⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 26 251, actor: Ana Rita Alarcón vda. de Gutiérrez y otros. C.P. Jaime Orlando Santofimio.



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

14.4. En un reciente pronunciamiento la Sección Tercera del Consejo de Estado,³⁶ en sede de unificación jurisprudencial, al analizar la procedencia del reconocimiento del lucro cesante solicitado en favor de los padres de un hijo menor de 25 años y ante necesidad de superar la contradicción presentada por su opuesta presunción de acuerdo con la cual, los padres contribuyen con la manutención de los hijos hasta la misma edad, la Corporación fijó criterios que permiten dilucidar bajo qué supuestos la indemnización por concepto de lucro cesante debe ser otorgada en favor de los progenitores que concurren con esta pretensión. Al respecto la Sección Tercera puntualizó:

62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres.

63. Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento – la capacidad del deudor de la obligación alimentaria – el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían, pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar³⁷.

³⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, exp: 46005, actor: Darío de Jesús Santamaría y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

³⁷ Conforme al criterio empleado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en varias providencias: sentencias de 8 de junio de 2017, exp. 50352; de 11 de junio de 2015, exp. 33355; de 13 de noviembre de 2014, exp. 30753; y de 5 de abril de 2013, exp. 27281, todas con ponencia del suscrito magistrado ponente.





647

Expediente 41173
Sector: María Edelmira Quintero y otros

14.5. Bajo estos supuestos la Sala encuentra que el primer supuesto de procedencia se encuentra acreditado, comoquiera que el joven Carlos Andrés Segura Quintero³⁸, al momento de su fallecimiento, se dedicaba a la conducción de un vehículo de carga, incluso fue en desempeño de esa labor productiva que sufrió el accidente que ocasionó su muerte.

14.6. Ahora bien, frente al segundo requerimiento concernido con la necesidad alimentaria de los padres, la Sala considera que no se logró acreditar tal condición, pues si bien los testimonios reiteraron en su gran mayoría que Carlos Andrés Segura Quintero aportaba al mantenimiento de su hogar, pero no que los padres no pudiesen satisfacer sus necesidades propias, pues lo realmente probado es que el señor Humberto Segura, su padre de crianza se dedicaba también a la conducción de tracto camiones.

14.7. Por los anteriores argumentos la Sala negará el reconocimiento de este perjuicio.

VI. Responsabilidad del llamado en garantía

15. Debe ahora pronunciarse la Sala sobre la responsabilidad del llamado en garantía, para lo cual verifica que el 8 de octubre de 2003 Compañía Central de Seguros Colpatria S.A. expidió la póliza n.º 120100000169, de la que es tomador, asegurado y beneficiario el Instituto Nacional de Vías y por virtud de la cual se amparó la responsabilidad extracontractual de la entidad entre el 1 de octubre de 2003 y el 1 de enero de 2005 (f. 308, c. 1).

15.1. De acuerdo con la póliza, lo asegurado corresponde a:

Interés asegurable: Indemnizar al asegurado inicial respecto de sus responsabilidades legales provenientes de lesiones personales o muerte causadas a terceros y/o daños materiales a bienes de terceros en conexión con las operaciones del asegurado que involucren la planeación, administración, construcción y mantenimiento de las vías y

³⁸ Al momento de su fallecimiento Carlos Andrés Quintero tenía 20 años de edad, tal como lo certifica el registro civil de nacimiento que da cuenta que nació el 25 de octubre de 1983, f. 3, c. 1.



Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

autopistas, tal como se encuentra descrito y especificado en la póliza original.

Descripción y cuadro de amparos (...) Responsabilidad civil extracontractual derivada de lesiones personales o muerte a personas ocupantes de vehículos que transiten por las carreteras en el territorio nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, como consecuencia en fallas en la prestación del servicio.

15.2. Se pactó como límite a valor asegurado la suma de \$7 500 000 000 cualquier ocurrencia y en el agregado anual.

15.3. En atención a lo pactado entre el INVÍAS y la llamada en garantía, la Sala encuentra que esta última amparó el riesgo de los posibles perjuicios patrimoniales que pueda causar la entidad pública a terceros, aún a través de sus contratistas o subcontratistas, en ejercicio de las actividades propias del asegurado, supuesto que se enmarca dentro de los hechos que dieron lugar a la responsabilidad del instituto en el presente caso y que ocurrieron dentro del período amparado. Por ende, la Compañía Central de Seguros S.A., en virtud de la relación contractual con la entidad condenada en el presente caso, está obligada a repetir en favor de la asegurada el valor pagado por la condena judicial impuesta en el presente fallo, hasta el límite del valor asegurado en la mencionada póliza. Lo anterior deberá tener lugar dentro del mes siguiente a la formalización del reclamo por parte de la entidad pública ante la compañía, de acuerdo con lo estipulado en las condiciones generales de la póliza (f. 353-357, c. 1), siendo entendido que este solo podrá tener lugar una vez la entidad pague efectivamente el valor de la condena impuesta, con lo que se materializa el daño patrimonial que la llamada está obligada a resarcirle. Así se declarará en la parte resolutive de esta decisión.

15.4. Frente a la excepción de prescripción derivada del contrato de seguro propuesta por la compañía aseguradora, la Sala encuentra que no está llamada a prosperar, pues la estipulación legal contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio que fundamenta la excepción, de conformidad con la cual el interesado en obtener el pago del seguro cuenta con dos años contados desde el momento que tuvo o debió tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro no culminaron, pues el



PC025573550



09-09-21 PC025573550

XJUEF4VKZM

THOMAS GREG & SONS.



668

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

conocimiento del hecho dañoso por parte de la entidad ocurrió el 30 de abril de 2005, momento en el cual fue notificada por aviso del contenido de la demanda y con ella de la muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, información que le permitió, junto con la contestación de la demandada, llamar en garantía a la entidad aseguradora el 7 de abril de 2006, llamamiento que fue admitido mediante auto del 12 de septiembre del mismo año.

15.5. Así las cosas, la entidad pública llamante hizo uso de las acciones derivadas del contrato de seguro en tiempo, teniendo en cuenta que una vez conoció la existencia del hecho dañoso, el 30 de abril de 2005, llamó en garantía a su aseguradora dentro del término de los dos años.

VI. Costas

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de septiembre de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: SE DECLARA PROBADA la excepción de "Falta de legitimación en la causa por pasiva" en favor de la Nación-Ministerio de



Expediente 41173
Actor: María Edelmira Quintero y otros

Transporte, del departamento del Valle del Cauca y del Instituto Nacional de Concesiones –Inco, hoy Agencia Nacional de Infraestructura.

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías –Invias- responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte de la joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **SE CONDENA** al Instituto Nacional de Vías –Invias- a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

- A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
- A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

CUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO. SE CONDENA a la Compañía Central de Seguros S.A. a pagar al Instituto Nacional de Vías el valor que esta pague efectivamente con ocasión de la presente condena, hasta el límite del valor asegurado, considerando el límite del valor determinado en la póliza de seguros No. 120100000169 expedida por la referida compañía.



PC025573549



09-09-21 PC025573549



649

Expediente 41173

Actor: María Edelmira Quintero y otros

OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO
Presidenta de la Sala

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Consejero



650

CONSEJERO(A) PONENTE
DANILO ROJAS BETANCOURTH

EDICTO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, NOTIFICA A LAS PARTES LA SENTENCIA PROFERIDA EN EL SIGUIENTE PROCESO:

EXPEDIENTE: 760012331000200405560.01 (41173)
DEMANDANTE: MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO
Y OTROS
DEMANDADO: NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE -
INVIAS Y OTROS
NATURALEZA: ACCION DE REPARACION DIRECTA
FECHA DE LA SENTENCIA: TREINTA (30) de AGOSTO de DOS MIL
DIECIOCHO (2018)



EL PRESENTE EDICTO SE FIJA EN LUGAR PÚBLICO DE ESTA SECRETARÍA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS, COMPRENDIDOS ENTRE LAS 8:00 A.M. DEL 04/10/2018 Y LAS 5:00 P.M. DEL 08/10/2018, HORA EN QUE SE DESFIJA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 331 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EL TÉRMINO DE EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE ANTECEDE CORRE ENTRE LOS DÍAS 9 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018


MARÍA ISABEL FEULET GUERRERO
Secretaria

ACC

Calle 12 No. 7- 65 Piso 2
Palacio de Justicia - Bogotá D.C.
Teléfono: 350 67 00 Ext. 2235 - 2234 - 2223 Fax: 350 94 37



PC025573548

09-09-21 PC025573548

S16BDEKR8F

THOMAS GREG & SONS



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA SEGUNDA

**AUTENTICACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL;
hoy, NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 114 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.**

AUTENTICACION.- Las fotocopias que anteceden constantes de 49 folios escritos, que corresponden a la Sentencia del 14 de septiembre de 2010 dictada por este Tribunal, y a la providencia del 30 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección “B”, son fieles copias tomadas de los originales que reposan dentro del Medio de Control de REPARACION DIRECTA, radicado bajo la partida No. 76001-23-31-000-2004-05560-00, instaurado por MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO y OTROS contra la NACION – MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y OTROS, que se tuvieron a la vista. La providencia del Consejo de Estado fue notificada y quedó ejecutoriada el día 11 de octubre de 2018.- Las presentes copias se expiden auténticas conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, hoy numeral 3º del Artículo 114 del Código General del Proceso, y van dirigidas a la entidad demandada INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

Santiago de Cali, mayo 10 de 2019


LUZ DARY GONZALEZ
Secretaria
fas

notaria 5

EDICTO

LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente edicto en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el trámite notarial de liquidación de herencia de Sucesión Intestada del CAUSANTE JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con la con la Tarjeta de Identidad No. 97040314427, fallecido en la ciudad de Cali (Valle), el día 12 de Septiembre de 2008, siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos domicilios y asiento principal de sus negocios y aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 022 del 26 de Abril de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días.

El presente Edicto se fija hoy 19 de Mayo de 2021, a las 08:00 A.M.

LA NOTARIA,

Ximena Morales Restrepo
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE CALI
XIMENA MORALES RESTREPO
Notaria 5 del Círculo de Cali - Encargada
NIT.29.562.230-4
MLA.



PC025573547



09-09-21 PC025573547

2FXEMT1588

THOMAS GREG & SONS

CERTIFICADO DE PARTICIPACION
ANUAL NACIONAL

CERTIFICAMOS

Que el presente objeto y/o caso de remate
fue realizado por RAINGEDY TOS &
EMPRESAS ASOCIADAS en la ciudad de VALLE
ESTRADA 123 R.M. Para Colombia
la presente y el sistema de VOTOS en
Internet, el horario comprendido entre las 7 ó
la noche y las 12 de la noche en las fechas

27 MAY 2021

JONAS SAAC TOSONE
ADMINISTRADOR

SE FIRMÓ SIN AUTENTICACIÓN
Ley 962 de 2005, artículo 12

CERTIFICACION A.F.E.
Artículo 83 de la Constitución Política
Decreto 2150 de 1995, artículo 1
Ley 110 de 1998, artículo 1
Ley 1712 de 2010, artículo 1

COPIA



notaria 5

ACTA No. 022 del 26 de Abril de 2021

QUE DA INICIO A TRÁMITE DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE SUCESION INTESTADA

CAUSANTE: JUAN DAVID SALAZAR SEGURA Quien en vida se identificó con la tarjeta de identidad No. 97040314427

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los **veintiseis (26)** días del mes de Abril Del año dos mil veintiuno (2.021), al Despacho de la **NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI**, cuya notaria encargada es la Doctora **XIMENA MORALES RESTREPO** se presento el doctor: **GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA** Identificado con la cédula de ciudadanía número: 19.395.114 de Bogota D.C Abogado titulado, con tarjeta profesional número: 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura y manifestó:

Que comparece como Apoderado sustituto de los señores **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO** y **HUMBERTO SALAZAR CABAL** mayor (es) de edad, residente(s) en la ciudad de Cali, identificado(s) con la(s) cédulas de ciudadanía número(s) 31.200.978 expedida en Tulua-Valle y 2.631.290 expedida en San Pedro-Valle respectivamente, en calidad de padres del Causante, **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.)**, quien en vida se identificó con la Tarjeta de Identidad No. 97040314427, fallecido en la ciudad de Cali (Valle), el día 12 de Septiembre de 2008, siendo la ciudad de Cali lugar de sus últimos domicilios y asiento principal de sus negocios.

El apoderado presento solicitud con los siguientes requisitos:

- 1.- Copia autentica del Acta de Registro Civil de Defunción del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.)**
- 2.- Copia auténtica del Acta del Registro Civil de Nacimiento de **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.)**
- 3.- Relación de Inventario y avalúo de los bienes relictos.
- 4.- Trabajo de partición y adjudicación.
- 5.- Los Memoriales poder con el que actúa.
- 6.- Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Tercera -Subseccion B del 30 de Agosto del 2018. Radicacion No 76001233100020040556001(41173)



PC025573546

09-09-21 PC025573546

URLWJOC831


THOMAS GREG & SONS

La suscrita Notaria encontró que la solicitud presentada y la documentación anexa cumplen con los requisitos exigidos en el Decreto 902 de 1.988, reformado por el decreto 1729 de 1.989, en consecuencia ordena:

- 1.- Que se fije por el término de 10 días en un lugar visible de esta Notaria, y se publique en un Periódico de amplia circulación y se difunda por una Emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali el Edicto Emplazatorio correspondiente, para tal efecto se entrega su texto a la apoderada.
- 2.- Acto seguido ordena la suscrita Notaria 5 del Circulo de Cali, las comunicaciones telegráficas a la Superintendencia de Notariado y Registro, Dian y Hacienda en la que se informan sobre la iniciación del trámite para los fines correspondientes.

En constancia se firma la presente Acta a los Dieciseis (16) días del mes de Diciembre del año Dos mil Veinte (2.020).

LA NOTARIA,


Ximena Morales Restrepo
NOTARIA 5 (EY) DEL CIRCULO DE CALI

XIMENA MORALES RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI-ENCARGADA
NIT.29.562.230-4

COPIA



Sebastián

notaría **5**

Santiago de Cali, 19 de Mayo de 2021

Señores

DIAN

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

Su Despacho

Con toda atención me permito informarle que mediante **Acta No. 022 del 26 de Abril de 2021**, de la Notaría 5 del Círculo de Cali, se admitió el trámite de Liquidación de Herencia de Sucesión intestada del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA** Quien en vida se identificó con la Tarjeta de Identidad No. 97040314427.

POR UNA CUANTIA DE: \$ 39.062.100

Adjunto Inventario y Avalúo

Lo anterior para lo de su competencia.

ATENTAMENTE,

Ximena Morales Restrepo
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE CALI

XIMENA MORALES RESTREPO

Notaría 5 del Círculo de Cali-Encargada

NIT.29.562.230-4

m.l.a

cc. Archivo



PC025573545

09-09-21 PC025573545

NQEKLGT089

THOMAS GREG & SONS

RV: Tramite de sucesion intestada del causante JUAN DAVIDN SLAZAR SEGURA

005_gestiondocumental <005_gestiondocumental@dian.gov.co>

Mié 19/05/2021 3:46 PM

Para: Beatriz Stella Rueda Gil <bruedag@dian.gov.co>

CC: Quinta Cali <quintacali@supernotariado.gov.co>

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, comedidamente se remite radicado con la siguiente información:

RADICADO: 05E202112874

NOTARIA 5

LIQUIDACION HERENCIA CAUSANTE JUAN DAVID SALAZAR SEGURA TI: 97040314427

Atentamente,

Buzón gestión documental
Seccional impuestos de Cali
GSC

De: Quinta Cali <quintacali@supernotariado.gov.co>

Enviado: miércoles, 19 de mayo de 2021 11:53 a. m.


Para: 005_gestiondocumental <005_gestiondocumental@dian.gov.co>

Asunto: Tramite de sucesion intestada del causante JUAN DAVIDN SLAZAR SEGURA

CORDIAL SALUDO: POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO SOLICITAMOS, SU ESPECIAL AYUDA, PARA QUE SEA EXPEDIDO CERTIFICADO DE NO DEUDA DE LA CAUSANTE, JUAN DAVID SALAZAR SEGURO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE NOTARIAL.

ATENTAMENTE,

GERARDO COLONIA MIRANDA
AUX. ADMIN.

 Supernotariado

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a Oficina de Atención al Ciudadano oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórralo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente



notaría **5**

Santiago de Cali, 19 de Mayo de 2021

Señores:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION TESORERIA DE RENTAS

Plataforma 1 CAM, Atención al contribuyente, piso 1
Cali

Con toda atención me permito informarle que mediante Acta No. 022 del 26 de Abril de 2021 de la Notaria 5 del Círculo de Cali, se admitió el trámite de Liquidación de Herencia de Sucesión intestada del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA** Quien en vida se identificó con la Tarjeta de Identidad No. 97040314427.

POR UNA CUANTIA DE: \$ 39.062.100

Adjunto Inventario y Avalúo

Lo anterior para lo de su competencia.

ATENTAMENTE,

Ximena Morales Restrepo
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE CALI

XIMENA MORALES RESTREPO

Notaria 5 del Círculo de Cali-Encargada

NIT.29.562.230-4

m.l.a

cc. Archivo



PC025573544



09-09-21 PC025573544

L3RF7HXT5Y

THOMAS GREG & SONS

RV: Tramite de sucesion intestada del causante JUAN DAVIDN SLAZAR SEGURA

005_gestiondocumental <005_gestiondocumental@dian.gov.co>

Mié 19/05/2021 3:46 PM

Para: Beatriz Stella Rueda Gil <bruedag@dian.gov.co>

CC: Quinta Cali <quintacali@supernotariado.gov.co>

1 archivos adjuntos (58 KB)

DIAN_JUAN DAVID SALAZAR.pdf;

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, comedidamente se remite radicado con la siguiente información:

RADICADO: 05E202112874

NOTARIA 5

LIQUIDACION HERENCIA CAUSANTE JUAN DAVID SALAZAR SEGURA TI: 97040314427

Atentamente,

Buzón gestión documental
Seccional impuestos de Cali
GSC

De: Quinta Cali <quintacali@supernotariado.gov.co>

Enviado: miércoles, 19 de mayo de 2021 11:53 a. m.

Para: 005_gestiondocumental <005_gestiondocumental@dian.gov.co>

Asunto: Tramite de sucesion intestada del causante JUAN DAVIDN SLAZAR SEGURA

CORDIAL SALUDO: POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO SOLICITAMOS, SU ESPECIAL AYUDA, PARA QUE SEA EXPEDIDO CERTIFICADO DE NO DEUDA DE LA CAUSANTE, JUAN DAVID SALAZAR SEGURO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE NOTARIAL.

ATENTAMENTE,

GERARDO COLONIA MIRANDA
AUX. ADMIN.

Supernotariado

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a Oficina de Atención al Ciudadano oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar,



notaria **5**

EDICTO
LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente edicto en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el trámite notarial de liquidación de herencia de Sucesión Intestada de la CAUSANTE de la CAUSANTE JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.), Quien en vida se identificó con la Tarjeta de Identidad No. 97040314427 y quien falleció el día 12 de Septiembre de 2008 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos domicilios y asiento principal de sus negocios y aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 022 del 26 de Abril de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días.

El presente Edicto se fija hoy 19 de Mayo de 2020, a las 08:00 A.M.

LA NOTARIA,

Ximena Morales Restrepo
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE CALI
XIMENA MORALES RESTREPO
Notaria 5 del Círculo de Cali-Encargada
NIT.29.562.230-4



CONSTANCIA DE DESFIJACION DE EDICTO:

La suscrita Notaria Quinta del Círculo de Cali, hace constar que el presente edicto permaneció fijado en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días, sin que dentro de éstos se hubiere presentado persona diferente de los solicitantes en dicha liquidación.

Desfijado hoy, treinta y uno (31) de Mayo de dos mil Veintiuno(2021) a las 6:30 P.M.

LA NOTARIA,

Ximena Morales Restrepo
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE CALI
XIMENA MORALES RESTREPO
Notaria 5 del Círculo de Cali-Encargada
NIT.29.562.230-4
m.l.a



PC025573543

08-09-21 PC025573543

8044MZ15VK0

THOMAS GREG & SONS.

105244443 1109 1225

Santiago de Cali, Junio 8 de 2021

Doctor (a)
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
Notaria quinta del círculo de cali
calle 29N 6AN 35
Santiago de Cali, Valle del Cauca

CERTIFICADO DE NO DEUDA

Asunto: Proceso de Sucesión Acta N° 22 de fecha: 4/26/2021
CAUSANTE : JUAN DAVID SALAZAR MEJIA
NIT: 97040314427
Reparto de Mayo 18 al 21 de 2021

En atención a su oficio radicado en el control de correspondencia de esta División en Mayo 19 de 2021 bajo el N° 05E202112874, permitame comunicarle que de conformidad con el Artículo 844 del Estatuto Tributario, los interesados en el proceso de sucesión citado, cancelaron las deudas de plazo vencido y/o cumplieron con las obligaciones formales exigidas por la Ley, por lo cual este Despacho autoriza la continuación del correspondiente trámite.

Se advierte a los herederos o legatarios que si surgen posteriormente obligaciones a cargo del causante, ellos responden solidariamente por las mismas, Artículo 793, literal a) del Estatuto Tributario. Se realizaron todos los cruces de información en concordancia con el Art. 7 de la Resolución 000159 de dic. 21-2012, relacionadas con las solicitudes de Información a las Divisiones de Determinación y Cobro (Cobranzas, Jurídica, Liquidación, Fiscalización en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria).

Si es responsable de Renta, Ventas y/o Retención en la Fuente, debe seguir presentando las declaraciones, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe la partición o adjudicación; o hasta la fecha en que se extienda la escritura pública, si se optó por este procedimiento. (Literal a) del Art. 595 del E.T.).

La Solicitud de Cancelación del Rut, debe realizarla ante la División de Gestión de Asistencia al Cliente, los contribuyentes deben solicitar la cita a través del portal de la DIAN <http://www.dian.gov.co> en el link: Asignación de CITAS o al número gratuito nacional 018000129070, con costo 019005558484.

Vigencia del certificado: 06 meses

Cordialmente,

JUAN CAMILO NIETO BOTERO
G.I.T. Representación Externa de Cobranzas
División de Gestión de Cobranzas

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de Impuestos Cali
Calle 11 N° 3-72 piso 13 PBX 898 00 66 Ext. 959570
Código postal 760501
www.dian.gov.co



República de Colombia	notaría 5 de Cali
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO	
ES FIEL	COPIA DE LA
ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3183	
DE FECHA 28 DE Sept DE 2021	
EXPEDIDA EN 44	HOJAS CON DESTINO
A. Luz Mary Sebulla y otros	
29 NOV 2021	
CALI	



PC025574000

09-09-21 PC025574000

GRDFH3MS00

THOMAS GREG & SONS



Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS (INVÍAS)

Dirección: Calle 25G # 73B-90

Complejo Empresarial Central Point- Bogotá D.C.

Correo electrónico: njudiciales@invias.gov.co

E. S. M.

Referencia: Complementación cuenta de cobro, solicitud de cumplimiento y pago de sentencia (Art. 192 Ley 1437 de 2011)

Radicado cuenta de Cobro: 52103 del 02 de julio de 2019.

Demandantes: María Edelmira Quintero Quintero y otros.

Demandados: Instituto Nacional de Vías INVIAS y otros.

Radicación: 76001-23-31-000-2004-05560-00.

Despacho de Origen: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Fernando Augusto García Muñoz

Acción de Reparación Directa

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, cesionaria de los derechos de crédito reconocidos en la sentencia de segunda instancia de calenda 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de reparación directa distinguido con radicado 76001233100020040556001 (41173), como más adelante se expondrá en detalle, de conformidad con lo prescrito en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en armonía con el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015, procedo, en primer lugar, a atender los requerimientos efectuados por el INVIAS mediante oficio OAJ 32497 del 24 de junio de 2021, con asunto: “*Solicitud Documentos*”, y en segundo lugar, a dar alcance y complementar la cuenta de cobro que se radicó ante ustedes el día 02 de julio de 2019, bajo el radicado 52103, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante sentencia de segunda instancia calendada el 30 de agosto de 2018, notificada a través del edicto No. 650 del 04 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, Acción de Reparación Directa, Demandantes: Luz Nancy Segura Quintero, Humberto Salazar Cabal, Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), María Edelmira Quintero Quintero, Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura, Demandados: Nación-Mintransporte, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Departamento del Valle del Cauca, Radicación 76001233100020040556001 (41173), se resolvió lo siguiente:

[...]

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías – Invias- responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte de la joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **SE CONDENA** al Instituto Nacional de Vías – Invias- a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

- **A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.**
- **A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.”** (Negrita adrede).

SEGUNDO: El 02 de julio de 2019, mediante memorial denominado “Cumplimiento y pago de sentencia” presenté ante el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)**, la cuenta de cobro de la indemnización a la que fue condenada a pagar la entidad en favor de Luz Nancy Segura Quintero, Humberto Salazar Cabal, Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), María Edelmira Quintero Quintero, Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura. Se aclara que para ese momento el suscrito desconocía que el menor Juan David Salazar Segura había fallecido, motivo por el cual, dicha cuenta de cobro también se presentó en su nombre.

TERCERO: Mediante oficio OAJ 32497 del 24 de junio de 2021, con asunto: “*Solicitud Documentos*”, suscrito por el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se le informó al suscrito que debía aportar los siguientes documentos, para que la cuenta de cobro presentada el 02 de julio de 2019, cumpliera con los requisitos exigidos por la Ley:

“En atención a su solicitud de pago de sentencia, proferida en el proceso de la referencia, me permito indicar que una vez revisados la documentación que soporta su requerimiento, se requiere que se aporten los siguientes documentos, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015, el cual regula el pago de sentencias y conciliaciones a cargo de las entidades públicas:

- *Solicitud de pago por escrito, dirigida a INVIAS, para que se dé cumplimiento sentencia, laudo arbitral o conciliación, en la que el beneficiario o su apoderado manifieste bajo la gravedad del juramento que no ha presentado solicitud de pago por el mismo concepto, ni ha intentado el cobro ejecutivo (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).*
- *El poder que se hubiere otorgado, el cual debe reunir los requisitos de ley, incluir explícitamente la facultad de recibir el dinero y estar expresamente dirigido al INVIAS (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).*

- Los datos de identificación, teléfono, correo electrónico y dirección de los beneficiarios y sus apoderados (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).
- Certificación bancaria, expedida por la entidad financiera, donde se indique el número y tipo de cuenta del apoderado y la de los beneficiarios mayores de edad que soliciten que el pago se les efectúe directamente. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).
- Copia del documento de identidad de la persona a favor de quien se ordena efectuar la consignación. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias (Decreto 2469, artículo 2.8.6.5.1).
- Copia del Registro Único Tributario -RUT- de los beneficiarios del crédito judicial y cédula de ciudadanía y del apoderado. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias. Decreto 2674 de 2012 y Manual de SIIF, Resolución DIAN 228 de 21 de octubre de 2013).
- Si el beneficiario de la sentencia o conciliación en menor de edad, debe solicitarse a través de su representante, o apoderado por el constituido, para lo cual deberá aportar el registro civil de nacimiento del menor, en donde se constate tal calidad. Si en el transcurso del proceso judicial o del trámite de la solicitud de pago, el beneficiario cumple la mayoría de edad, deberá aportarse la ratificación del poder existente, o nuevo poder.

(...)"

CUARTO: Con posterioridad a la presentación de la cuenta de cobro y a la comunicación del oficio OAJ 32497 del 24 de junio de 2021, el suscrito fue informado del fallecimiento de Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), ocurrido el 12 de septiembre de 2008, quien era uno de los beneficiarios de las indemnizaciones dispuestas en la sentencia aludida, cuyo deceso tuvo lugar cuando apenas contaba con once (11) años de edad. Por tal motivo, dicho derecho de crédito en contra del INVIAS le fue adjudicado a los herederos de aquél, sus dos progenitores, como se acredita con la escritura pública de liquidación de la respectiva sucesión, que se adjunta al presente escrito.

QUINTO: Los herederos de Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), que son Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal, realizaron la liquidación de la sucesión correspondiente mediante trámite que culminó con el otorgamiento de la Escritura Pública No. 3183 del 28 de septiembre de 2021, corrida en la Notaría 5 del Círculo de Cali, en la cual se adjudicó el derecho de crédito referido, consistente en el cien por ciento (100%) de la indemnización a la que fue condenado el INVIAS, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de marras.

SEXTO: Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura, le confirieron poder especial, amplio y suficiente a la señora Luz Nancy Segura Quintero, para que en su nombre y representación celebrara con la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con NIT.

900.701.533-7, representada legalmente por el suscrito, **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, contrato de cesión respecto de los derechos de crédito reconocidos en la sentencia aludida y los que de ella se deriven, incluidos los intereses que se generen y que se llegaren a causar, tal como se desprende del documento poder que se aporta con el presente escrito.

SÉPTIMO: Luz Nancy Segura Quintero, actuando en su propio nombre y en representación de Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura, cedió sus derechos de crédito y los de aquellos reconocidos en la sentencia tantas veces mencionada y los que de ella se deriven, incluidos los intereses que se generen y que se llegaren a causar, a la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.701.533-7, representada legalmente por el suscrito, **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**. Lo anterior se puede constatar del documento con referencia “*Poder, Cesión de Derechos y Notificación*” conferido por cada uno de los citados, en donde se faculta expresamente al suscrito para **NOTIFICAR** la cesión celebrada, el cual se aporta como prueba documental al presente escrito.

Por lo anterior, el derecho a recibir la indemnización contenida en la sentencia descrita en el antecedente primero, más los intereses que se han causado y los que se llegaren a causar, ya no se encuentra en cabeza del grupo que fungió como demandantes (Luz Nancy Segura Quintero, Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera) dentro del proceso de reparación directa descrito en el asunto, sino de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, en razón a un contrato de cesión de derechos de crédito celebrado, del cual los **NOTIFICO** en este acto.

II. DECLARACIÓN JURAMENTADA

De conformidad con lo prescrito en el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015 y el oficio OAJ 32497 del 24 de junio de 2021, con asunto: “*Solicitud Documentos*”, emitido por el INVIAS, el suscrito, en representación de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra cuenta de cobro con identidad de partes y peticiones, diferente y/o adicional a la descrita en la referencia (Radicado 52103 del 02 de julio de 2019). Así mismo manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que la sociedad que represento no ha intentado el cobro por la vía ejecutiva.

III. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO OAJ 32497 DEL 24 DE JUNIO DE 2021.

Como quiera que el derecho a recibir la indemnización contenida en la sentencia comentada se encuentra en cabeza de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, en virtud del contrato de cesión de derechos celebrado con la demandante Luz Nancy Segura Quintero, quién para los efectos del referido contrato actuó como parte cedente, representando sus propios intereses y los de Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero Quintero, José

Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura, se proceden a aportar y complementar los documentos referentes a la mentada sociedad y no los de los citados sujetos, ya que estos en la actualidad no fungen como beneficiarios de la aludida indemnización, como se explicó en el acápite de los antecedentes. Por tal motivo, además de los documentos aportados con la cuenta de cobro inicial (Radicado 52103 del 02 de julio de 2019), acompaño los siguientes, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el oficio OAJ 32497 del 24 de junio de 2021:

1. Escritura Pública No. 3183 del 28 de Septiembre de 2021 expedida por la Notaría 5 del Círculo de Cali, mediante la cual se realizó la adjudicación de la sucesión del causante Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), en seis (6) folios.
2. Original del memorial denominado poder, cesión de derechos y notificación debidamente conferido por los señores Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura; documento en el que se faculta expresamente a la señora Luz Nancy Segura para celebrar contrato de cesión de derechos con la sociedad **G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S** y en el que se faculta al suscrito para **NOTIFICARLE** al **INVIAS**, sobre la cesión de derechos de crédito celebrada con la sociedad **G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S**, en dos (2) folios.
3. Copia del Rut de **G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S**, en cuatro (4) folios.
4. Copia del certificado de existencia y representación legal de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S**, en once (11) folios.
5. Copia de la cédula de ciudadanía del suscrito, en un (1) folio.
6. Certificación expedida por Bancolombia, donde consta la vinculación con esa entidad bancaria y el número de cuenta a nombre de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S**, cuenta en la que deberá consignarse el monto de la condena impuesta más sus respectivos intereses, en un (1) folio.

En total se entregan como pruebas documentales: 25 folios útiles.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y DIRECCIÓN FÍSICA.

La sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S** tiene como datos de notificación, los siguientes:

Teléfono fijo: (602) 659 4075.

Celular: 3155776200.

Correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Dirección física: Avenida 6 A Bis No. 35N-100, oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape, de la ciudad de Cali.

Sin más consideraciones.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá.


T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

RV: COMPLEMENTACIÓN CUENTA DE COBRO, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIA||RADICACIÓN: 52103 DEL 02 DE JULIO DE 2019||DTES: MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS||DDOS INVIAS Y OTRO||GRC

Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>

Jue 27/07/2023 14:32

Para:Luis Felipe Lengua Mendoza <llengua@gha.com.co>

 1 archivos adjuntos (5 MB)

COMPLEMENTACIÓN CUENTA DE COBRO ANTE EL INVIAS-CESIÓN DE DERECHOS EN FAVOR DE G. HERRERA-CON ANEXOS.pdf;

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 14 de junio de 2023 9:03

Para: Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>

Asunto: RV: COMPLEMENTACIÓN CUENTA DE COBRO, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIA||RADICACIÓN: 52103 DEL 02 DE JULIO DE 2019||DTES: MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS||DDOS INVIAS Y OTRO||GRC

PSI

NG

De: Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 14 de junio de 2023 8:52

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: RV: COMPLEMENTACIÓN CUENTA DE COBRO, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIA||RADICACIÓN: 52103 DEL 02 DE JULIO DE 2019||DTES: MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS||DDOS INVIAS Y OTRO||GRC

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su comunicación fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamento Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con el número **58010** del **14/06/2023** y remitida a la dependencia correspondiente.

Para nosotros es importante conocer su opinión frente a las respuestas emitidas, agradecemos su colaboración diligenciando la breve encuesta en el siguiente enlace:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBkX6ykpLE-nWbXMKscq-OJOVcT8nmFHtqkjj1oZ7YVUNFdSQzMxS0NBSUVPU1JYT1JPVkhEOVRHVSQIQCN0PWcu>

De igual manera le solicitamos su amable colaboración para diligenciar la encuesta percepción y satisfacción que se encuentra en el siguiente enlace:

<https://forms.office.com/r/1zSky31RAAd>

Caracterización de Usuarios 2023



En el siguiente QR podrá ingresar a la encuesta

Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley estatutaria 1581 del 2012

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo de Atención y Relacionamento Ciudadano

atencionciudadano@invias.gov.co

3770600 Ext: 1155 -1158

Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo Empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 7:33 a. m.

Para: 6 <atencion6@invias.gov.co>

Asunto: RV: COMPLEMENTACIÓN CUENTA DE COBRO, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIA | RADICACIÓN: 52103 DEL 02 DE JULIO DE 2019 | DTES: MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS | DDOS INVIAS Y OTRO | GRC

De: Notificaciones Judiciales Invias <njudiciales@invias.gov.co>

Enviado: Wednesday, June 14, 2023 12:22:41 AM

Para: Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

Cc: Jenniffer Patricia Segura Segura <jpssegura@invias.gov.co>; Olga Lucia Caceres Coronado <ocaceres@invias.gov.co>

Asunto: RV: COMPLEMENTACIÓN CUENTA DE COBRO, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIA | RADICACIÓN: 52103 DEL 02 DE JULIO DE 2019 | DTES: MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS | DDOS INVIAS Y OTRO | GRC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)

PBX: 3770600 Ext. 1485

Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Bogotá D.C., Colombia

www.invias.gov.co**De:** Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>**Enviado:** martes, 13 de junio de 2023 4:04 p. m.**Para:** Notificaciones Judiciales Invias <njudiciales@invias.gov.co>; Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>**Cc:** Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>; Miguel Francisco Agudelo Manrique <magudelo@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>**Asunto:** COMPLEMENTACIÓN CUENTA DE COBRO, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIA | RADICACIÓN: 52103 DEL 02 DE JULIO DE 2019 | DTES: MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS | DDOS INVIAS Y OTRO | GRC

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS (INVÍAS)

Dirección: Calle 25G # 73B-90

Complejo Empresarial Central Point- Bogotá D.C.

Correo electrónico: njudiciales@invias.gov.co

E. S. M.

Referencia: Complementación cuenta de cobro, solicitud de cumplimiento y pago de sentencia (Art. 192 Ley 1437 de 2011)**Radicado cuenta de Cobro:** 52103 del 02 de julio de 2019.**Demandantes:** María Edelmira Quintero Quintero y otros.**Demandados:** Instituto Nacional de Vías INVIAS y otros.**Radicación:** 76001-23-31-000-2004-05560-00.**Despacho de Origen:** Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Fernando Augusto García Muñoz**Acción de Reparación Directa**

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, cesionaria de los derechos de crédito reconocidos en la sentencia de segunda instancia de calenda 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de reparación directa distinguido con radicado 76001233100020040556001 (41173), de conformidad con lo prescrito en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en armonía con el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015, procedo, en primer lugar, a atender los requerimientos efectuados por el INVIAS mediante oficio OAJ 32497 del 24 de junio de 2021, con asunto: “Solicitud Documentos”, y en segundo lugar, a dar alcance y complementar la cuenta de cobro que se radicó ante ustedes el día 02 de julio de 2019, bajo el radicado 52103.

Agradezco enviar acuse de recibo.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. 19.395.114 de Bogotá
T.P. No. 39.116 del C.S.J.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

SDJ 48689

Bogotá D. C., 17 de agosto de 2023

Doctor

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

ABOGADO

HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S

Avenida 6 A Bis No. 35N-100, oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape

3155776200.

notificaciones@gha.com.co

Cali - Valle Del Cauca

Asunto: Respuesta a Entrada No. 57929 con Fecha 13/06/2023

Respetado doctor Herrera Avila,

Muy comedidamente me refiero a su oficio con radicado No. 57929 del 13 de julio de 2023, a través de cual allega complementación a la solicitud de cumplimiento y pago de sentencia a favor María Edelmira Quintero Quintero y otros, con Radicación: 76001-23-31-000-2004-05560-00 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos consagrados en el Decreto 2469 de 2015 para el crédito judicial contenido en el Expediente a nombre de MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS, se requiere que haga llegar a esta dependencia, copia de los documentos de identidad, teléfono, correo electrónico y dirección del domicilio de los beneficiarios de la sentencia.

En consecuencia, una vez contemos con todos los documentos y con el fin de dar aplicación al artículo 15 de la Ley 962 de 2005, se procederá a asignar turno de pago, atendiendo la fecha de cumplimiento de requisitos.

Cordial saludo,



Firmado
digitalmente por
ADRIANA CAROLINA
PIEDRAHITA
AREVALO

ADRIANA CAROLINA PIEDRAHITA ÁREVALO

Subdirectora Defensa Jurídica

Proyecto: AMPARO RIVAS POLO

Reviso: JENNIFER PATRICIA SEGURA

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS (INVÍAS)

Dirección: Calle 25G # 73B-90

Complejo Empresarial Central Point- Bogotá D.C.

Correo electrónico: njudiciales@invias.gov.co

E. S. M.

Radicado Memorial de Cuenta de Cobro: 52103 del 02 de julio de 2019.

Radicado del Memorial de Respuesta: 58010 del 08 de junio del 2023.

Demandantes: María Edelmira Quintero Quintero y otros.

Demandado: Instituto Nacional de Vías INVÍAS.

Radicación Proceso Judicial: 76001-23-31-000-2004-05560-01.

Despacho de Origen: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Fernando Augusto García Muñoz

Acción de Reparación Directa

Asunto: Contestación al oficio SDJ 48689

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, obrando en nombre y representación de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con el NIT 900701533-7, legalmente constituida y domiciliada en el Distrito de Santiago de Cali, como se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali que se anexa a este escrito, persona jurídica que actúa en calidad de cesionaria del crédito contenido en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 30 de agosto del 2018, notificada el día 4 de octubre del mismo año, a través de la cual declaró administrativamente responsable al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) y lo condenó a pagar la cifra de 400 SMLMV, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001233100020040556001; respetuosamente procedo a dar respuesta al oficio SDJ 48689 del 17 de agosto del 2023, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Tal como se indicó en el memorial de complementación a la cuenta de cobro de la referencia, el 23 de diciembre del 2021 entre los demandantes, LUZ NANCY SEGURA QUINTERO; HUMBERTO SALAZAR CABAL; MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA y CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA, y G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S., se celebró un contrato de cesión de los derechos de crédito reconocidos a ellos en la sentencia del 30 de agosto de 2018 emitida por el Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con numero de radicado 76001233100020040556001, de la cual adjunto copia.

SEGUNDO: El contrato de cesión suscrito entre LUZ NANCY SEGURA QUINTERO, HUMBERTO SALAZAR CABAL; MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA y CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA y G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S. señala por medio de su clausula segunda el objeto del mismo siendo éste:

“ Mediante el presente acto la parte CEDENTE, integrada por LUZ NANCY SEGURA QUINTERO; HUMBERTO SALAZAR CABAL; MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA y CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA, cede en favor de la parte CESIONARIA identificada atrás, todos los derechos de crédito contenidos y que se deriven de la sentencia que se indica adelante, incluida la totalidad de la indemnización a la que se condenó el INVÍAS, mediante providencia del 30 de agosto de 2018, notificada a través del Edicto No. 650 del 4 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Diaz del Castillo, Acción de Reparación Directa, Demandantes: Humberto Salazar Cabal, Juan David Salazar Segura, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Luz Nancy Segura Quintero, Demandados: Nación-Mintransporte, Invias y el Departamento del Valle del Cauca, Radicación 76001233100020040556001 (41173). Se cede también el derecho de la indemnización concedido en favor del menor Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), quien por su fallecimiento ocurrido el 12 de septiembre de 2008, cuando contaba apenas con once (11) años de edad fue heredado por Luz Nancy Segura

Quintero y Humberto Salazar Cabal, a quienes se les adjudicó en la sucesión el 100% del mismo y en tal virtud en este acto ceden ese derecho heredado a la sociedad CESIONARIA, transfiriéndoselo íntegramente.

PARÁGRAFO PRIMERO: la parte CEDENTE transfiere así por medio de este acto a título de cesión a la parte CESIONARIA, todos los derechos de crédito, para que cobre y reciba para si el valor de la indemnización que deberá pagar el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS incluidos los intereses causados y los que se llegaren a causar, transfiriendo a la CESIONARIA íntegramente el derecho litigioso y a la indemnización reconocida a favor de Luz Nancy Segura Quintero, Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y el menor fallecido Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), mediante la sentencia referida en esta cláusula. Igualmente se estipula respecto del crédito reconocido a este último en tal providencia, que los suscritos LUZ NANCY SEGURA QUINTERO Y HUMBERTO SALAZAR CABAL, como herederos de JUAN DAVID SALAZAR SEGURA (Q.E.P.D.) y adjudicatarios del derecho a la liquidación de la sucesión, ceden íntegramente ese derecho a la CESIONARIA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad CESIONARIA notificará al INVIAS de esta cesión, para lo cual la parte CEDENTE la faculta sin limitación.”.

TERCERO: Por medio de dos consignaciones, una realizada el 21 y otra realizada el 23 de diciembre del 2021, cuyos soportes anexo, se ha pagado a los beneficiarios originales de la sentencia citada la totalidad de las sumas estipuladas en el contrato de cesión de derechos. De manera que actualmente, la única beneficiaria del crédito contenido en la comentada sentencia del 30 de agosto de 2018 es la sociedad que represento, **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**

CUARTO: En este orden de ideas, partiendo de que **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.** es la única beneficiaria de los créditos reconocidos en la sentencia previamente señalada por lo cual, procedo a atender el requerimiento formulado por la entidad, de conformidad con el literal a del artículo 2.8.6.5.1 del decreto 2469 del 2015, así:

Datos del Beneficiario del Crédito Contenido en la Sentencia del 30 de agosto de 2018:

RAZÓN SOCIAL:	G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.
NIT:	900701533-7
TELÉFONO:	(602) 659 4075.
CORREO ELECTRÓNICO:	notificaciones@gha.com.co y gherrera@gha.com.co
DIRECCIÓN:	Avenida 6 A Bis No. 35N-100, oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape, de la ciudad de Cali.
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.395.114

De igual forma debo señalar que estos datos ya habían sido aportados en ocasiones pasadas como en presentación de la cuenta de cobro, a la cual le correspondió el número de radicado 52103 del 02 de julio de 2019, y la complementación a la misma, a la cual le correspondió el número de radicado 58010 del 08 de junio del 2023, sin embargo, en aras de atender este requerimiento se aportan nuevamente.

Por otro lado, con el ánimo de no dejar ninguna información pendiente procedo a informar los datos de quienes a la fecha ya no son beneficiarios del crédito contenido en la sentencia tantas veces comentada, sino que fungen como cedentes del mismo:

NOMBRE:	LUZ NANCY SEGURA QUINTERO
CÉDULA:	31.200.978
TELÉFONO:	3184349413
CORREO ELECTRÓNICO:	luznancyseguraquintero@gmail.co
DIRECCIÓN:	Carrera 1 e norte # 83-16 Barrio Comfenalco

NOMBRE: HUMBERTO SALAZAR CABAL
CÉDULA: 2.631.290
TELÉFONO: 3184349413
CORREO ELECTRÓNICO: [No tiene correo electrónico](#)
DIRECCIÓN: Carrera 1 e norte # 83-16 Barrio Comfenalco

NOMBRE: MARÍA EDELMIRA QUINTERO
CÉDULA: 29.201.813
TELÉFONO: 3184349413
CORREO ELECTRÓNICO: [No tiene correo electrónico](#)
DIRECCIÓN: Carrera 1 e norte # 83-16 Barrio Comfenalco

NOMBRE: JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA
CÉDULA: 94.421.750
TELÉFONO: 3187961033
CORREO ELECTRÓNICO: celisdegurajoseleonardo@gmail.com
DIRECCIÓN: Vereda Unión Cascajeros Corregimiento de Alta Flor – Tuluá (Valle del Cauca)

NOMBRE: CLAUDIA ALEJANDRA SEGURA
CÉDULA: 1.144.144.176
TELÉFONO: 3167742174
CORREO ELECTRÓNICO: [No tiene correo electrónico](#)
DIRECCIÓN: Carrera 1 e norte # 83-16 Barrio Comfenalco

Finalmente, es preciso recordar que el demandante Juan David Salazar Segura, menor de edad para la fecha de presentación de la demanda, falleció antes de haberse proferido la sentencia de segunda instancia. En este orden de cosas, no se indicará ningún dato suyo.

Como soporte de lo antes señalado apporto copia digital de los siguientes elementos:

- Contrato de cesión de derechos firmado entre **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, representada por **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, y los beneficiarios originales de la sentencia 76001233100020040556001 del Consejo de estado, quienes son representados en este acuerdo por **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**, este se aporta en su totalidad incluyendo el OTROSI No1.
- Soportes de los pagos realizados a la señora **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO** quien en este acto representa a los demás beneficiarios de la sentencia antes señalada siendo estos: el pago realizado el día 21 de diciembre del año 2021 por un valor de 15000000 de pesos colombianos el cual figura en el soporte No.856132 y el pago realizado el día 23 de diciembre del año 2021 por un valor de 153.000.000 de pesos colombianos el cual figura en el soporte No.856135.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**
- Cédulas de ciudadanía de **HUMBERTO SALAZAR CABAL**, identificado con la cedula de ciudadanía 2.631.290; **MARÍA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO**, identificada con la cedula de ciudadanía 29.201.813; **JOSÉ LEONARDO CELIS SEGURA**, identificado con la cedula de ciudadanía 94.421.750; **CLAUDIA ALEJANDRA MOSQUERA SEGURA**, identificada con la cedula de ciudadanía 1.144.144.176; y **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**, identificada con la cedula de ciudadanía 31.200.978
- Certificado de cuenta corriente No.06621440138 de Bancolombia con titularidad de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.** en la cual deberá ser consignado el pago.
- Mi cedula de ciudadanía
- Registro Civil de Defunción de **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA**
- Escritura Publica No.3183 del 28 de septiembre del 2021 Por medio de la cual se realiza la sucesión del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA** en favor de **HUMBERTO SALAZAR CABAL** y **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**

Teniendo en cuenta lo antes mencionado respetuosamente solicito sea ordenado el pago de las sumas señaladas por el Consejo de Estado en la sentencia con numero de radicado 76001233100020040556001, en adición a los intereses correspondientes, a nombre de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.** en la cuenta bancaria N°06621440138 de Bancolombia al menor termino posible teniendo en cuenta que se encuentra acreditada su calidad de beneficiaria del crédito.

Sin más consideraciones.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Radicación Respuesta Oficio SDJ-48689

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Jue 07/09/2023 16:31

Para:njudiciales@invias.gov.co <njudiciales@invias.gov.co>

CC:arivas@invias.gov.co <arivas@invias.gov.co>

 1 archivos adjuntos (18 MB)

CONTESTACION OFICIO SDJ-48689.pdf;

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS (INVÍAS)

Dirección: Calle 25G # 73B-90

Complejo Empresarial Central Point- Bogotá D.C.

Correo electrónico: njudiciales@invias.gov.co

E. S. M.

Radicado Memorial de Cuenta de Cobro: 52103 del 02 de julio de 2019.**Radicado del Memorial de Respuesta:** 58010 del 08 de junio del 2023.**Demandantes:** María Edelmira Quintero Quintero y otros.**Demandado:** Instituto Nacional de Vías INVIAS.**Radicación Proceso Judicial:** 76001-23-31-000-2004-05560-01.**Despacho de Origen:** Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Fernando Augusto García Muñoz**Acción de Reparación Directa****Asunto:** Contestación al oficio SDJ 48689

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, obrando en nombre y representación de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con el NIT 900701533-7, legalmente constituida y domiciliada en el Distrito de Santiago de Cali, como se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali que se anexa a este escrito, persona jurídica que actúa en calidad de cesionaria del crédito contenido en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 30 de agosto del 2018, notificada el día 4 de octubre del mismo año, a través de la cual declaró administrativamente responsable al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) y lo condenó a pagar la cifra de 400 SMLMV, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001233100020040556001; respetuosamente procedo a dar respuesta al oficio SDJ 48689 del 17 de agosto del 2023.

Adjunto a esta comunicación se envía el memorial de respuesta, así como los documentos señalados en el mismo

Cordialmente;

 [CONTESTACION OFICIO SDJ-48689.pdf](#)**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

**NOTIFICACIONES**

+57 315 577 6200 - 602 659 4075 / notificaciones@gha.com.co





Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S.
Sigla:	H & A - ABOGADOS S.A.S. O H & A - CONSULTING S.A.S.
Nit.:	900701533-7
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	892121-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	12 de febrero de 2014
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	31 de marzo de 2023
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	AV 6 A BIS # 35 NORTE - 100 OF 212
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	gherrera@gha.com.co
Teléfono comercial 1:	6594075
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3155776200

Dirección para notificación judicial:	AV 6 A BIS # 35 NORTE - 100 OF 212
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	notificaciones@gha.com.co
Teléfono para notificación 1:	6594075
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3155776200

La persona jurídica G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 13 de enero de 2014 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2014 con el No. 2015 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 15 de agosto de 2014 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de septiembre de 2014 con el No. 11546 del Libro IX ,cambio su nombre de G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS . por el de G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. . Sigla: H & A - ABOGADOS S.A.S. O H & A - CONSULTING S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal el ejercicio profesional del derecho y afines, a nivel nacional e internacional, para lo cual podrá emplear profesionales del derecho y de otras ramas vinculados como empleados, socios, asociados, subcontratistas y en general cualquier tipo de vinculación legal o convencional, así mismo la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial y/o civil lícita en Colombia o en el extranjero. Para el desarrollo del presente objeto social, la sociedad podrá realizar cualquiera de las siguientes actividades, sin limitarse a estas:

- 1.) Prestar servicios de asesoría, consultoría jurídica y administrativa en general, así como asesoría, representación y acompañamiento en litigio en todas las áreas del derecho y en todo el territorio nacional e internacional.
- 2) Prestar asistencia jurídica, en todas las áreas del derecho, directamente o a través de sus abogados socios o abogados consultores, asociados o subcontratados.
- 3) Prestar asesoría, acompañamiento y representación en procesos de negociación de cualquier naturaleza.
- 4) Prestar asesoría, acompañamiento y representación en procesos de negociación colectiva.
- 5) Prestar dentro de sus servicios, según lo ameriten las circunstancias, asesorías técnicas y financieras, con el apoyo de los especialistas respectivos.
- 6) Asesorar, adelantar y acompañar procesos de constitución, creación, transformación, disolución y liquidación de cualquier tipo de sociedad.
- 7) Ejercer la representación judicial, extrajudicial, corporativa o administrativa de sus clientes ante las autoridades judiciales, administrativas y entes de carácter privado.
- 8) Gestionar actividades relacionadas con la capacitación en materias jurídicas y afines.

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- 9) Ofrecer, orientar y dictar cursos en materias jurídicas, y en diversas ramas.
- 9) Participar en negocios relacionados con su objeto social, así como hacer inversiones o aportes en negocios, actividades o compañías relacionadas con su objeto social o que tenga relación con las personas que atienda o represente,
- 10) Gestionar para sí, sus socios o terceros, todo tipo de negocios, servicios o proyectos de carácter o naturaleza legal o jurídica, frente a personas de derecho privado o público, nacionales o extranjeras,
- 11) Prestar sus servicios a personas naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individuales o conjuntas.
- 12) Realizar todos los actos y contratos que considere pertinentes para el desarrollo de su objeto social, tales como, comprar y vender bienes muebles o inmuebles, tomarlos o darlos en arrendamiento, hipoteca, anticresis, leasing, fiducia, etc.; dar o recibir dinero y bienes a cualquier título; celebrar contratos de mandato, representaciones y agencia, otorgar y recibir garantías, negociar títulos valores y efectos comerciales, celebrar contratos de asociación, joint venture, cuentas en participación, consorcios, uniones temporales, promesa de sociedades futuras, o cualquier forma de asociación, con o sin dar lugar a la creación de nuevas personas jurídicas; la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas particulares o del estado o mixtas que desarrollen el mismo o similar objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con este, celebrando mancomunadamente lo que consideren conveniente para el logro de su objetivo social.
- 13) Adquirir toda clase de bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, tomar y dar en arrendamiento, depósito o comodato los bienes sociales, constituir o cancelar gravámenes, dar y recibir dinero en mutuo, contratar empréstitos bancarios con o sin garantía; importar, exportar, procesar, comprar, fabricar y vender cualquier clase de bien.
- 14) Disponer de cuentas corrientes, de ahorro, de depósito de dinero o de títulos valores e inversiones en entidades financieras o comerciales de Colombia y el exterior.
- 15) Realizar operaciones comerciales y civiles en cualquier país del extranjero y a nivel nacional.
- 16) Adquirir acciones y hacer aportes en otras sociedades.
- 17) Realizar cualquier otra actividad económica tanto en Colombia como en el extranjero.

Parágrafo 1. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexas o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Parágrafo 2: La sociedad podrá además crear sucursales, agencias, establecimientos y/o dependencias en cualquier lugar del país y/o en el exterior, por orden de la asamblea general de accionistas, quien además determinara el cierre de aquellas dependencias y asimismo fijará los límites de las facultades que se le confieren a los administradores de ellas con los correspondientes poderes que se les otorguen.

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$1,000,000,000
No. de acciones:	1,000,000
Valor nominal:	\$1,000

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$1,000,000,000
No. de acciones:	1,000,000
Valor nominal:	\$1,000

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$1,000,000,000
No. de acciones:	1,000,000
Valor nominal:	\$1,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente, quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no y podrá tener suplentes.

En caso de falta temporal del gerente y en las absolutas, mientras se prevea el cargo o cuando se hallaré legalmente inhabilitado para actuar en un asunto determinado, el gerente sera remplazado por el primer o segundo suplente designados para tal efecto, quienes podrán actuar alternativamente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. el representante legal de la sociedad tiene a su cargo la administración inmediata de la sociedad y en tal virtud le están asignadas las siguientes funciones y atribuciones: a) llevar la representación de la entidad, tanto judicial como extrajudicialmente; b) ejecutar los acuerdos y decisiones del accionista único o de la asamblea general de accionistas, cuando exista más de un socio; c) otorgar facultades especiales o generales a apoderados judiciales o extrajudiciales; d) celebrar los actos, operaciones y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacione con la existencia o el funcionamiento de la sociedad, sin límite de cuantía; e) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; f) presentar a la reunión ordinaria anual de la asamblea general de accionistas, cuando exista más de un socio, los estados financieros de propósito general, junto con un informe escrito relacionado con la situación y la marcha de la entidad, sugiriendo las innovaciones que convenga introducir para el mejor servicio de la sociedad; g) crear los empleos necesarios para la debida marcha de la sociedad, señalar sus funciones y asignaciones y hacer los nombramientos correspondientes; h) tomar todas las medidas que exija la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados e

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad; i) convocar a la asamblea general, cuando haya más de un socio y cuando proceda hacerlo conforme a la ley o a estos estatutos; j) presentar al accionista único ó a la asamblea general de accionistas cuando exista más de un socio, estados financieros intermedios y suministrarle todos los informes que ésta solicite en relación con la empresa y sus actividades; k) ejercer las funciones que le delegue el accionista único ó a la asamblea general de accionistas cuando exista más de un socio. l) cumplir y hacer que se cumplan en oportunidad y debidamente todas las exigencias de las leyes en relación con el funcionamiento y las actividades de la sociedad; y, m) las demás que le correspondan conforme a la ley y a estos estatutos.

Parágrafo 1. En todo caso el representante legal, según el caso, salvo autorización previa y expresa en contrario, por parte del accionista único ó a la asamblea general de accionistas cuando exista más de un socio, solo realizará actos que comprendan única y exclusivamente la administración de la sociedad, en virtud de lo cual no podrá comprometer a la compañía como garante de obligaciones de terceros.

parágrafo 2- el representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. en las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 13 de enero de 2014, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2014 con el No. 2015 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA	C.C.19395114

Por Acta No. 013 del 28 de mayo de 2020, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de julio de 2020 con el No. 8024 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ANDRES HERRERA SIERRA	C.C.1151935329
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUISA FERNANDA HERRERA SIERRA	C.C.1130669835

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROFESIONALES EN DERECHO

Por documento privado del 19 de octubre de 2017, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de octubre de 2017 con el No. 16363 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA	C.C.19395114

Por documento privado del 26 de marzo de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de abril de 2019 con el No. 5439 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	LUISA FERNANDA HERRERA SIERRA	C.C.1130669835
PROFESIONAL EN DERECHO	KELLY ALEJANDRA PAZ CHAMORRO	C.C.1085297029
PROFESIONAL EN DERECHO	SANTIAGO ROJAS BUITRAGO	C.C.1015429338

Por documento privado del 22 de agosto de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2019 con el No. 15099 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	LORENA JURADO CHAVES	C.C.1032409539
PROFESIONAL EN DERECHO	DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES	C.C.1061751492
PROFESIONAL EN DERECHO	FELIPE PUERTA GARCIA	C.C.1088277101
PROFESIONAL EN DERECHO	LUZ AMPARO RIASCOS ALOMIA	C.C.1061705937

Por Acta No. 013 del 28 de mayo de 2020, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de julio de 2020 con el No. 8025 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	GONZALO RODRIGUEZ CASANOVA	C.C.1144201314
PROFESIONAL EN DERECHO	JUAN SEBASTIAN LONDOÑO GUERRERO	C.C.1094920193

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por documento privado del 25 de enero de 2021, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2021 con el No. 1156 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	MIGUEL FRANCISCO AGUDELO MANRIQUE	C.C.79723754
PROFESIONAL EN DERECHO	NESTOR RICARDO GIL RAMOS	C.C.1114033075
PROFESIONAL EN DERECHO	NICOLAS LOAIZA SEGURA	C.C.1107101497
PROFESIONAL EN DERECHO	JAVIER ANDRES ACOSTA CEBALLOS	C.C.1144100309

Por documento privado del 11 de febrero de 2021, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 2021 con el No. 2441 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ	C.C.1016094369

Por documento privado del 17 de febrero de 2022, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2022 con el No. 2850 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	KENNIE LORENA GARCIA MADRID	C.C.1061786590
PROFESIONAL EN DERECHO	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ MUÑOZ	C.C.1126003200
PROFESIONAL EN DERECHO	TIFFANY DEL PILAR CASTAÑO TORRES	C.C.1022413599

Por documento privado del 17 de junio de 2022, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 2022 con el No. 12103 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	CATALINA CHAPARRO CASAS	C.C.1113659671
PROFESIONAL EN DERECHO	MARIA PAULA CASTAÑEDA HERNANDEZ	C.C.1144104104
PROFESIONAL EN DERECHO	DIANA CAROLINA BENITEZ FREYRE	C.C.1118256728
PROFESIONAL EN DERECHO	DANIELA QUINTERO LAVERDE	C.C.1234192273

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por documento privado del 22 de marzo de 2023, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2023 con el No. 5190 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	MAYERLY AYALA RIVERA	C.C.1113696485
PROFESIONAL EN DERECHO	ANA MARIA BARON MENDOZA	C.C.1019077502
PROFESIONAL EN DERECHO	JESSICA BENAVIDES PLAZA	C.C.1144089245
PROFESIONAL EN DERECHO	JORGE LUIS BERMUDEZ ROJAS	C.C.1144080285
PROFESIONAL EN DERECHO	JUAN SEBASTIAN BOBADILLA VERA	C.C.1032485932
PROFESIONAL EN DERECHO	CAMILA ANDREA CARDENAS HERRERA	C.C.1085332415
PROFESIONAL EN DERECHO	BRENDA PATRICIA DIAZ VIDAL	C.C.1018508364
PROFESIONAL EN DERECHO	DAVID ALEXANDER GAVIRIA HOYOS	C.C.1144104258
PROFESIONAL EN DERECHO	DAVID LEONARDO GOMEZ LEONARDO	C.C.1083812860
PROFESIONAL EN DERECHO	DAISY CAROLINA LOPEZ ROMERO	C.C.1085324490
PROFESIONAL EN DERECHO	GERARDO QUICENO GOMEZ	C.C.1088337912
PROFESIONAL EN DERECHO	VALERIA SUAREZ LABRADA	C.C.1005870336
PROFESIONAL EN DERECHO	NICOLL ANDREA VELA GARCIA	C.C.103378820419-may-201
PROFESIONAL EN DERECHO	KEVIN ALEXANDER VILARRAGA ARIAS	C.C.144090875
PROFESIONAL EN DERECHO	ANGIE NATHALIA ZAMBRANO ALMONACID	C.C.1094963116
PROFESIONAL EN DERECHO	ANGIE LUCIA GARZON MOSQUERA	C.C.1143861565

Por documento privado del 28 de marzo de 2023, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de abril de 2023 con el No. 6073 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	CATHERINE ANDREA PINEDA MOLINA	C.C.1037607414
PROFESIONAL EN DERECHO	ALEJANDRO DE PAZ MARTINEZ	C.C.1020845196
PROFESIONAL EN DERECHO	MARGARETH LLANOS ACUÑA	C.C.1046430635
PROFESIONAL EN DERECHO	KAROL VANESSA PEREZ MENDOZA	C.C.1024590319

Por documento privado del 19 de julio de 2023, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2023 con el No. 14324 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN DERECHO	ALEJANDRA MURILLO CLAROS	C.C.1144076582
PROFESIONAL EN DERECHO	JUAN PABLO CALVO GUTIERREZ	C.C.1088310060
PROFESIONAL EN DERECHO	GONZALO ANDRES JIMENEZ TRIVIÑO	C.C.1015468451
PROFESIONAL EN DERECHO	JUAN CAMILO CASTAÑO BUITRAGO	C.C.1088326984
PROFESIONAL EN DERECHO	CARLOS ARTURO PRIETO SUAREZ	C.C.3229696
PROFESIONAL EN DERECHO	JUAN DAVID VERGARA MELO	C.C.1018478244
PROFESIONAL EN DERECHO	LUIS ALEJANDRO ZAMUDIO CAICEDO	C.C.1085286256

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROFESIONAL EN DERECHO	FABIANA RODRIGUEZ SALAS	C.C.1018493830
PROFESIONAL EN DERECHO	GIOVANNA CAROLINA ROMERO CIODARO	C.C.1107530561
PROFESIONAL EN DERECHO	SIMON EDUARDO PEÑA ARIZA	C.C.1144099649
PROFESIONAL EN DERECHO	LUIS FELIPE LENGUA MENDOZA	C.C.1151956840
PROFESIONAL EN DERECHO	MARIA FERNANDA JIMENEZ PIARPUSAN	C.C.1085321789
PROFESIONAL EN DERECHO	NATALIA ESQUIVEL VEGA	C.C.1107085330
PROFESIONAL EN DERECHO	VALENTINA CASAS VALENCIA	C.C.1113692596
PROFESIONAL EN DERECHO	DIANA CAROLINA BURGOS CASTILLO	C.C.1022396024
PROFESIONAL EN DERECHO	PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO	C.C.1193091539

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 006 del 04 de marzo de 2016, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de marzo de 2016 con el No. 3251 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL	MARIA DEL SOCORRO SALAMANCA P.	C.C.31147621
PRINCIPAL		T.P.6044-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 1 del 15/08/2014 de Asamblea De Accionistas	11546 de 01/09/2014 Libro IX
ACT 005 del 21/09/2015 de Asamblea De Accionistas	20299 de 22/09/2015 Libro IX
ACT 013 del 28/05/2020 de Asamblea De Accionistas	8026 de 03/07/2020 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MEDIANA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$8,238,108,204

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.


De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 8956273, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823UNNYM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



Ana M. Lengua B.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.395.114**

HERRERA AVILA

APELLIDOS

GUSTAVO ALBERTO

NOMBRES

Gustavo Alberto Herrera Avila
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1960**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

06-OCT-1978 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100100-00252282-M-0019395114-20100825

0023575747A 1

34475431

304816

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

39116-D2

26/08/1986

16/06/1986

Tarjeta No.

Fecha de
Expedición

Fecha de
Grado

GUSTAVO ALBERTO
HERRERA AVILA

19395114

VALLE
Consejo Seccional

MILITAR NUEVA GRANAD
Universidad



Francisco Escobar Henríquez
Presidente Consejo Superior de la Judicatura

[Handwritten signature]

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.